

1974
2024

Cinco décadas de progreso

A propósito de los 50 años de ANIF, reflexionamos sobre las transformaciones que ha sufrido el país en las últimas cinco décadas. ¿En qué hemos avanzado? ¿En qué nos hemos estancado? ¿Qué debemos hacer en los próximos años? Expertos analizan temas clave para el desarrollo de Colombia.

EDUCACIÓN

Por **Adolfo Meisel** e **Iván Luzardo**,
de la Universidad del Norte

INFRAESTRUCTURA

Por **Milena López**,
de Corficolombiana

MERCADO DE CRÉDITO

Por **Luz Magdalena Salas**,
de ANIF

Fondo de Inversión Colectiva Occirenta

Te acompañamos a cumplir las metas de tu empresa



Portafolio de **bajo riesgo**, sin pacto de **permanencia** y con alta participación en **activos de corto plazo**.



Inversión en emisores con la más **alta calidad crediticia AAA y AA+**.



Disposición de recursos en cualquier momento para tus necesidades de liquidez.



Contáctate con nosotros
escaneando este Código QR

Fiduciaria de Occidente S.A es una sociedad Fiduciaria. Las obligaciones de la Fiduciaria son de medio y no de resultado. "El contenido de la presente comunicación o mensaje es solo informativo y no constituye una recomendación profesional ni una asesoría para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen". La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el respectivo fondo y puede tener riesgo de pérdida, inclusive la totalidad de la misma.

SUMARIO

5

EDITORIAL
50 años en la construcción de ideas
Por José Ignacio López G.,
presidente de ANIF.

6

EN LA MIRA
Datos y cifras 1974 vs 2024

8

ESPECIAL 50 AÑOS ANIF

8 ANIF: cinco décadas de contribución al debate económico
Por José Ignacio López G.,
presidente de ANIF.

14 Los 50 años de Carta Financiera

16 Hablan los expresidentes de ANIF

20 Luis Carlos Sarmiento y ANIF
Por Santiago Montenegro.

24 **Columna**
Centros de pensamiento: gestión y relevancia para Colombia
Por Sergio Clavijo.

26

PORTADA

26 **Introducción**
1974 vs 2024

28 Una prioridad acordada
Por Olga Lucia Acosta Navarro
Economista, miembro de la Junta
directiva del Bancode la República.

32 Una mirada alternativa al
problema de la informalidad
Por Cristina Fernández Mejía,
Fedesarrollo.

36 Una revolución silenciosa
Por Adolfo Meisel Roca e
Iván Luzardo Luna,
Universidad del Norte.



41 **Columna**
Reflexiones sobre convergencia
Por Diego Pereira,
director ejecutivo y Economista
Jefe del Cono Sur y Los Andes
de JP Morgan.

42 Motor de equidad
Por Anwar Rodríguez,
Camila Ciurlo y Paul Díaz
vicepresidente y asesores de
salud ANDI.

- 44** La seguridad perdida
Por Jorge Restrepo,
CERAC.



- 46** Infraestructura en Colombia
Por Milena López Rocha,
Corficolombiana.



- 49** El mercado de crédito en Colombia
Por Luz Magdalena Salas,
vicepresidenta de ANIF.

- 52** "Estas fueron décadas de progreso y desarrollo, con retos aún por delante"
Entrevista a Fabio Villegas

- 54** Retos de un país que avanza, pero sigue en construcción



- 58 COLUMNA**
"Attention is all you need"
Por Tomás Rodríguez,
Universidad de los Andes.

Bandera

Presidente

José Ignacio López G.

Vicepresidente

Luz Magdalena Salas B.

Secretaría General

Tatiana Mendoza L.

Comité editorial

Ángela Hurtado
Jorge Alberto Restrepo
José Manuel Restrepo
Cristina Vélez
Fabio Villegas

Editora

Natalia Villegas L.

Asistente de comunicaciones

Juan Diego López P.

Diseño y diagramación

Brigitte Avellaneda C.
Dayanna Huertas S.
Sofía Penagos G.

Jefe de estudios macroeconómicos

Andrea Ríos S.

Jefe de estudios sectoriales

Fabián Suárez N.

Investigadores

Laura Llano C.
María Camila Carvajal P.
María Camila Oliveros M.
Laura Castaño O.
Thomas Martínez R.

Agencia comercial

María Inés Vanegas
Gerente Publimarch
Cel.: (57) 310 561 7197
mivanegas@publimarch.com

Impresión

Multi-impresos S.A.S

Información de contacto

www.anif.com.co
PBX: (601) 744 67 00
E-mail: anif@anif.com.co
Calle 70 A No. 7-86

Se prohíbe su reproducción con fines de publicación o divulgación a terceros.



José Ignacio López G.
PRESIDENTE DE ANIF

50 AÑOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE IDEAS

ANIF cumple 50 años y esta edición de Carta Financiera está dedicada a dicha celebración. Son cinco décadas de una institución que ha participado activamente en los debates económicos más importantes de la vida nacional. En esta edición, varios artículos rememoran algunos de los hitos más relevantes de esta historia.

Es clave recordar que ANIF tuvo un potente origen gremial a mediados de los 70, y que la primera década de éxito dio paso a una crisis existencial asociada a los problemas fiscales y financieros del país de comienzos de los 80, una situación que bien pudo haber significado el final de la institución. De no haber sido por la generosa intervención de Luis Carlos Sarmiento, la historia de ANIF habría quedado truncada prematuramente. Por eso compartimos con nuestros lectores un artículo en homenaje a su labor como presidente del Consejo de ANIF desde 1984 hasta 2015.

Este episodio de los 80 también marcó el lento pero firme proceso de transformación de la entidad, que pasó de ser un gremio para convertirse en un centro de pensamiento.

El nombre no le ha permitido a la institución desvincularse completamente de su origen y pasado gremial, pero el prefijo de Centro de Estudios Económicos ayuda a resaltar, de forma didáctica, su vocación permanente como una entidad dedicada al estudio detallado y técnico de temas económicos y financieros. Como centro de pensamiento, ANIF ha promovido todo tipo de debates académicos a lo largo de estos 50 años sobre temas tan amplios como el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal, el desarrollo empresarial y la inclusión financiera.

No resulta fácil definir un centro de pensamiento. Como modelo organizacional, la historia de los "tanques de pensamiento" se remonta a redes de humanistas del siglo XVI y XVII en Europa. La versión moderna surgió en Estados Unidos a comienzos del siglo XX, con entidades como el Fondo Carnegie para la Paz Internacional o el Instituto Brookings, creadas gracias a importantes donaciones filantrópicas. Con el correr de los años, los centros de pensamiento se extendieron a muchas latitudes y temas. En Colombia, la creación del Centro de Estudios Económicos (CEDE) de la Universidad de los Andes en 1958, la fundación de Fesarrollo en 1970 y el nacimiento

de ANIF en 1974, marcó el inicio de este tipo de instituciones en nuestro país.

Los tanques de pensamiento pueden entenderse como un puente entre la investigación académica -que, por sus características, tiene una profundidad y unos tiempos particulares- y los análisis más coyunturales que responden a la velocidad propia de los debates de políticas públicas. Estos han sido también pioneros en incursionar en divulgación y masificación de contenido. A medida que los debates sobre políticas públicas se han vuelto más abiertos e incluyentes, la dimensión divulgativa ha tomado más relevancia, en particular en áreas asociadas a las ciencias sociales, como la economía, donde la conversación es cada vez más amplia.

En resumen, los centros de pensamiento se deben a la intermediación de ideas entre el mundo académico y el universo práctico, incluyendo temas relevantes para el sector privado y los debates relacionados con política pública. En esta línea, ANIF ha mantenido como vocación el estudio y discusión de temas que aporten a las discusiones con un enfoque práctico.

Como parte central de esta edición de Carta Financiera, traemos además un especial que bien muestra el desarrollo del país durante los últimos 50 años en temas económicos clave, haciendo énfasis en los avances y en los retos aún pendientes, con una agenda propositiva para los próximos años. Invitamos a varios expertos a escribir, entre otros, sobre educación, seguridad, infraestructura, pobreza y desigualdad, temas que han estado presentes en los debates de las últimas cinco décadas y que hoy en día continúan vigentes.

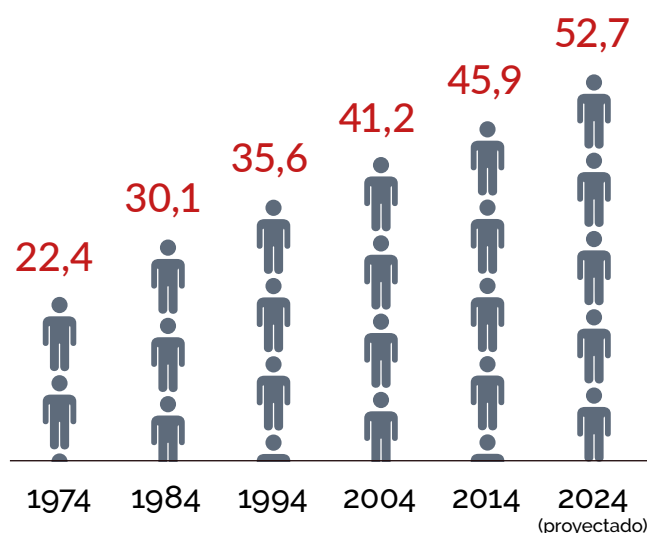
La celebración de los 50 años de ANIF es una oportunidad ideal para festejar la importancia del estudio riguroso y profundo de las ideas relevantes para el desarrollo. Carta Financiera, que también celebra 50 años, sigue siendo una apuesta concreta por visibilizar y ampliar el ámbito de debate.

ANIF, además de sus tradicionales foros, informes e investigaciones, ha incursionado recientemente en nuevos formatos multimedia para las redes sociales. Invitamos a los lectores de esta publicación a sumarse a nuestras redes sociales para participar en dicha conversación. Por el momento, ¡Felices 50 años, ANIF! Que sean muchos más. 

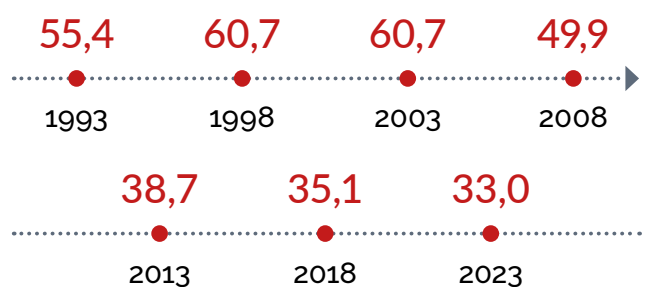
EN LA MIRA

El país de hace 50 años no es el mismo de hoy. Estas cifras muestran el avance que hemos tenido en diferentes áreas, y así mismo reflejan los retos que aún tenemos por delante.

Población (millones de personas)



Pobreza Monetaria (%)



Bajo desempeño económico a finales de los 90 y la crisis financiera de 1998 llevaron la pobreza al 62.9% en 1999, la mayor cifra desde que se tiene registro. Con el inicio del nuevo milenio, políticas de inversión y apertura comercial impulsaron un crecimiento sostenido, reduciendo la pobreza al 36.1% en 2019. Aunque la pandemia de Covid-19 afectó estos avances, en 2023 Colombia registró su menor incidencia de pobreza ubicándose en 33,0%.

Expectativa de vida



Cobertura en salud



Analfabetismo (población adulta)



Cobertura educación secundaria



Cobertura educación terciaria



Tasa de ocupación de mujeres

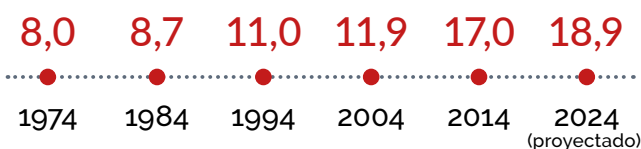


PIB

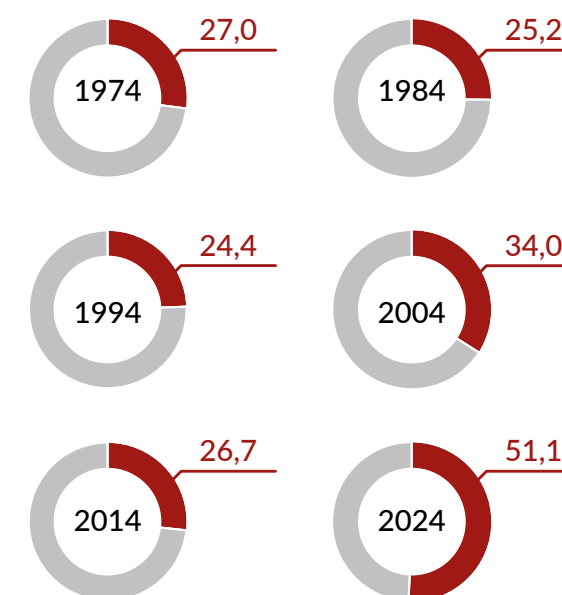
(miles de millones de pesos constantes de 2015)



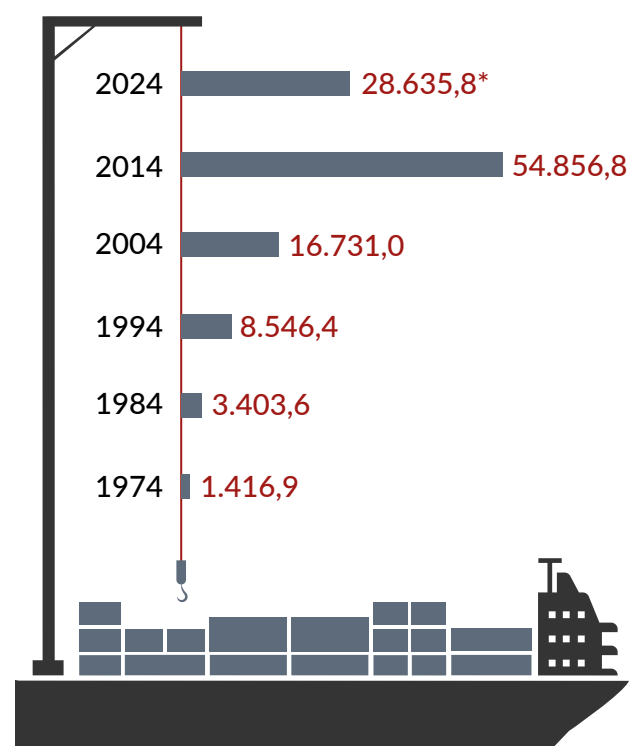
PIB per cápita (millones de pesos constantes de 2015)



Deuda externa (% del PIB)

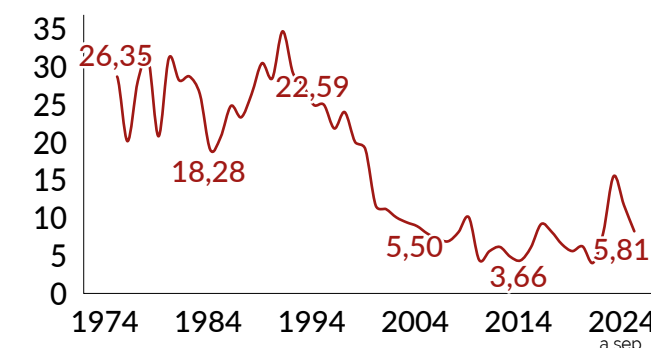


Exportaciones anuales (\$, millones de dólares FOB)



*Acumulado enero-julio.

Inflación anual (%)



Salario mínimo (\$)





ANIF: CINCO DÉCADAS DE CONTRIBUCIÓN AL DEBATE ECONÓMICO*

Desde 1974, ANIF ha sido un faro en el panorama económico de Colombia, impulsando discusiones relevantes en temas macroeconómicos, fiscales y sectoriales. Hoy es uno de los centros de pensamientos más destacados de la región.

*Esta es una versión levemente modificada del texto publicado originalmente como introducción al libro conmemorativo de los 50 años de ANIF.

Hace 50 años nació la Asociación Nacional de Instituciones Financieras. Su origen, según cuentan las anécdotas extraviadas en los anaqueles de la historia, se debió a una discrepancia de opiniones entre los banqueros de la época, que terminó en un cisma con la creación de un nuevo gremio financiero. El año era 1974 y el país celebraba las primeras elecciones tras el fin del Frente Nacional. López Michelsen iniciaba su mandato bajo el lema de cerrar brechas, como quedó consignado en el título de su Plan Nacional de Desarrollo. La tecnocracia económica llegaba al poder con la nominación de Rodrigo Botero como ministro de Hacienda

y Miguel Urrutia como director de Planeación Nacional.

Una bonanza de precios de café en los mercados externos, así como un aumento del área cultivada, que prácticamente se duplicó en el período 1974-1979, levantó el bote de la economía colombiana en los primeros años de ANIF. Las cuentas externas del país, tanto la balanza comercial como la cuenta corriente, pasaron a ser superavitarias.

El mejor desempeño de la economía colombiana coincide y participa del potente inicio gremial de ANIF. Bajo la dirección de Belisario Betancur, el primer presidente de la entidad, ANIF se convirtió rápidamente en un referente de análisis de temas financieros. En la primera edi-

ción de Carta Financiera de junio de 1974 se lee un análisis de los efectos de la inflación sobre la economía, el uso de sistemas de valor constante y una recopilación de los volúmenes de ahorro y crédito de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, que en aquel entonces operaban bajo el sistema de Unidad de Poder Adquisitivo (UPAC), nacido en 1972 durante la administración del presidente Misael Pastrana y que fue epicentro de la crisis financiera de 1999. Un mes después de dicha publicación, ANIF se estrenaba como organizador de eventos con el primer simposio sobre un tema muy presente en aquella época: la inflación. La historia no se repite, pero sí que rima, como bien diría Mark Twain.

La ambición de ANIF era en todo caso mucho mayor. Los párrafos iniciales de la primera edición de Carta Financiera claramente lo enuncian: "Antes que nada, diremos que ANIF pretende realizar un nuevo concepto de agremiación que supone ir -en su acción- más allá de los simples intereses de sus agremiados para proyectarse sobre la comunidad toda, con la seguridad de obtener un efecto positivo de regreso sobre las unidades que la componen y entre las cuales se ubican, por supuesto, nuestros agremiados".

En línea con ese propósito, el alcance de los análisis y estudios de la entidad desbordó el ámbito financiero, y la joven agremiación puso en el centro del debate temas tan relevantes como la desigualdad, la abstención electoral y la demografía. Ernesto Samper, primer vicepresidente de la entidad y sucesor de Betancur en la presidencia de la misma, llegó incluso a debatir a finales de los 70 temas tan controversiales, y precoces para la época, como el de la legalización de la marihuana. Como puede constataarse, ANIF había nacido para participar en los grandes debates nacionales.

De forma inédita para una asociación gremial, Betancur y Samper, los dos primeros presidentes de ANIF, pasarían a gobernar años más tarde los destinos del país. Marta Lucía Ramírez, que dirigió la entidad entre 1989 y 1990, ocuparía tiempo después el cargo de vicepresidente del país,



Vicente Noguera, Roberto Arenas, Belisario Betancur y Hernán Vallejo, en el simposio sobre inflación. Julio de 1974.

convirtiéndose en la primera mujer en la historia de Colombia en alcanzar dicha dignidad. La historia de ANIF no solo está marcada por sus aportes en materia económica, sino por el papel de sus dirigentes en la vida nacional.

Los primeros años de existencia gremial, en pleno auge económico, dieron paso a la turbulenta década de los 80, que inició tempranamente con el aumento súbito de las tasas de interés a nivel internacio-

nal y la crisis de la deuda en América Latina. Colombia no fue la excepción y experimentó a comienzos de dicha década una parada repentina de los flujos de financiamiento externo y una crisis financiera, exacerbada por la perversa práctica de autopréstamos, que llevaría a la bancarrota al Grupo Grancolombiano.

La quiebra de dicho conglomerado, que años después daría origen a instituciones tan importan-



Ernesto Samper (sentado en el medio) en el simposio "Marihuana mito y realidad", en donde se discutió la legalización de la marihuana. Bogotá, 1979.



Jorge Mario Eastman, Alberto Dangond, Yamid Amat, Ernesto Samper, Álvaro Leyva, Álvaro Tirado Mejía, Luis Carlos Galán.

tes y contemporáneas como Bancolombia y el Grupo Sura, así como de otras entidades financieras de la época, implicaría un reordenamiento profundo del sector bancario. Por su parte, la crisis fiscal y de financiamiento público pusieron al país en una senda de bajo crecimiento. Roberto Junguito, como ministro de Hacienda del presidente Belisario Betancur, tuvo que enfrentar un complejo panorama de ajuste

económico y negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para hacerle frente a una caída en las reservas internacionales, un limitado o nulo acceso al crédito internacional y unas precarias cuentas fiscales que llevaron al Gobierno a elevar los impuestos mediante la ampliación de la base del IVA y una sobretasa a las importaciones.

ANIF logró sortear dicha coyuntura, en gran parte por el apoyo

incondicional de Luis Carlos Sarmiento Angulo, a quien la entidad le debe un especial agradecimiento y la supervivencia en aquel momento. Frente a la salida del Banco de Colombia como afiliado de ANIF en septiembre de 1984, se planteó la posibilidad de acabar con la entidad. Pero, finalmente, prevaleció la idea de complementar las tareas del gremio bancario, Asobancaria, con las investigaciones académicas de ANIF. Como bien evoca Sergio Clavijo, presidente de ANIF entre 2005 y 2019, en su libro sobre centros de pensamiento¹, Luis Carlos Sarmiento Angulo fue esencial para que la entidad superara dicha crisis y así está consignado en las actas de septiembre de 1984, donde se lee: "Es conveniente no sólo continuar con ANIF, sino que también se requiere fortalecerla con el objetivo de que siga desempeñando una labor de defensa del sector privado".

Si bien la historia de ANIF está marcada por su éxito e influencia, han sido las crisis económicas del país a lo largo de estos 50 años las que han forjado su carácter institucional. Tras la crisis de los 80, empezó su lento pero irreversible tránsito hacia un centro de pensamiento, dejando atrás su vocación gremial inicial.

El nombre no le ha permitido desvincularse completamente de su origen y pasado gremial, pero años después se complementó con el largo, pero didáctico prefijo de Centro de Estudios Económicos, con el fin de mostrar su vocación permanente. Como centro de pensamiento, ANIF ha brillado con luz propia, promoviendo debates académicos en temas tan amplios como el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal, el desarrollo empresarial y la inclusión financiera.

La convulsionada época de los 80 dio paso a una dinámica década de los 90, cuando el país experimentó grandes cambios en su estructura económica. Desde ANIF, la presidencia de Eduardo Gaitán, a cargo de una entidad renovada y



Luis Carlos Sarmiento, Ernesto Samper y Javier Fernández durante la celebración de los 20 años de ANIF en la Asamblea General de 1994.

¹ Clavijo, S. (2007). El mercado de las ideas y los centros de pensamiento. El caso de la ANIF. Centro de Estudios Económicos. ANIF. Bogotá.



Carlos Andrés Pérez, expresidente de Venezuela; Armando Montenegro, presidente de ANIF; Mauricio Cárdenas, director de Fedesarrollo; Alfonso López Michelsen, expresidente de Colombia y Andrés Langebaek, vicepresidente de ANIF.

Horacio Serpa, Antanas Mockus, Nohemí Sanín, Alfonso Valdivieso, General Harold Bedoya, candidatos presidenciales en 1998.

empoderada bajo la dirección de Luis Carlos Sarmiento como presidente del Consejo de la Asociación, inició un período de nuevos informes económicos y foros temáticos. Marta Lucía Ramírez continuó con dichos esfuerzos, incorporando los foros macroeconómicos en alianza con Fedesarrollo, que por muchos años han marcado el ritmo del debate de coyuntura económica del país. Javier Fernández profundizó el alcance de los informes de la entidad con estudios sectoriales, como la Guía Empresarial y de las publicaciones de Riesgo Industrial y de Comercio. Posteriormente, tanto Armando como Santiago Montenegro,

brillantes economistas y hermanos, ampliaron dichas publicaciones con éxito, llevando no solo los eventos de ANIF a otras ciudades del país, sino también incorporando nuevos estudios sobre comercio externo y la realidad financiera de las empresas pequeñas y medianas.

Fabio Villegas, uno de mis primeros jefes -y de los mejores que he tenido-, incorporó a los eventos que eran ya tradicionales una feria de servicios para Mipymes, y con ayuda de Natalia Salazar, su coequipera de aquel momento, lanzó la Gran Encuesta Mipyme, pionera en su momento y relevante aún en la actualidad. Sergio Clavijo, profe-

sor y mentor, expandió el universo de productos y estudios de ANIF en muchas dimensiones, siendo el presidente que más ha durado en el cargo. Mauricio Santamaría, mi antecesor, puso la agenda de temas sociales, en particular el análisis del sector salud, al centro de la discusión, en momentos en que las reformas del actual Gobierno buscaban profundos cambios, muchos de ellos en una dirección inconveniente.

Todos estos avances, aquí resumidos de forma somera, y que no le hacen justicia a los grandes aportes de ANIF, sus directivos y colaboradores, ocurrían en paralelo con un país que se abría al comercio inter-



José Félix Lafaurie, Guillermo Perry, Andrés Felipe Arias, Sergio Clavijo, Álvaro Uribe, Santiago Montenegro, Jorge Humberto Botero y Rafael Mejía.

Los exministros de Hacienda Alberto Carrasquilla, Juan Camilo Restrepo, Juan Carlos Echeverry y Mauricio Cárdenas con Mauricio Santamaría en la Asamblea General de ANIF de 2023.

nacional tras la apertura a comienzos de los 90, estrenaba un nuevo modelo social de derecho como resultado de la nueva Constitución de 1991, reemplazaba el café por el petróleo como su principal producto de exportación y adoptaba un nuevo modelo monetario, con un Banco Central independiente y un esquema de inflación objetivo, tras la ruptura de la banda cambiaria durante la crisis financiera de fin de siglo.

En este breve recuento, vale la pena destacar la expansión de la actividad económica, la inversión y el empleo durante el período 2002-2014. Un ciclo largo de avance que llegó a su fin con la caída estrepito-

sa de los precios del petróleo en el período 2014-2015. Desde entonces, diferentes choques económicos externos, entre ellos la pandemia, han puesto a la economía colombiana en una senda de bajo crecimiento.

En todos estos episodios, ANIF siempre ha estado presente y sus contribuciones al debate han sido técnicas y propositivas. Durante las últimas décadas, centenares de discusiones en temas monetarios, cambiarios, fiscales y sectoriales han tenido origen en la entidad.

Más recientemente, la crisis económica asociada al COVID visibilizó varias fisuras de la economía colombiana, desencadenando un

malestar social que ha sido canalizado por medio de tesis que buscan no solo desconocer el avance del país en las últimas décadas, sino generar escepticismo frente al papel crucial del sector privado. Ha sido, y será tarea de ANIF, exponer con hechos y evidencias las falacias de dichas tesis y mostrar que el progreso de Colombia está en función de la capacidad que tengamos como país de propiciar las condiciones para que la libre empresa y el sector privado perduren y generen riqueza. Este es, y será, el legado de ANIF.

¡Felices 50 años, ANIF! Que sean muchos más. ANIF



José Leibovich, Santiago Montenegro, Juan Manuel Santos, Juan José Echarvarría y Guillermo Perry.

Luis Carlos Sarmiento Angulo, Álvaro Uribe Vélez y Fabio Villegas en Asamblea General de ANIF.



Miguel Largacha, presidente del Consejo Directivo de ANIF; Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda; Leonardo Villar, gerente general BanRep; José Ignacio López, presidente de ANIF; Luz Magdalena Salas, vicepresidente de ANIF; Amilkar Acosta, exministro de Minas y Energía; Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo.

Paola Rocío Peña, asesora de la URF; Patricia Garzón, vicepresidente comercial del FNG; José Ignacio López; Gerardo Hernández, vicepresidente jurídico del Banco de Bogotá; y Erwin Schaefer, vicepresidente de ACH Colombia.

LOS CINCUENTA AÑOS DE CARTA FINANCIERA

Desde la creación de ANIF, Carta Financiera ha estado presente como una de las publicaciones más relevantes que hace este centro de estudios. Su riguroso análisis de la coyuntura económica nacional la ha convertido en una fuente de consulta primordial en el país.



1

La primera edición de Carta Financiera se dio bajo la presidencia de Belisario Betancur, quien escribió la primera editorial contando el nuevo concepto de agremiación que nació con ANIF.



5

Con la apertura económica de los años 90 se generó una fuerte discusión y debate en los distintos frentes económicos. ANIF estuvo presente en estas discusiones aportando análisis profundos sobre el tema.

2

Los análisis publicados en la década de los 70s daban muestra de lo que vivían distintos sectores económicos del país durante ese periodo.

3

Muestra del estudio juicioso que ha hecho ANIF es el artículo escrito por Eduardo Lora en 1988 sobre la capacidad de producción del país y su crecimiento económico en los 80s.

4

Para el primer semestre de 1988 se analizaba en Carta Financiera el comportamiento de las tasas de interés y la inflación, temas que aún hoy se encuentran en el centro de la agenda nacional.



6

Terminando el milenio y con los primeros años de la apertura, las exportaciones del país fueron los temas centrales de algunas ediciones de Carta Financiera.

9

Ya en el año 2014 la discusión se centraba en los temas minero-energéticos y sus perspectivas, tema de gran vigencia actual.



11

La pandemia desató una de las peores crisis económicas y sociales de los últimos años. ANIF puso sobre mesa la necesidad de manejar la crisis y plantear la recuperación.



7

Comenzando el nuevo milenio parte de la discusión pública estaba en la emisión de bonos soberanos y las calificaciones de riesgo, tema que analizó Carta Financiera en varias ocasiones.



8

En 2008, la crisis financiera mundial impactó fuertemente a Colombia. En este periodo, ANIF lideró el debate sobre cómo asumir ese duro momento para la economía.



10

La caída de los precios del petróleo golpeó fuertemente la economía colombiana y se debía pensar en la vida después de la bonanza petrolera.



12

En medio de la discusión de una amplia gama de reformas, la institucionalidad y su fortaleza han sido en la actualidad epicentro de la discusión pública y de ANIF.

HABLAN LOS EXPRESIDENTES

En el libro conmemorativo de los 50 años de ANIF, varios expresidentes de la entidad cuentan su paso por este centro de pensamiento y reflexionan sobre la coyuntura económica del momento. Aquí presentamos algunos fragmentos.



Ernesto Samper Pizano
(1976 - 1981)

“(...) En 1975, cuando nombraron a Belisario como Embajador de Colombia en España, a los 25 años de edad, asumí la presidencia de ANIF (...) En esos tiempos, la economía atravesaba por una época de transiciones de fondo: estaba pasando de lo rural a lo urbano (...) e iniciaba una favorable transición demográfica.

“Al comenzar los años 80, ya se hablaba de encontrar unas “señales y espacios” de mercado que atenuaran la fuerte presencia institucional del Estado (...). La indexación de la economía por la extensión del UPAC comenzaba a hacer estragos sociales en muchos sectores que veían como, mientras la inflación subía por el ascensor, los salarios lo hacían por la escalera.

“Dos bonanzas se asomaban en el panorama: la cafetera, resultante de los altos precios del café por las heladas de sus cultivos en Brasil, y la del narcotráfico (...). Las industrias manufactureras no reaccionaban, algunas de ellas amarradas a viejos privilegios proteccionistas. Exportábamos, sí, pero con subsidios que distorsionaban los precios. El aumento de los costos del petróleo que se dispararon en 1974 nos complicaba fiscal y cambiariamente. El sistema financiero, diversificado, aunque sobre regulado, también mostraba síntomas de agotamiento. Añorábamos el crédito de fomento.

“Mientras tanto, ANIF no perdía oportunidad de opinar, debatir y cuestionar. Todos los años, en las asambleas de afiliados, presentábamos documentos y estudios que seguían la línea del enfoque social de la economía (...)

“El paso por ANIF con su nuevo sentido de agremiación como tarea me dejó un saldo pedagógico: entendí que la relación entre los gobiernos y los empresarios puede tramitarse sin caer en la polarización Estado vs Mercado, encontrando espacios comunes sin sacrificar el concepto de lo público ni satanizar la iniciativa particular.”



Marta Lucía Ramírez
(1989 - 1990)

“(...) Tuve el honor de recibir la invitación para asumir la presidencia de ANIF durante el último año de la administración Barco, con su plan de economía social y una visión política para cerrar brechas sociales. Esto contradice a los críticos que siempre descalifican el pasado diciendo que jamás hubo en los partidos tradicionales, ni en la clase dirigente de Colombia, un interés por los más pobres, ni por las regiones, ni por mejorar la calidad de la política.

“Desde su fundación en 1974, ANIF tenía claro que su misión trascendía la sola gestión gremial de la economía y del sector financiero y que debía convertirse en un centro de análisis y aportes a la discusión de todos aquellos temas económicos que debían tener impacto social. Por ello, en nuestra gestión, hicimos permanente seguimiento a los proyectos y programas del Gobierno Barco sobre la justicia social, la igualdad de oportunidades y la necesidad de definir los linderos programáticos y filosóficos de los partidos políticos (...)

“Durante la campaña presidencial del 86, tanto el candidato Barco como su contendor Álvaro Gómez, coincidieron en la necesidad de lograr el desarrollo regional e impulsar las iniciativas locales, así como la elección popular de alcaldes. Era un momento fascinante para un centro de estudios que apenas había cumplido una década y que, al igual que Fedesarrollo, estaba llamado a contribuir con sus aportes académicos a la economía política de esa administración, sin perjuicio de apoyar también los planteamientos que el candidato perdedor había hecho sobre la necesidad de contar con instituciones económicas sólidas que aseguraran un crecimiento sostenido, esto a partir de la economía de mercado y de la apuesta por el sector privado para generar desarrollo y nuevos empleos, haciendo énfasis en el desarrollo y mayor autonomía de las regiones.”



Armando Montenegro
(1996 - 2001)

“Entrar a la discusión pública en 1996 fue una tarea apasionante, pero altamente compleja. El país padecía una fuerte crisis política, enfrentaba un gran avance de la guerrilla y sufría una enorme ola de violencia; la economía estaba increíblemente desajustada y existía un gran pesimismo sobre el futuro de Colombia.

“(...) era claro que la economía colombiana se dirigía a una crisis, aunque nunca imaginamos que iba a ser tan grande y terrible como fue. Desde 1994, cada año aumentaban el déficit fiscal y el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. El crecimiento económico se debilitó y la inflación no bajaba, al tiempo que el Banco de la República independiente era cuestionado por los economistas del Gobierno. La economía era crecientemente vulnerable a los choques internos y externos, tal como se comprobó en forma dramática en 1998 y 1999, cuando ocurrió la gran crisis del fin del siglo, con una contracción del PIB de más del 4% anual. Como si fuera poco, al lado de un brutal aumento de la pobreza y el desempleo, se presentó una gran crisis financiera, fruto de la insolvencia de las corporaciones de ahorro y vivienda, la corrupción de los bancos públicos y notables fallas en la supervisión.

“(...) era obvio que, al vincularme a ANIF en 1996, no era posible limitar mis declaraciones únicamente a la minucia técnica de los temas financieros. Tenía que opinar y participar en forma cuidadosa y constructiva en los debates sobre los grandes problemas que agobiaban a Colombia. Ese fue uno de los principales desafíos de mi trabajo.”



Fabio Villegas Ramírez
(2002 - 2005)

“Muy pocas entidades abren el espacio que tiene ANIF para ejercer la práctica del análisis económico y mirar al país y opinar con objetividad e independencia (...)

“(...) titulamos el 5 de agosto de 2002 nuestro primer informe semanal como: “La economía colombiana en emergencia”. Aun leído 22 años después, no creo que esta afirmación hubiera estado fuera de tono. Lo que sí es cierto es que pudimos haber subestimado las fortalezas del paciente. Así, más pronto que tarde, de la mano de la recuperación de los mercados emergentes, aplacados por los mensajes equilibrados del nuevo gobierno de Brasil y los estimulantes anuncios económicos del entrante gobierno en Colombia, poco a poco se fue abriendo camino la recuperación. Tal vez el dato más relevante de este cambio en tendencia fue el crecimiento del PIB que llegó a 3.9% en 2003.

“Hay unos hilos conductores que orientaron nuestro análisis y seguimiento de la economía en ese par de años. Muchos de ellos mantienen vigencia. El primero, como marco general, tiene que ver, sin minimizar y desconocer el papel del Estado en distintos frentes, con la defensa de la economía de mercado. La inversión privada es el mayor dinamizador del crecimiento y soporte del bienestar económico común (...)

“El crecimiento debe ser la columna vertebral de la política económica y social. El crecimiento facilita la lucha contra la pobreza y la distribución del ingreso, es el motor del ahorro, la inversión, el empleo productivo y el bienestar social. Con crecimiento, como efectivamente se demostró a mediados de 2002, es más viable el manejo de las finanzas públicas y de los desequilibrios fiscales.”



Santiago Montenegro
(2001 - 2002)

“Casi sin excepción, semana tras semana, los mercados financieros, la prensa, los analistas de la televisión y de las emisoras de radio comentaban y reaccionaban ante los informes semanales de la ANIF. Este hecho implicaba una inmensa responsabilidad y también una fuente de inevitables tensiones porque, al tiempo que había que informar con objetividad y presentar los hechos tal como eran, no se podía ser alarmista y generar pánico entre inversionistas y mercados financieros y de capitales ya muy preocupados por la situación del país. Y, muchas veces, también las autoridades económicas del ministerio de Hacienda y del DNP, e incluso de Palacio, manifestaban su inconformidad por algunos análisis y cifras que emitíamos, pero como presidente de ANIF consideraba que era mi obligación resistir esas presiones e informar sobre la realidad de la economía.

“(Algunos temas) que han generado mi interés desde (entonces) han sido la enorme informalidad y la bajísima productividad de nuestra economía. Aún hoy día, cuando estamos en la tercera década del siglo XXI, la informalidad laboral ronda un 60 por ciento de la población ocupada y la productividad diaria es de unos 15 dólares por trabajador, la más baja entre los 42 países de la OCDE, por debajo de México y la mitad de la de Chile. Desde la década de los noventa, en el siglo pasado, ANIF había comenzado a crear conciencia de estas preocupantes cifras y de la causalidad entre informalidad y bajísima productividad, pero me temo que, aún hoy en día, no se les ha prestado suficiente atención a estos fenómenos.”



Sergio Clavijo Vergara
(2005 - 2019)

11 (...) al equipo de investigadores del periodo 2005-2019 nos tocó interactuar con los Gobiernos de los presidentes Uribe (2002-2010), Santos (2010-2018) y Duque (2018-2022). "El sentir nacional es que a Uribe le correspondió "poner la casa en orden", tanto en el frente de la seguridad nacional como en la consolidación del ordenamiento fiscal y financiero. Este último proceso se había iniciado bajo la administración Pastrana (1998-2002), tras la grave crisis financiera que se había incubado durante 1994-1997. "Durante la primera parte de la administración Santos se tuvo un gran auge exportador minero-energético que favoreció dicha consolidación económica y, gracias a ello, se pudo avanzar en la crucial tarea del proceso de paz (2016-2018). Y bajo la administración Duque se tenía una excelente oportunidad para continuar con dicha consolidación, en esos dos frentes económicos y sociales, habiéndose reducido los índices de pobreza del 50% hasta el 38% en las dos últimas décadas. Pero la aparición de la pandemia Covid-19 obligó al país a ponerse en modo de defensa y se tuvieron que postergar muchos de los planes añorados en ese entonces. De esta manera, la agenda que manejó ANIF durante el periodo 2005-2019 necesariamente estuvo ceñida a los derroteros arriba mencionados. "(...) No es del caso entrar a relatar aquí detalles de los debates públicos que me tocó encarar durante (esas) administraciones, baste decir que las investigaciones de ANIF continuaron con su tradicional seriedad y generando "suficiente urticaria" entre los gobernantes y el Congreso como para que nuestras posiciones tuvieran que ser escuchadas, mas no siempre acogidas."



Mauricio Santamaría
(2020 - 2023)

11 Mi gestión en ANIF estuvo marcada por diferentes momentos importantes y coyunturales para el contexto económico y social de Colombia, aspecto que hizo que mi gestión fuera inmensamente retadora, pero igualmente gratificante.

"Uno de los momentos más difíciles y, al mismo tiempo, más definitivos de mi periodo en ANIF, fue el estallido de la pandemia del COVID-19. Comencé mi gestión en enero de 2020 y, tan solo un mes después, el país se vio obligado a implementar un confinamiento total. ANIF se transformó en un centro de análisis y propuestas en medio de una crisis sanitaria y económica sin precedentes. La pandemia exigió una respuesta rápida y eficaz en términos de análisis económico (...)

"Los informes de ANIF no sólo presentaron datos sobre la evolución de la pandemia, sino que también ofrecieron un análisis profundo sobre sus implicaciones económicas y sociales. Nuestros estudios abordaron desde el impacto en las pequeñas y medianas empresas hasta los efectos en el empleo y la pobreza. Esa diversidad de análisis permitió a ANIF posicionarse como un actor clave en el debate sobre cómo enfrentar la crisis. Probablemente, como el referente de la discusión.

"(...) A medida que la pandemia comenzó a ceder, la atención se desplazó hacia las reformas económicas que el país necesitaba. En ese sentido, analizamos con cuidado e hicimos propuestas de mejora en diferentes reformas que intentaban cambiar radicalmente las dinámicas económicas y sociales del país."



José Ignacio López
(2024 - Actual)

11 En lo corrido del 2024, la economía continúa con un perfil de bajo crecimiento, aunque las cifras más recientes sugieren que lo peor del choque ya pasó (...)

"No obstante, preocupa que las cifras de recuperación para los próximos años son bajas frente al promedio histórico y con relación al crecimiento potencial. Tasas de crecimiento inferiores al 3% no le permitirían al país avanzar en su objetivo de reducir la pobreza. El bajo perfil de crecimiento refleja la caída en las cifras de inversión que no solo corresponde al aumento de las tasas de interés, sino que también responde a un aumento de la carga fiscal del sector formal y a la incertidumbre generada por las políticas del actual Gobierno.

"La presión de gasto público ha llevado al país a realizar más de 20 reformas tributarias en las últimas dos décadas, y la carga al sector formal ha llevado a que Colombia sea uno de los países de Latinoamérica menos atractivos desde el punto de vista tributario (...)

"La agenda de reformas del Gobierno Petro también ha contribuido a un clima de inversión adverso, en la medida en que buscan expandir el papel del sector público en la economía, a pesar de la baja capacidad estatal, y en detrimento del sector privado (...)

"ANIF se ha expresado, con espíritu constructivo, pero de forma crítica, frente a varias de las iniciativas del Gobierno actual. El diálogo ha sido limitado en algunos aspectos y fructífero en otros. ANIF continuará en la tarea de aportar al debate nacional en varios de los temas relevantes buscando siempre el progreso del país."

PRESIDENTES ANIF

Belisario Betancur Cuartas



1974 - 1975

Ernesto Samper Pizano



1976 - 1981

Jaime Córdoba Zuluaga



1981

Juan Diego Jaramillo



1985 - 1986

Jorge Guzmán Moreno



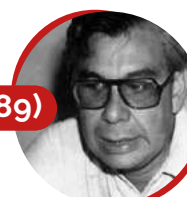
1983 - 1984

Pedro Javier Soto Sierra



1981 - 1983

Eduardo Gaitán Durán



1987 - 1989

Marta Lucía Ramírez



1989 - 1990

Javier Fernández Riva



1990 - 1996

Fabio Villegas Ramírez



2002 - 2005

Santiago Montenegro



2001 - 2002

Armando Montenegro



1996 - 2001

Sergio Clavijo Vergara



2005 - 2019

Mauricio Santamaría



2020 - 2023

José Ignacio López



2024 - Actual

LUIS CARLOS SARMIENTO Y ANIF

Gracias al decidido apoyo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, ANIF pudo continuar con su labor en los años 80 y consolidarse como uno de los centros de pensamiento más importantes de la región en estas cinco décadas. Un expresidente de ANIF le rinde homenaje.

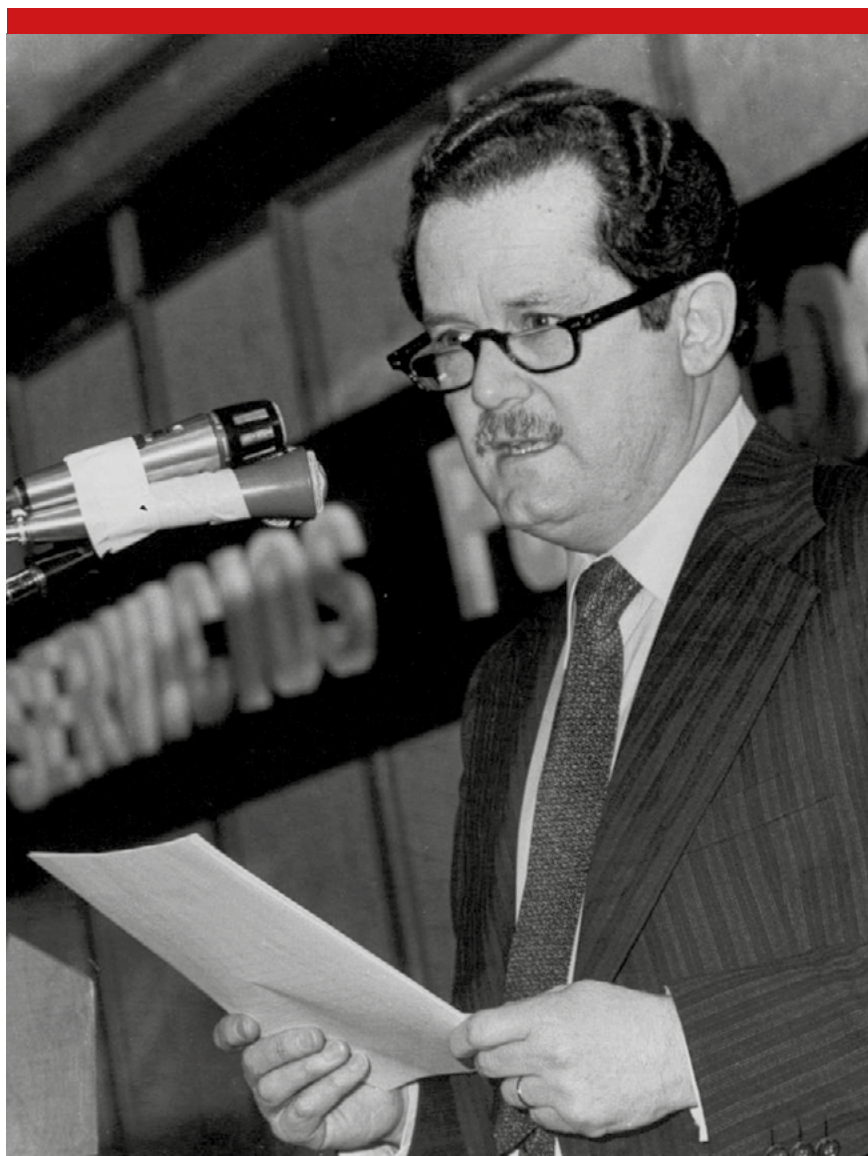


Santiago Montenegro

Expresidente de ANIF
2001-2002

A lo largo de mi vida, he tenido la suerte y el privilegio de conocer a grandes personajes de la política, la intelectualidad, las artes y del mundo empresarial, tanto colombianos como extranjeros. Uno de esos personajes ha sido Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los empresarios más exitosos en la historia de nuestro país, quien cuando lo conocí me causó una primera y positiva impresión que he guardado hasta nuestros días. Me sorprendió la sencillez de su trato, la atención que prestaba a mis argumentos, su respeto a la diferencia de opinión y su actitud a llegar a acuerdos, un talante muy alejado de la presunción y la soberbia de muchos otros personajes, que presumen saberlo todo y no ocultan su afán por aparecer en los titulares de los medios de comunicación, por la fama y la farándula.

El doctor Sarmiento siempre me ha causado la impresión de un



hombre agradecido con la vida, que no olvida una carrera de esfuerzo y trabajo desde muy joven, desde su bachillerato en el colegio Mayor de San Bartolomé, sus estudios de ingeniería civil en la Universidad Nacional, sus trabajos como ingeniero en la construcción de carreteras y acueductos rurales, sus primeras viviendas y urbanizaciones en Bogotá, su tránsito de las obras civiles al sector financiero y a la consolidación del Grupo Aval y a su proyección internacional.

Esta imagen personal la adquirí durante mi presidencia de ANIF (2001-2002), cuando tuve la oportunidad de interactuar directamente con el doctor Sarmiento, cuando él ejercía como presidente de su Junta Directiva. Además de su actitud humana, el doctor Sarmiento sobresalía por su amplio y profundo conocimiento de todos los grandes temas del país, como la economía, la justicia, nuestra democracia representativa liberal, la situación de orden público y, por supuesto, del sector financiero. Tenía una inigualable capacidad para analizar los estados financieros de toda la economía, del déficit fiscal y la cuenta corriente de la balanza de pagos, del sector financiero y, por supuesto, los de ANIF. Con solo una primera mirada al estado de pérdidas y ganancias o al balance, en unos pocos segundos era capaz de encontrar inconsistencias y contradicciones entre unos números y otros, razón por la cual sus observaciones fueron para nosotros una verdadera escuela de formación y disciplina para la preparación de informes y documentos.

En su papel como presidente de la Junta Directiva, el doctor Sarmiento me convenció de que ANIF ha sido una de las instituciones que más ha apreciado, quizá la que más ha apreciado, entre todas las entidades de su grupo económico. Porque a través de ANIF, de sus investigaciones y sus foros, el doctor Sarmiento ha dado una muestra de la necesidad de estudiar a fondo los problemas del país, de dialogar, de discutir y de criticar respetuosamente las opiniones de los contradictores, pero también de aceptar



Eduardo Wiesner y Luis Carlos Sarmiento (costado izquierdo). Jaime Michelsen y Cardenal Anibal Muñoz Duque.

la crítica razonada de otros para alcanzar acuerdos y soluciones.

Esta es una actitud que contrasta con la que han tenido el populismo y la extrema izquierda en Colombia, que siempre han atacado al sector financiero y a los bancos. Porque, en su sueño por crear una sociedad socialista, los marxistas siempre han deseado acabar con los que llaman el capitalismo y, en particular, con el sector financiero y con los bancos privados. Por supuesto, estos sectores extremistas jamás mencionan los fracasos de países que han eliminado la economía de mercado y también olvidan la nefasta historia de politización, clientelismo y corrupción de los bancos públicos en nuestro país. Por su parte, el populismo, tan de moda en muchas partes del mundo y afanado de consolidarse en nuestro país, en su clamor por interpretar los intereses de lo que llama el "verdadero pueblo," ataca a quien define como su mayor enemigo: la élite o las élites, en plural. Y, como parte constitutiva de esas élites, incluyen al sector financiero y, por supuesto, a los bancos.

Hay incluso un sector emergente de corte populista que, hoy en día, ataca por un lado al Gobierno de Gustavo Petro por su orientación izquierdista, y ataca, al mismo tiempo, al sector financiero. Todos


esos sectores también pretenden ignorar los esfuerzos del doctor Sarmiento por ampliar el acceso de la población de menores recursos al ahorro y al crédito formal. Como pocas instituciones, ANIF ha planteado desde hace décadas soluciones para eliminar la informalidad de la economía, que es la principal fuente del crédito informal, el llamado "gota a gota", al que tienen que acceder muchos de los sectores más pobres de la sociedad, en donde se ven obligados a pagar tasas de interés increíblemente elevadas, contra un colateral que, muchas veces, es la propia vida de los deudores.

En forma increíble, tanto la extrema izquierda como los populistas, callan sobre el sistema crediticio informal y desconocen los esfuerzos de los bancos para formalizar la economía, proponiendo soluciones, como la reducción del uso del efectivo, en parte consecuencia del impuesto a las transacciones financieras, el llamado cuatro por mil.

Además de ANIF, no se puede reseñar la contribución de Luis Carlos Sarmiento al país sin mencionar sus obras de filantropía, entre las cuales solo menciono dos. Egresado en 1954 de la facultad de ingeniería de la Universidad Nacional, el doctor Sarmiento decidió

realizar una gran donación a su universidad con un edificio de Ciencia y Tecnología, una construcción vanguardista en diseño, acústica, hidráulica, ventilación y amigable con el medio ambiente. Situado en el sector occidental del campus, con una superficie de construcción de 8.600 metros cuadrados, para lo cual donó 18 mil millones de pesos del costo total, que ascendió a 24 mil millones de pesos, el edificio fue inaugurado el 9 de octubre de 2010, constituyéndose en un aporte muy importante para la modernización de esta casa de estudios.

Otra de sus grandes obras de filantropía fue el Centro de Tratamiento e Investigación sobre cáncer, CTIC, que lleva su nombre, una fundación sin ánimo de lucro dedicada a la atención integral y a la investigación de esta enfermedad en nuestro país y en la región. El CTIC es un hospital líder en tecnología, tratamiento, investigación y prevención, que atiende a todo tipo de pacientes, que fue creado con el propósito de ser sostenible en el tiempo y constituirse en uno de los más importantes referentes en América Latina. Con una inversión de más de cuatrocientos millones de dólares, uno de sus principios rectores es la inclusión, razón por la cual el CTIC hace parte del sistema general de la seguridad social en salud, ofreciendo una prestación integral de servicios a todo tipo de pacientes, sin distinción del régimen de afiliación, eliminando las barreras de acceso a la atención y mejorando las condiciones de salud y calidad de vida de todas las personas que requieren de su servicio.

Con esta pequeña nota, espero hacer justicia a Luis Carlos Sarmiento Angulo por haber consolidado a ANIF como uno de los centros de pensamiento más importantes y, de esa forma, haber realizado otra gran contribución al desarrollo del país y su sector empresarial. He querido reconocer también el privilegio que tuve al conocerlo y al haber trabajado a su lado como presidente de ANIF, lo que me permitió aprender de sus grandes conocimientos y de sus cualidades humanas. 



Luis Carlos Sarmiento, entregando el Premio Nacional al Periodismo Económico ANIF - Fiduoccidente. Octubre 1994.



Luis Carlos Sarmiento con el presidente de Colombia Juan Manuel Santos y el presidente de ANIF, Sergio Clavijo. 2010.



Luis Carlos Sarmiento en la Asamblea General de ANIF de 50 años. 2024.

| porvenir te responde



Con la aprobación de la Reforma Pensional (Ley 2381 de 2024), Porvenir podrá ser una Administradora del Componente Complementario de Ahorro Individual

En el **nuevo sistema pensional** Colpensiones y las Administradoras se podrán complementar; los primeros 2,3 SMMLV se deberán cotizar en Colpensiones y los excedentes se ahorrarán en una Administradora de Ahorro Complementario como Porvenir.

*Esta forma de cotización de los aportes aplica para las personas que a partir del **1 de Julio del 2025 sean parte del Pilar Contributivo**, y que durante su vida laboral han cotizado:



Mujeres

Menos de
750 semanas



Hombres

Menos de
900 semanas

¿Por qué elegir a Porvenir como la Administradora de Ahorro Complementario?

1. Experiencia

Por más de **30 años** hemos trabajado en la consolidación y administración del ahorro pensional y cesantías de nuestros afiliados. Contamos con el respaldo del **Grupo AVAL**.

2. Solidez

Gracias a una adecuada gestión de los **Portafolios administrados** hemos recibido los más altos **reconocimientos** por parte de entidades calificadoras de riesgo.

3. Compromiso Sostenible

Avanzamos en nuestro compromiso con la sostenibilidad, generando valor al **medio ambiente**, contribución en **temas sociales** y políticas de buen **gobierno corporativo**.

4. Innovación y Servicios

Evolucionamos constantemente para ofrecer a nuestros afiliados un mejor servicio fortaleciendo nuestra **estrategia de innovación**, contamos con diferentes canales y herramientas digitales para la gestión de nuestros productos.

5. Reconocimientos

Diferentes entidades a nivel nacional e internacional han reconocido nuestros esfuerzos y **avances** en materia de servicio, excelencia en gestión, innovación, aporte social y **gestión del talento humano**.

Es importante hacer la afiliación a una Administradora antes del 16 de enero del 2025, de no elegirse, el Gobierno se encargará de hacerlo con el mecanismo aleatorio definido en el decreto 1225 de 2024.



Si está interesado en elegir a Porvenir como Administradora, escanee el código QR.

*La cotización del excedente mayor a 2,3 SMMLV en una Administradora, no aplica para personas que al 1 de julio 2025 cumplan con las condiciones de régimen de transición. Esta información se divulga conforme al texto de Reforma Pensional aprobado por el Congreso de la República, estando pendiente la regulación del Gobierno Nacional y las instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia, que brinden claridad y alcances normativos suficientes para la implementación de la Reforma.

CENTROS DE PENSAMIENTO: GESTIÓN Y RELEVANCIA PARA COLOMBIA

La principal motivación para el surgimiento de los "centros-seguros de pensamiento libre" a principios del siglo XX en Estados Unidos tuvo que ver con el enrarecido ambiente internacional, donde se ponía en duda la preeminencia del interés nacional frente a los llamados del "nacionalismo" o la "Internacional-Socialista". Pensar libremente se volvió una tarea "insegura", dentro o fuera de las burocracias nacionales. Magnates con visión de Estado idearon entonces el formato de un blindaje para los centros de investigación-gestión, de tal manera que ellos pudieran liderar la agenda pública, contando con recursos permanentes y cierta independencia analítica. Para asegurar la permanencia en el tiempo, los gestores de estos centros de pensamiento los dotaban de fondos permanentes (*endowments*), con lo cual se aseguraba la continuación de su misión y su independencia.

Es claro que existen diversos *think tanks* según sus objetivos y alcances. Pero un común denominador es la generación y discusión de las ideas. Para ello se genera una "fábrica de pensamiento" que cumple las etapas de identificación del problema, conceptualización del mismo (sus raíces analíticas) y el debate académico correspondiente. A nivel del progreso de la ciencia, mucho se ha escrito sobre la forma en que avanza ese pensamiento analítico y cómo se "revolucionan" la metodología para atacar los diferentes problemas científicos. Se habla del cambio de "estructuras analíticas" y la forma en que ellas permean el pensamiento de la comunidad científica a través de los llamados "paradigmas científicos" (Kuhn, 1970).

La diferencia entre los centros de investigación de corte netamente académico (usualmente asociados



Sergio Clavijo

EXPRESIDENTE DE ANIF 2005-2019

a las universidades) y los centros de pensamiento-gestión radica precisamente en el interés que muestran estos últimos por impulsar la concreción de los cambios que se desprenden de dicho análisis científico. Mientras las universidades se concentran en las etapas de identificación del problema -conceptualización- y el debate académico, los *think tanks* ven en esta interacción con el mundo de las ideas tan sólo la primera etapa de las tareas que deben realizar. La *raison d'être* de los *think tanks* radica entonces en la complementación de esas conceptualizaciones académicas con el debate público y la concreción en las leyes, los decretos, los acuerdos y las ordenanzas. Al final de este horizonte de influencia tienden a aparecer los "profesionales de la gestión", organizados a través de los gremios-sectoriales y cuyas tareas incluyen el cabildeo ante las autoridades legislativas.

En este sentido, la tradicional caracterización de los *think tanks* como simples "instituciones cognitivas" nos parece que se queda corta en la dimensión social que tienen a lo largo de todo el espectro de gestión. Precisamente es esta última condición (la gestión eficiente) la que da el mayor soporte a los procesos democráticos, tal como lo mencionan Santiso y Whitehead (2006). Cabe distinguir entre los economistas "científicos" y los "economistas prácticos" (o quienes usan la "ingeniería" para resolver problemas del mundo real).

En el caso de Estados Unidos, este mercado de las ideas está claramente organizado a nivel de leyes y de prácticas segmentadas. En la zona académica-pura actúan las universidades, que desde mediados del siglo XIX se organizaron como entidades sin ánimo de lucro. El Estado decidió en ese entonces apoyar el pensamiento académico-científico con la donación de terrenos y se generó, especialmente en el medio oeste, grandes universidades conocidas como las *Land-Grant Universities* de carácter público. Este sistema se replicó a escala nacional, donde se ha destacado el sistema de las universidades estatales de California, con incentivos y sinergias especiales con el sector privado.

En la zona de pensamiento-gestión operan estos *think tanks*, los cuales tienen la característica de cubrir todo el espectro académico-gestión pública (mayores detalles en Clavijo, 2007). La condición

en Estados Unidos para extender a los *think tanks* beneficios tributarios, similares a los que reciben las universidades, es que éstos no tengan afiliación partidista, no manifiesten públicamente sus preferencias políticas y no estén financiados por entidades políticas, más allá de un estrecho límite (Abelson, 2002).

En la última zona de gestión aparecen los gremios, defendiendo sus intereses sectoriales ante el Congreso y los Gobiernos de turno. En el caso de Estados Unidos, estas actividades de *lobby* o cabildeo han estado reglamentadas por ley. Se han venido discutiendo las posibles bondades que tendría extender dicho esquema de transparencia al caso de Colombia, a través del cual sería legal interceder a favor de tal o cual grupo o actividad. Sin embargo, la experiencia de Estados Unidos a este respecto indica que se ha terminado por generar un gran cúmulo de exenciones tributarias como resultado de dicho *lobby* organizado, al punto de que se ha vuelto imposible desmontarlas.

En América Latina los llamados *think tanks* toman, por lo general, la forma de entidades sin ánimo de lucro y manejan escasos recursos presupuestales respecto a los que se observan en el mundo desarrollado, especialmente en Estados Unidos. Por ejemplo, Santiso y Whitehead (2006) reportan que en América Latina cerca de un 45% de los centros de investigación-gestión opera con presupuestos anuales inferiores a los US\$500.000 y en un 60% de los casos la nómina de investigadores es inferior a los veinte miembros (de tiempo completo). En consonancia con ello, resulta que, en muy contadas excepciones (menos de un 10% de los casos), los *think tanks* en América Latina alcanzan presupuestos anuales superiores a US\$1 millón y/o cuentan con un *staff*-investigativo superior a los 30-50 miembros.

Las cifras presupuestales y de *staff*-técnico de los principales *think tanks* en América Latina resultan entonces bastante moderadas frente a

Argentina, Uruguay, Brasil, Perú y Colombia son los países de América Latina que más se destacan en materia de amplia utilización del conocimiento generado por los *think tanks*.

los recursos que manejan, por ejemplo, la Brookings Institution (más de US\$20 millones y un *staff* cercano a 70 de tiempo completo); el Cato Institute (con US\$10-20 millones y personal técnico de unos 42); o el Rand Institute (más de US\$100 millones y *staff* de unos 500).

Argentina, Uruguay, Brasil, Perú y Colombia son los países de América Latina que más se destacan en materia de amplia utilización del conocimiento generado por los *think tanks*. En el caso de Colombia, se conocen bien a escala internacional las tareas que ha venido adelantando Fedesarrollo en sus más de 50 años de gestión, desde su creación en 1970 (ver Santiso y Whitehead 2006).

En el caso de ANIF, su reconocimiento es más local y nacional. En buena medida creemos que esto se debe al hecho de ser percibido desde el exterior (especialmente durante el período 1974-1987) como una entidad de tipo gremial. En cambio, los jugadores locales han entendido de tiempo atrás la labor de ANIF más como un centro de pensamiento-gestión, aunque con claras raíces en el sector financiero del país. Tanto ANIF y Fedesarrollo hoy operan con presupuestos anuales (brutos) que bordean US\$1 millón y mantienen nóminas de investigadores (de tiempo completo) que fluctúan entre los 10-20 investigadores, ubicándose en un tamaño intermedio dentro del contexto de *think tanks* en América Latina.

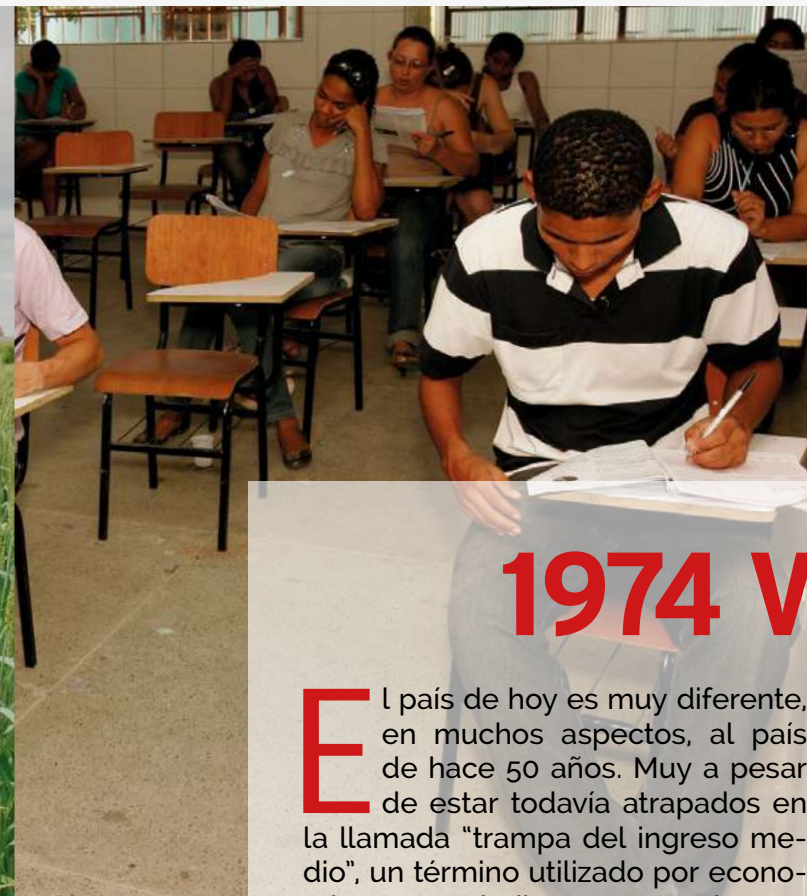
El fenómeno de "puertas giratorias" ha sido criticado por Stiglitz, aduciendo un supuesto problema de "amoralidad" del funcionario público. Curiosamente, buena parte de esas críticas también recaerían sobre él, pues Stiglitz se trasladó de la academia (Yale-Stanford-Oxford-Princeton, 1970-1988) hacia el gobierno (Council

of Economic Advisors, 1993-1997) y de allí hacia las multilaterales (vicepresidente del Banco Mundial, 1997-2000), regresando nuevamente a la academia (Columbia, 2001-2006). Entretanto, Stiglitz le reportó al mundo que el FMI le había impedido a él y al Banco Mundial estabilizar la economía mundial y combatir la pobreza de forma efectiva durante los penosos años de la crisis asiática (1997-2000).

Sin embargo, otros funcionarios del Banco Mundial han concluido que el problema no era (únicamente) el FMI, sino (sobre todo) la estructura interna del propio Banco Mundial. En particular, Easterly (2006) ha concluido que la obsesión por aplicar esquemas de planificación central terminó por arruinar las posibilidades de impulsar la prosperidad en el tercer mundo. Easterly provee dos conceptos básicos: 1) La importancia de desarrollar mecanismos de mercado, tanto para distribuir mosquiteros que prevengan la malaria, como para instituir prácticas sexuales seguras para prevenir el Sida; y 2) Las "políticas económicas democráticas", a través de las cuales se construye bienestar solucionando problemas paso a paso y partiendo de las realidades y culturas existentes, no intentando planear una solución global que desconoce el llamado problema de la "dependencia histórica".

Si Easterly hubiera utilizado las "puertas giratorias" de los centros de pensamiento-gestión para complementar su visión del mundo, entonces no habría terminado por usar su bien humorado estilo y sarcasmo (a manera de resignación) para justificar toda una vida bajo los idealismos sociales del Banco Mundial. Estos idealismos terminaron siendo derrotados por la cruda realidad. ANIF

- Abelson, D. E. (2002), *Do Think-Tanks Matter? - Assessing the Impact of Public Policy Institutions*, McGill-Queen's University Press, Canada.
- Clavijo, S. (2007) *El Mercado de la Ideas y los Centros de Pensamiento-Gestión (ANIF)*.
- Easterly, W. (2006), *The White-Man's Burden*, The Penguin Press, Nueva York.
- Kuhn, T. (1970), *The Structure of Scientific Revolutions*, Chicago University.
- Santiso, J. y Whitehead L. (2006), "Ulyses, the sirens, and the art of navigation", OECD, Development Center, *Working Paper*, No. 256, November.



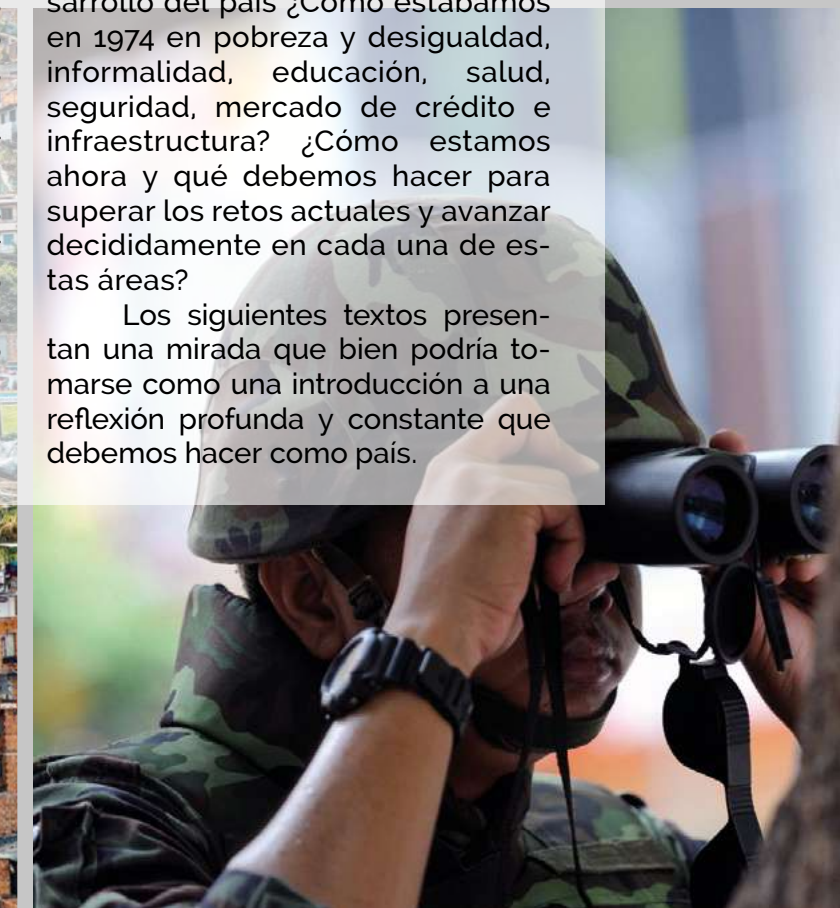
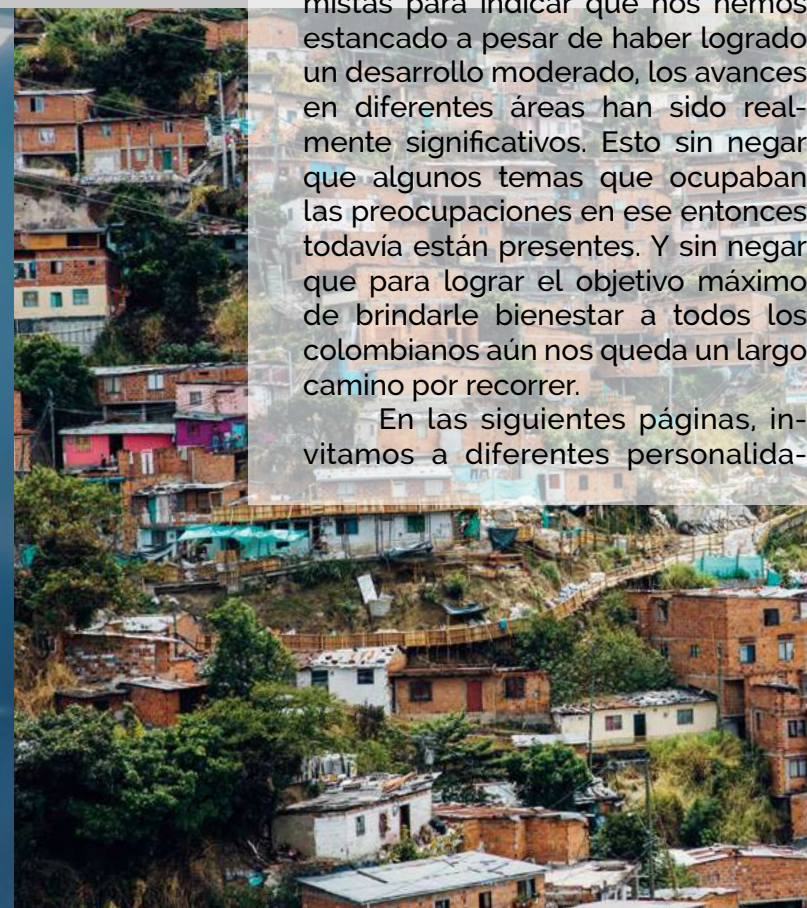
1974 VS 2024

El país de hoy es muy diferente, en muchos aspectos, al país de hace 50 años. Muy a pesar de estar todavía atrapados en la llamada “trampa del ingreso medio”, un término utilizado por economistas para indicar que nos hemos estancado a pesar de haber logrado un desarrollo moderado, los avances en diferentes áreas han sido realmente significativos. Esto sin negar que algunos temas que ocupaban las preocupaciones en ese entonces todavía están presentes. Y sin negar que para lograr el objetivo máximo de brindarle bienestar a todos los colombianos aún nos queda un largo camino por recorrer.

En las siguientes páginas, invitamos a diferentes personalida-

des expertas a reflexionar sobre los cambios que ha vivido Colombia en las últimas cinco décadas. Con el riesgo de dejar algunos temas por fuera, escogimos deliberadamente ciertos aspectos clave para el desarrollo del país ¿Cómo estábamos en 1974 en pobreza y desigualdad, informalidad, educación, salud, seguridad, mercado de crédito e infraestructura? ¿Cómo estamos ahora y qué debemos hacer para superar los retos actuales y avanzar decididamente en cada una de estas áreas?

Los siguientes textos presentan una mirada que bien podría tomarse como una introducción a una reflexión profunda y constante que debemos hacer como país.



UNA PRIORIDAD ACORDADA

Las últimas décadas mostraron resultados importantes en superación de la pobreza y mejoras modestas en materia de desigualdad. Aún hoy, eliminar la pobreza y lograr la inclusión debe estar en el centro de nuestra agenda económica y social.



Olga Lucía Acosta Navarro

Miembro de la Junta directiva del Banco de la República

Colombia ha logrado avances importantes en los últimos 50 años en la reducción de la pobreza y algunas mejoras modestas en distribución del ingreso. Persisten, sin embargo, profundas diferencias territoriales en calidad de vida. La prioridad acordada a la reducción de pobreza en este siglo en la agenda global, así como en estrategias nacionales de reducción de la pobreza, contribuyeron al logro de avances sostenidos, especialmente en la primera década del siglo XXI, los cuales se hicieron más lentos o incluso retrocedieron en los siguientes diez años.

La pandemia comprometió estos resultados y dejó secuelas permanentes. Retomar este objetivo de eliminación de la pobreza y atender nuevos problemas que surgieron a partir del confinamiento provocado por el COVID, exige replantear las estrategias para lograr la inclusión social y laboral como ejes centrales de la agenda de desarrollo de Colombia. Así mismo, es necesario sumar esfuerzos público-privados en estrategias de desarrollo regional con el propósito de cerrar brechas entre distintas regiones de Colombia.

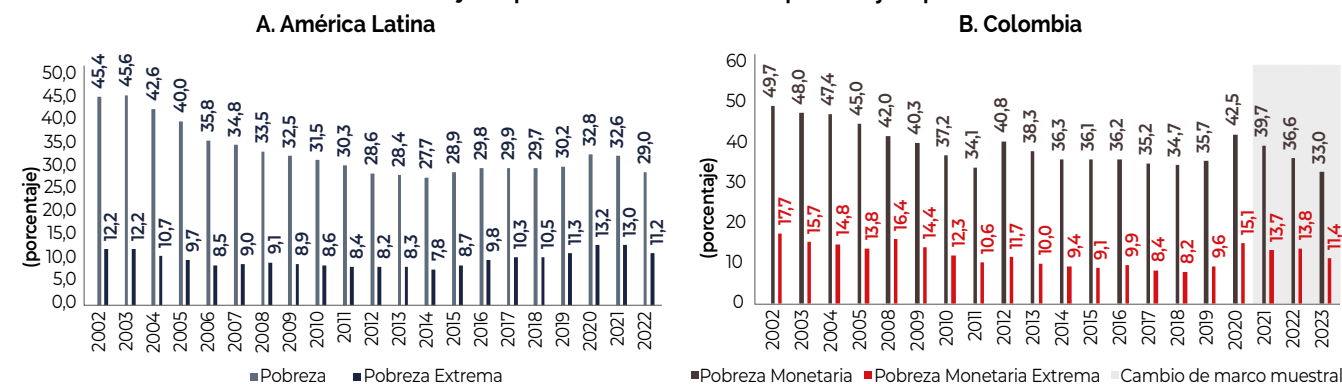
Trayectoria: pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema en Colombia

La reducción de la pobreza constituye uno de los logros más importantes de la primera década del siglo XXI. Cerca de la mitad de la población, más de 20 millones de colombianos eran pobres en Colombia en 2002. Estos colombianos no contaban con los recursos necesarios para proporcionarse la canasta básica de bienes y servicios y algunos de ellos ni siquiera los recursos para adquirir sus alimentos¹. Una década

más tarde, en 2011 un poco más de 5 millones de colombianos habían salido de la pobreza y la proporción de personas que continuaban en esta situación alcanzaba algo más de una tercera parte de la población, el 34%. Luego de un notable aumento en 2012 (40,8%), retoma su trayectoria de descenso hasta 2019. En promedio, América Latina muestra mejores resultados, al reducir entre 2002 y 2014 la tasa de pobreza de 45% en 2002, a menos de la tercera parte, 27% en 2014, y a partir de este año presenta de nuevo una leve tendencia ascendente hasta el 2020 (Gráfico 1).

La pobreza extrema, también llamada indigencia o hambre, ha sido uno de los rasgos más característicos de las sociedades latinoamericanas. Algo más del 12% de la población en los países de América Latina eran pobres extremos en el 2002, proporción que desciende hasta 7,8% de la población de esta región en 2014, lo que equivale a cerca de 70 millones de latinoamericanos en esta situación. En Colombia, con un patrón similar al que sigue la pobreza monetaria, la población en pobreza monetaria extrema, que alcanzaba más de 7

Gráfico 1. Porcentaje de población en situación de pobreza y de pobreza extrema



Fuente: Cepal.

Nota: a partir del año 2021 la GEIH cuenta con un marco de muestreo actualizado con el censo de 2018 y algunos ajustes metodológicos.

Fuente: DANE.

millones de colombianos en 2002, se reduce de forma continua y abarca 3,9 millones de colombianos en 2018, un 8,2% de la población, luego de un retroceso puntual en 2012.

La pandemia del COVID 19 irrumpió en un período complejo, con varios años previos de bajo crecimiento por los menores precios de los productos de exportación de la región, en especial de los hidrocarburos en Colombia. La pobreza había comenzado a aumentar desde 2019, así como las tensiones sociales. En efecto, la población en situación de pobreza aumenta de 35,7% en 2019 a 42,5% en 2020, algo más de 3,7 millones de personas, especialmente por la pobreza extrema que acumula 2,8 millones de personas más porque la pandemia agudizó los problemas estructurales de pobreza y desigualdad.

A partir de 2021, con una nueva serie², se observa una senda de reducción de la pobreza y la pobreza extrema, sin embargo, aún no contamos con datos empalmados que nos permitan afirmar que, con el resultado más reciente, el de 2023, la pobreza habría retornado a los niveles previos a la pandemia.

Lo que aprendimos en este siglo, antes de pandemia

En Colombia este aumento del gasto público social se inició con el cambio constitucional en 1991 y se prolongó posteriormente, no sin fuertes tensiones en las finanzas públicas, que hicieron necesario incrementar los recursos fiscales mediante un destacado activismo tributario y la mejora sincronizada de las instituciones fiscales.

El cuarto factor que contribuyó a la mejora en el ingreso de los hogares y con ella a una reducción de la pobreza fue la disminución de la fecundidad, de la tasa de dependencia y del tamaño promedio de los hogares. Finalmente, un quinto componente fue el programa de transferencias condicionadas. Al igual que en otros países de América Latina, con estos programas se busca evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza, al fortalecer el capital humano de los niños mediante el otorgamiento de un subsidio a familias en condiciones de pobreza con la condición de que sus hijos menores asistan a los centros educativos y también a

controles de peso y talla. Las evaluaciones de estos programas han ofrecido evidencia de su impacto favorable³. El análisis del ingreso de los hogares muestra que su principal componente es el ingreso laboral. La transferencia monetaria a los hogares más pobres no reemplaza sus ingresos derivados del trabajo.

Otras dimensiones de la pobreza

La pobreza multidimensional incluye 15 indicadores que dan cuenta de las siguientes cinco dimensiones: (i) condiciones educativas del hogar, (ii) condiciones de la niñez y juventud, (iii) trabajo, (iv) salud y acceso a servicios públicos domiciliarios y (v) condiciones de la vivienda. Se considera a una persona pobre multidimensional si se encuentra que tiene privación en 33,3% de estos indicadores.

Colombia muestra mejores resultados cuando se examina el progreso en la calidad de vida, en un índice integrado que se comenzó a medir desde 2010, de forma complementaria al enfoque del ingreso⁴. En 2010, una tercera parte de la po-

¹ Se califica como una persona en situación de pobreza monetaria extrema quien cuenta con ingresos insuficientes para comprar una canasta básica de alimentos. Las personas además de alimentos requieren otros bienes y servicios, que se agregan a la canasta de alimentos; quien tiene ingresos insuficientes para proporcionársela es una persona en situación de pobreza monetaria. El valor de 2023 de la línea de pobreza monetaria extrema calculado por el DANE es CO\$ 218.846 por persona y el de pobreza monetaria es de CO\$435.375 también por persona. Un mayor detalle en: <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PM/bol-PM-2023.pdf>

Los valores internacionales calculados por el Banco Mundial son de US\$2,15 diario para la pobreza extrema y de US\$ 6,85 diario para la pobreza en países de ingreso mediano alto. Un mayor detalle en: <https://www.bancomundial.org/es/news/factsheet/2022/05/02/fact-sheet-an-adjustment-to-global-poverty-lines>

² La Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE actualizó el marco geoestadístico con base en los resultados del Censo de 2018, y se incluyeron además nuevas preguntas a la Encuesta. Por esta razón la serie de pobreza monetaria y desigualdad hasta 2020 no ha sido empalmada con los resultados 2021, 2022 y 2023, y estos últimos tienen un cambio en nivel. Un ejercicio de comparación realizado por el DANE encuentra que la serie desde 2021 se realizó como se señala en el gráfico, que aún no se han empalmado las series y que de forma rigurosa los años comparables son 2021 a 2023. Para una explicación detallada, ver <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PM/cp-PM-conjunto-jul2024.pdf>

³ Ver L. Abramo, S. Cecchini y B. Morales, (2019). Programas sociales, superación de la pobreza e inclusión laboral: aprendizajes desde América Latina y el Caribe. Libros de la CEPAL, N° 155 (L/C/PUB.2019/5-P). Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

⁴ Ver Angulo, Roberto, Díaz, Yadira y Renata Pardo (2011). Índice de Pobreza Multidimensional para Colombia (IPM-Colombia) 1997-2010. Archivos de Economía N° 382. Departamento Nacional de Planeación, Bogotá, Colombia. pp 14-21.

blación colombiana era pobre multidimensional, y en el más reciente resultado de 2023 este porcentaje se ha reducido a 12%, aunque a un menor ritmo desde 2018, luego de un estancamiento entre 2016 y 2017, como se puede leer en el gráfico 2.

Este total nacional agrupa el resultado de las ciudades (ca-

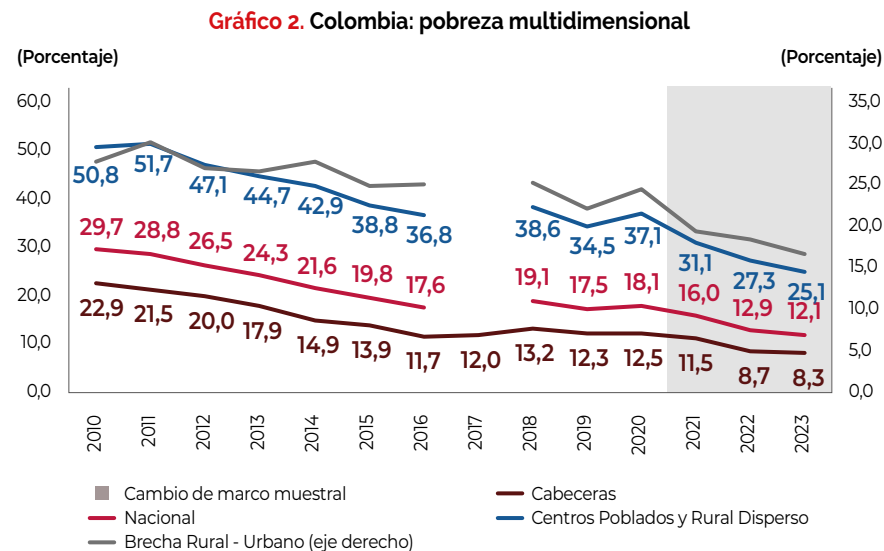
beceras), donde el 22,9% de la población podía catalogarse como pobre multidimensional en 2010 y se reduce al 8,3% en 2023. En las zonas con menor grado de urbanización o rurales (centros poblados y rural disperso) el 50,8% era pobre en 2010 en por lo menos 3 dimensiones del índice, y se redu-

jo a la mitad (25%) en 2023, lo que produce también una reducción de la brecha entre estos dos tipos de zonas del país.

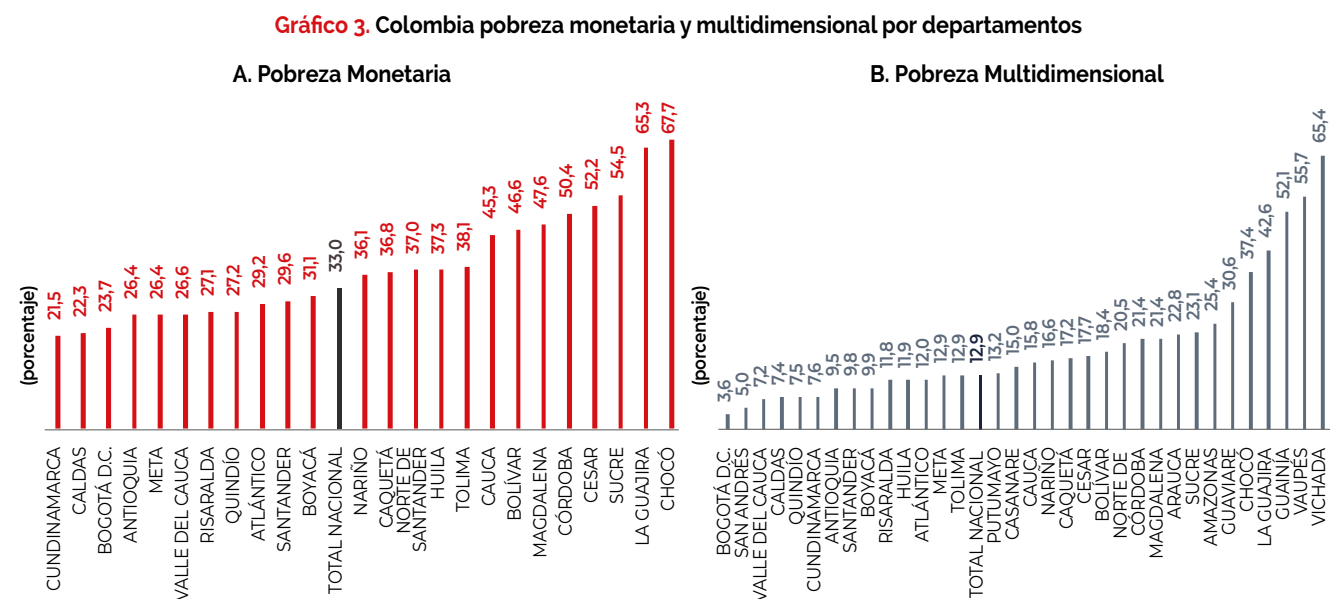
Uno de los mayores aportes a la reducción de la pobreza multidimensional en el país fue el creciente aseguramiento en salud de la población, y también los avances en el acceso a servicios de primera infancia o al más amplio acceso a servicios públicos. Esta medida se ha convertido en un instrumento para lograr más adecuados diseños de las políticas y una mejor asignación del gasto, además de posibilitar un seguimiento de resultados, en un país que realiza muy poca evaluación al impacto del gasto público.

Los retos de la heterogeneidad del país

Hemos pasado revista de los promedios nacionales de los indicadores de pobreza monetaria y multidimensional. Sin embargo, se requiere también el examen de profundas diferencias regionales, que se han convertido en otro de los desafíos para avanzar, porque son necesarias políticas adaptadas a necesidades específicas de la población en distintas regiones del país.



Fuente: DANE.
Nota: a partir del año 2021 la GEIH cuenta con un marco de muestreo actualizado con el censo de 2018 y algunos ajustes metodológicos.



Fuente: DANE.

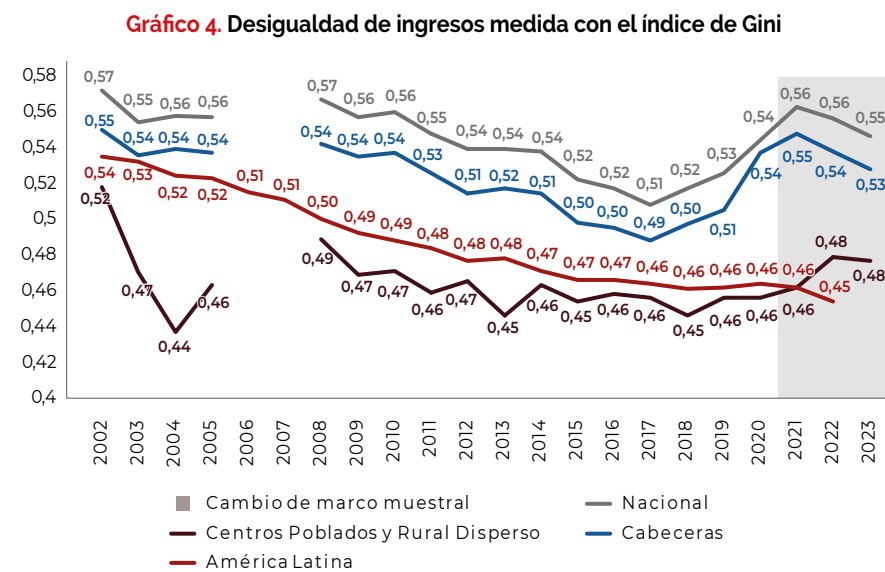
La brecha entre el promedio nacional y el indicador de pobreza monetaria o multidimensional en los departamentos más rezagados puede ser de más del doble. El promedio nacional esconde diferencias que el gráfico 3 muestra, a manera de ejemplo, para el año más reciente (2023). En Guainía y Chocó la pobreza monetaria alcanzó 65,3% y 67,7% frente a un promedio nacional de 33%. Así mismo, vale la pena resaltar que todos los departamentos de la región Caribe, con excepción del departamento del Atlántico, presentan incidencias de pobreza mayores en más de 10 puntos al promedio nacional. Así mismo, la pobreza multidimensional es dos y tres veces mayor en algunos departamentos de las regiones Caribe, Pacífica y Amazonia frente al promedio nacional.

¿Y la persistente desigualdad?

La desigualdad ha sido objeto de estudio y bandera de movimientos sociales en las dos primeras décadas de este siglo. Reducir las desigualdades es el objetivo 10 de la Agenda 2030 acordada por los países. Hoy no es posible avanzar en reducción de pobreza sin enfrentar la desigualdad de ingreso, de género, de raza, de edad y entre territorios.

América Latina es considerada la región más desigual, y Colombia, junto con Brasil y Chile, son los tres países con las mayores desigualdades de ingresos. Colombia redujo la desigualdad de ingresos medida con el índice de Gini, que pasó de 0,572 en 2002 a 0,508 en 2017. A partir de allí, volvió a crecer y se acentuó con el efecto de la pandemia hasta llegar a 0,544 en 2020. Y aunque se ha reducido desde 2021, aún su resultado más reciente en 2023 fue de 0,55, muy superior al promedio de la región que en 2022 fue de 0,45.

Colombia ha buscado enfrentar la heterogeneidad de su geografía y los diferentes niveles de desarrollo regional en distintos planes de desarrollo. En los últimos 15 años se ha promovido el desarrollo del sistema de ciudades, se realizaron propuestas, algunas de ellas hoy en marcha, para el desarrollo rural y, más recientemente, se busca la articulación rural-urbana como factor para el cierre de brechas y el desarrollo de diferentes regiones del país. La Misión de Descentralización que entregó su informe este año, también busca mejorar las oportunidades de la población en los municipios y departamentos más rezagados.



Nota: a partir del año 2021 la GEIH cuenta con un marco de muestreo actualizado con el censo de 2018 y algunos ajustes metodológicos.
Fuente: DANE.

La tarea hacia adelante

El crecimiento económico, la baja inflación, las políticas activas de empleo y de fortalecimiento del ingreso de los más pobres mostraron resultados en materia de pobreza y desigualdad. Hoy, con los nuevos retos que dejó la pandemia, como el atraso escolar o la inactividad laboral, especialmente de las mujeres por la mayor carga de cuidado, entre otros factores, exigen retomar las banderas, definir nuevas estrategias y continuar el camino.

Solo algunos elementos para considerar en esa agenda renovada. En primer lugar, la demografía. Colombia ha presentado en los últimos tres años una caída de los nacimientos y un aumento de la emigración que apuntan a una disminución de la población y a acelerar el proceso de envejecimiento del que ya daban cuenta las proyecciones de población. En segundo lugar, y ligado a las tendencias demográficas, los expertos señalan la necesidad de considerar un eje transversal en la agenda social enfocado en el cuidado, que puede convertirse con el envejecimiento en otro factor de mayor desigualdad.

Un tercer eje en el que existe un consenso es la educación con una agenda explícita de pertinencia y de calidad que garantice igualdad de oportunidades y forme en derechos y deberes ciudadanos. No es posible avanzar en la agenda para reducir la pobreza y la desigualdad sin crecimiento sostenible, que fortalezca el mercado laboral, porque es allí donde se resuelven los temas de pobreza. La inclusión social y laboral requieren del trabajo articulado de crecimiento y productividad con inclusión social y protección ambiental, todos ellos pilares de un sistema integrado de protección social. Se requiere el compromiso de distintos actores públicos y privados para hacer de la eliminación de todas las formas de pobreza y de desigualdad el centro de la agenda económica y social del país en los próximos años.

UNA MIRADA ALTERNATIVA AL PROBLEMA DE LA INFORMALIDAD

Una de las problemáticas constantes en el panorama laboral colombiano durante los últimos 50 años ha sido la informalidad. Su alto nivel y su permanencia en el tiempo la convierten en un tema fundamental por resolver.



Cristina Fernández

Investigadora
de Fedesarrollo

La informalidad es un tema complejo de enfrentar porque no existe un consenso de qué significa, ni cómo se mide, ni cómo debe reducirse, ni para qué. Existen dos clases de informalidad estrechamente relacionadas entre sí: la informalidad laboral, que se define como las personas que realizan cotizaciones a salud y pensiones; y la informalidad empresarial, que tiene múltiples criterios de definición de acuerdo con los requerimientos a las firmas, y van desde el registro de la firma en la cámara de comercio, hasta el pago de impuestos¹.

¿Para qué reducir la informalidad?

Es muy importante pensar que la formalidad no puede ser un objetivo en sí misma, sino que obedece a otros objetivos como:

1. Bienestar de los agentes.

A nivel de los trabajadores o de las firmas, la formalidad es el resultado de un análisis costo-beneficio que considera la protección y los beneficios que genera la formalidad versus sus costos. El problema es que ese análisis puede ser miope, en el sentido en que los beneficios a largo plazo no se valoran tanto como los costos a corto plazo. Esta situación es particularmente cierta para los jóvenes, que ven los beneficios a muy largo plazo; y las mujeres, que en el período de crianza prefieren dejar sus trabajos formales para tener más flexibilidad. Otra limitación de estas decisiones es que la transición de la formalidad tiende a ser irreversible. Así mismo, la decisión individual no toma en cuenta que la informalidad genera externalidades negativas para la sociedad en términos de una mayor población desprotegida que el Estado tendrá que cubrir con subsidios.

Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que la opción de ser formal no siempre está disponible. Hay negocios o trabajadores que no pueden ser formales porque no generan la productividad suficiente para cubrir sus costos. En este sentido, cierto grado de informalidad puede no sólo ser positivo, sino también necesario para el funcionamiento del mercado laboral. El impacto económico de la crisis migratoria o del COVID habría sido mucho más fuerte en ausencia de las opciones de ingresos que proporciona la informalidad. Así mismo, la informalidad es una opción de trabajo flexible en presencia de esquemas laborales rígidos.

2. Fiscal e instituciones. Desde el punto de vista fiscal y de competencia, la informalidad es costosa porque congestiona y no contribuye con los servicios públicos e impuestos, generando un espiral que finaliza en mayores impuestos y menor cantidad o calidad de los servicios

prestados. Así mismo, de acuerdo con De Soto (1989), las firmas informales desvían a corrupción entre el 10% y el 15% de su ingreso bruto, mientras que en las formales se desvía cerca del 1%. De otra parte, según la encuesta a empresarios del Banco Mundial - WBES, el 31% de las firmas en América Latina y el 55% de las colombianas, reporta las prácticas de sus competidores en el sector informal como una restricción a su crecimiento.

3. Productividad. Las firmas informales tienden a restringir su propio crecimiento para impedir quedar en el radar de las autoridades. Así mismo, las firmas informales tienen acceso restringido a servicios que contribuyen a incrementar la productividad como la oferta de crédito, protección de derechos de autor y la administración de justicia, entre otros.

Estado de la informalidad en Colombia

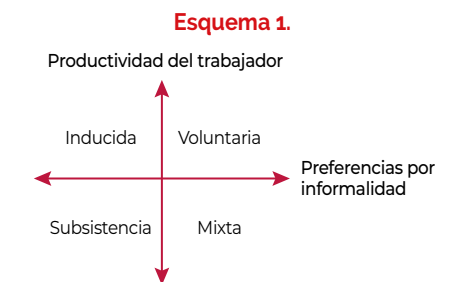
La evolución de la informalidad laboral en Colombia se observa en el Cuadro 1. La primera conclusión que se puede obtener de esta gráfica es su alto nivel (promedio del 59% en el 2022-2023) y su permanencia en el tiempo. La segunda es que, a diferencia de lo que ocurre en países como México, en Colombia gran parte de la informalidad está concentrada en los trabajadores independientes (trabajadores por cuenta propia y jefes), con 88%, versus 35% de los

trabajadores asalariados, que son tan solo el 50% de los trabajadores.

La informalidad empresarial es aún más difícil de medir porque Colombia no cuenta con un censo económico desde 1990². De acuerdo con la EEG, que recopila información a nivel de firmas³, el 31% de las firmas para las cuáles se tiene información son informales bajo el criterio más suave (registro en la cámara de comercio o RUT) y 88% bajo el criterio más estricto (tener Cámara de Comercio, RUT y pagar impuestos o estar exento de pagarlos). Estos criterios ascienden al 68% y 98% si se incluye el trabajo por cuenta propia.

Taxonomías de la informalidad laboral y empresarial en Colombia

Una segunda característica de la informalidad es su heterogeneidad. Fernández y Villar (2017) estiman una taxonomía que se encuentra detallada en el Esquema 1 y se explica de la siguiente manera:



Cuadro 1. Estadísticas de informalidad en Colombia

	2001-2007 ECH	2007-2020 GEIH marco poblacional 2005	2022-2023 GEIH marco poblacional 2018
Tasa informalidad laboral	73%	66%	57%
Tasa informalidad asalariados	48%	36%	29%
Tasa de informalidad independientes	93%	89%	85%
Tasa de trabajadores asalariados	51%	49%	50%

Fuente: Encuesta continua de hogares y GEIH. Nota no se incluyeron algunos datos de 2020 y 2021 porque se encuentran afectados por la pandemia.

¹ El Dane para medir la informalidad laboral utiliza un concepto mixto que aplica criterios de informalidad laboral para algunos sectores y criterios de informalidad empresarial para otros; para medir la informalidad empresarial construye un índice en firmas de menos de 10 trabajadores que abarca conceptos de informalidad de insumos, de entrada, de producción y tributaria. Estos conceptos no se utilizan en este trabajo porque mezclan los dos tipos de informalidad, haciendo difícil su interpretación.

² El Dane se encuentra en proceso de implementación de un nuevo Censo Empresarial.

³ Base de datos a nivel de empresa que recopila información de la encuesta de micronegocios, las encuestas estructurales a la manufactura, el comercio y los servicios y las encuestas que se le realizan a los empresarios en la encuesta de hogares (GEIH). Esta base de datos se conoce como la EEG (Fernández, 2024⁹).

- La informalidad de subsistencia (25%), se presenta en aquellos trabajadores que tienen muy bajos niveles de productividad y pocas probabilidades de acceso al mercado formal.
- La informalidad inducida (35%), está dada por aquellos trabajadores que tendrían la productividad suficiente para participar en el mercado formal, pero que se encuentran excluidos del mismo por barreras de entrada al mercado laboral.
- La informalidad voluntaria (24%), comprende a los trabajadores que tienen preferencias por el trabajo independiente, pero que podrían ser formales dada su productividad.
- La informalidad mixta (16%) que incluye a los trabajadores con informalidad de subsistencia e inducida; que tienen baja productividad, pero altas preferencias por el trabajo independiente. Estas preferencias pueden estar relacionadas con los incentivos erróneos de las políticas sociales, las fallas en la economía del cuidado y las dificultades de transporte a los centros de producción formal.

La informalidad empresarial puede explicarse con la Gráfica 14, que presenta una versión simplificada de la versión de Ulyseas (2018) y está estimada con los datos de

En Colombia, en promedio, las firmas deben pagar el salario mínimo y contribuir con cerca del 47% de los ingresos del trabajador para poderlos contratar formalmente.

La EEG. De acuerdo con esta gráfica, hay una región de subsistencia donde la productividad es tan baja que sólo pueden existir firmas informales. En la mitad se presenta una región donde las firmas podrían ser formales, pero les es más rentable ser informales, y donde consecuentemente la mayoría de las firmas son informales (inducida); y a partir de un punto, donde existen más firmas formales que informales, resulta más rentable ser formal.

Regulación de la informalidad en Colombia

En Colombia, en promedio, las firmas deben pagar el salario mínimo y contribuir con cerca del 47% de los ingresos del trabajador para

poderlos contratar formalmente. Adicionalmente, el trabajador contribuye con un 12% de sus ingresos. De acuerdo con la OECD (2022) el salario mínimo es el 91.3% del salario promedio en Colombia, similar al del Chile (90%) y superior al de México (68%)⁵. Así mismo, los sobrecostos de la nómina son comparables con los del promedio de América Latina (50% en promedio, según Alaimo et al (2017)).

Adicionalmente, existen algunas asimetrías que hacen desproporcionadamente costoso para las firmas pequeñas la contratación formal de sus trabajadores en Colombia. Como se ilustra en el Cuadro 2, si una empresa paga impuesto de renta, tiene derecho a descontar de la base de cotización sus costos laborales formales. Este descuento equivale a casi lo mismo que paga el empresario por la seguridad social de sus trabajadores. En definitiva, para estas empresas el costo neto después de impuestos de contratar a un trabajador formalmente versus informalmente es del 5% o menos. Sin embargo, esto no ocurre en las empresas registradas como personas naturales de bajos ingresos, que como no están obligadas a pagar impuestos no obtienen la deducción, y por lo tanto no tienen el incentivo a contratar a sus trabajadores formalmente. El porcentaje de microempresas que se encuentran por debajo del umbral es del 86%, y las microempresas son el 93% de las empresas del país (excluyendo empleo por cuenta propia).

Así mismo, existen grandes asimetrías en la cotización a seguridad social que hacen los trabajadores independientes, relacionadas con el establecimiento de la cotización mínima en un salario mínimo⁶. Esta normativa parece incumplible en un país donde el 45% devenga menos de un salario mínimo, y por sí sola explica el 42% de la informalidad en el país. Los trabajadores que ganan menos de un salario mínimo para ser formales tienen que declarar que ganan por lo menos un salario mínimo y cotizar un porcentaje desproporcionado de su ingreso para ser formales⁷. Esta disposición también

Cuadro 2. Costo relativo de contratar a un trabajador formalmente, después de impuestos; para firmas por debajo y por encima del umbral de pago de impuestos (2019)

Ingreso bruto anual COP\$ millones	Impuesto de renta Ty	Sobrecostos a la nómina Tw	Deducción de impuestos (1+ Tw) Ty	Costo relativo de contratar formalmente: Sobrecostos a la nómina – deducción de impuestos
< 48	0%	47%	0%	47%
> 48	29%	47%	147%*29%=42%	4.7%

Cuadro 3. Cotizaciones que deben hacer los trabajadores independientes de acuerdo con su salario

A. Ingreso neto	B. A * (1-60%)	C. Ingreso básico de cotización (máximo entre 1 SMLV Y B)	Cotización C * 33%	Cotización / ingreso bruto
2.500.000	1.000.000	1.000.000	328.500	13%
1 000 000	400.000	1 000 000	328.500	33%
500.000	200.000	1 000 000	328.500	65%

limita los trabajos de tiempo parcial, afectando de manera particular a las mujeres y a los estudiantes.

Pero los efectos de esta normativa no se limitan a los que ganan menos de un salario mínimo. La legislación laboral establece que un trabajador independiente puede deducir hasta el 60% de sus ingresos brutos de la base de cotización de las prestaciones sociales, siempre y cuando la base no resulte inferior al salario mínimo. Esta determinación es muy favorable para aquellos que ganen ingresos en un 60% superiores al salario mínimo (más de 2.5 salarios mínimos), que terminan cotizando para seguridad social un 13% de sus ingresos; pero afecta a quienes ganan por debajo de este rango, porque no pueden realizar toda la deducción. El caso extremo lo enfrentan los que ganan un salario mínimo que tienen que cotizar cerca del 33% de sus ingresos.

Un artículo de la reforma laboral que presentó recientemente el gobierno establece que los micro-negocios podrán realizar cotizaciones mensuales a seguridad social de tiempo parcial aún si el ingreso básico de cotización es inferior a un salario mínimo. La aprobación de este artículo solucionaría muchas de las asimetrías mencionadas anteriormente. Así mismo, la reforma pensional incentiva la formalidad en cuanto a que facilita la probabilidad de lograr una pensión; particularmente entre las mujeres.

Medidas para controlarla

Gran parte de las asimetrías y contradicciones de la legislación laboral, así como en la baja cobertura del sistema, están en la concepción que se ha tenido del aparato productivo del país como una colección de empresas medianas o grandes que funcionan como las que se observan

en el sector manufacturero y trabajadores que se emplean por tiempo completo, en horarios establecidos. Se ignoran las dinámicas que se observan en sectores como los servicios o el comercio y, en particular, se ignoran a las microempresas.

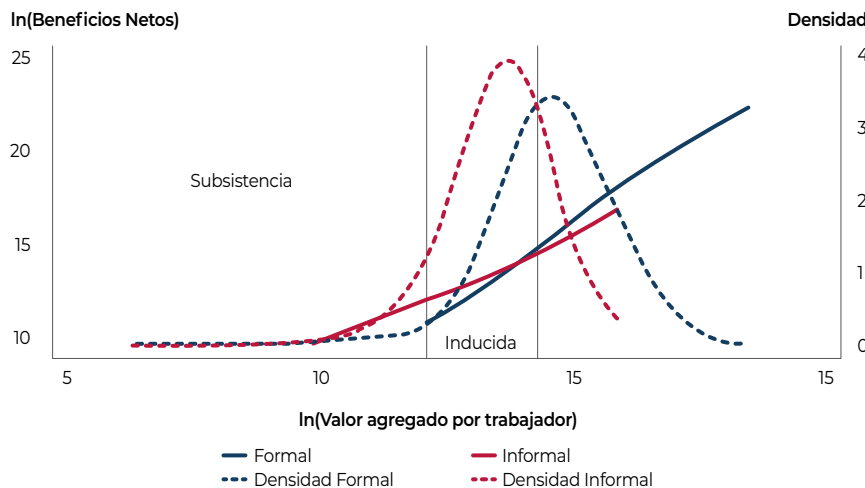
En principio, lo más indicado sería pasar a un sistema de seguridad social fijado con impuestos nacionales y no con sobrecostos al trabajo. El hecho de que el Gobierno ya costee el 30% de estos aportes en las firmas que pagan impuestos vía mayores deducciones, nos indica que ese cambio podría ser menos drástico de lo previsto.

Teniendo en cuenta las dificultades para migrar a este modelo, existen algunas recomendaciones que pueden tomarse más en el corto plazo. Para los trabajadores/firmas de subsistencia la política más utilizada hasta el momento ha sido la tolerancia. Sin embargo, el aumento en el escrutinio internacional hace pensar que es importante pasar de la tolerancia a la creación de un sistema de cotizaciones y registro de las empresas que se ajuste a las características productivas; como el monotributo social, que incluya aportes a seguridad social. La educación es otra variable clave, pero con efectos de más largo plazo.

Sobre el grupo de informalidad inducido es donde se deben hacer más esfuerzos para lograr aumentos en la productividad y al mismo tiempo reducir las asimetrías de contribuciones después de impuestos, pero deben tomarse medidas adicionales para que esto no termine en la creación de incentivos erróneos en el tamaño de las firmas. Sobre las firmas y los trabajadores más productivos, el monitoreo y control, así como la creación de un esquema de seguridad social flexible en términos de tiempo para trabajadores independientes, son la receta más indicada.

⁴ Esta gráfica muestra las ganancias de las firmas (líneas continuas) y las distribuciones del número de firmas (líneas punteadas), ordenadas por productividad y diferenciadas para firmas formales (azules) e informales (rojas).
⁵ <https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/employment-protection-and-minimum-wages.html>
⁶ La historia es que en la Constitución colombiana se menciona que el trabajo debe ser digno; los legisladores han interpretado que un trabajo digno debe de devengar por lo menos un salario mínimo; y los cuidadores del erario definieron entonces que la cotización debería ser de por lo menos un salario mínimo al mes.
⁷ De hecho no están obligados a cotizar, por lo cual se pueden considerar como informales legales en el sentido de Levy (2018).

Gráfica 1. Informalidad empresarial (criterio fuerte), ganancias de las empresas y su distribución de acuerdo con su valor agregado por trabajador y su formalidad



Fuente: EEG (2019).



UNA REVOLUCIÓN SILENCIOSA

El país de 1970 se parece poco al país de hoy en términos de educación. La cobertura que se ha logrado era difícil de imaginar hace medio siglo, aunque aún quedan retos importantes en calidad y en desigualdades regionales.



Adolfo Meisel Roca
Rector,
Universidad del Norte



Iván Luzardo Luna
Director de Planeación,
Universidad del Norte

En los últimos 50 años, Colombia ha experimentado un enorme progreso en su sector educativo. El motor de esa transformación ha sido un sustancial aumento en la cobertura educativa, que ha alcanzado a grandes seg-

mentos de la población que estuvieron excluidos del sistema hasta las últimas décadas del siglo XX. Los aumentos en cobertura se han dado en todos los niveles, transformando profundamente la fuerza laboral del país. Esta ha sido una revolución

silenciosa que no solo ha tenido un profundo impacto social, sino que también ha construido un capital humano que es esencial para crecer económicamente en un contexto de rápido cambio tecnológico.

A pesar del gran progreso en cobertura, el país aún enfrenta desafíos en calidad y equidad regional. Los resultados en las pruebas estandarizadas internacionales indican que el país registra los niveles de calidad ligeramente esperados para su nivel de renta, aunque por debajo del promedio de la OECD. Por otra parte, la oferta educativa de alta calidad se concentra en el centro del país, lo que contribuye a mantener las grandes disparidades regionales que han caracterizado históricamente a Colombia.

Avanzar en calidad y reducir las brechas regionales serán los principales desafíos en las próximas décadas. Adicionalmente, el reciente estancamiento en la cobertura de educación superior es otro reto para el sector, que merece la mayor atención y que podría opacar el gran progreso logrado en cobertura.

El gran aumento en cobertura

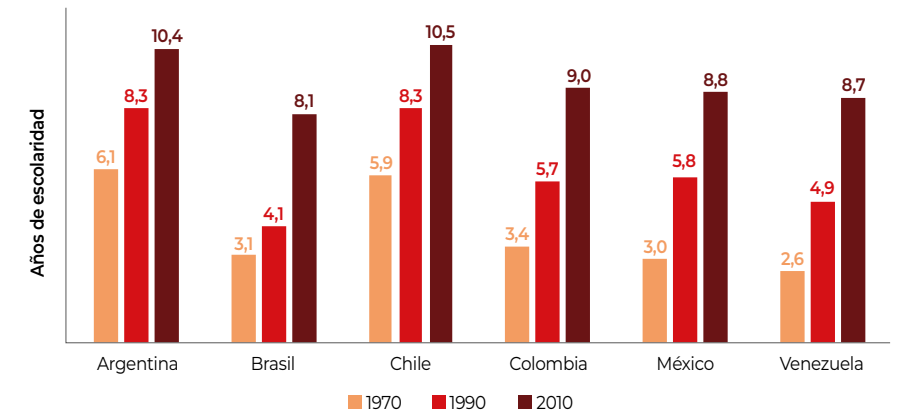
En 1970, aproximadamente el 25% de la población era analfabeta. En ese mismo año, un colombiano promedio probablemente tenía algunos años de educación primaria, pero la educación secundaria aún no era común, mientras que la educación superior era directamente inaccesible para la mayor parte de la población.

El país de 1970 se parece muy poco al del 2022. En la segunda década del presente siglo, el país registra prácticamente cobertura universal en educación primaria y secundaria, mientras que el acceso a la educación superior es ahora accesible para gran parte de la población. El colombiano promedio en 2022 probablemente ha finalizado su educación secundaria y, dependiendo de sus circunstancias y lugar de residencia, también su educación universitaria. Las diferencias entre 1970 y 2022 se pueden concluir al analizar los gráficos 1 y 2.

El aumento de la cobertura en educación primaria ocurrió como resultado de un avance lento, pero constante, en la segunda mitad del siglo XX (ver gráfico 3). Esta tendencia es consistente con lo observado a nivel internacional, con la consolidación de los estados de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, la educación secundaria (ver gráfico 4), con un notable rezago, comenzó su avance significativo a partir de la década de los 60, aunque su crecimiento se aceleró entre mediados de los 80 y el 2010.

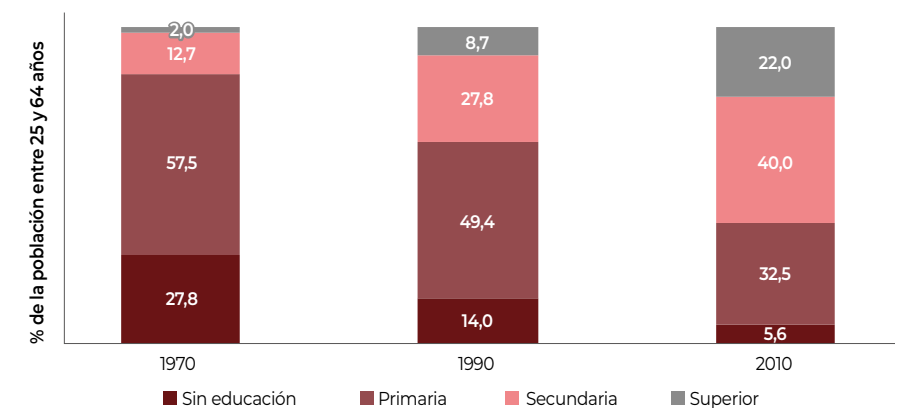
La educación secundaria parece mostrar una mayor sensibilidad a los ciclos económicos, con un fuerte estancamiento a principios de los 80 en el contexto de la crisis de la deuda latinoamericana, así como durante la crisis de 1999. Esta sensibilidad a los

Gráfico 1. Años de escolaridad para la población entre 25 y 64 años (1970, 1990 y 2010)



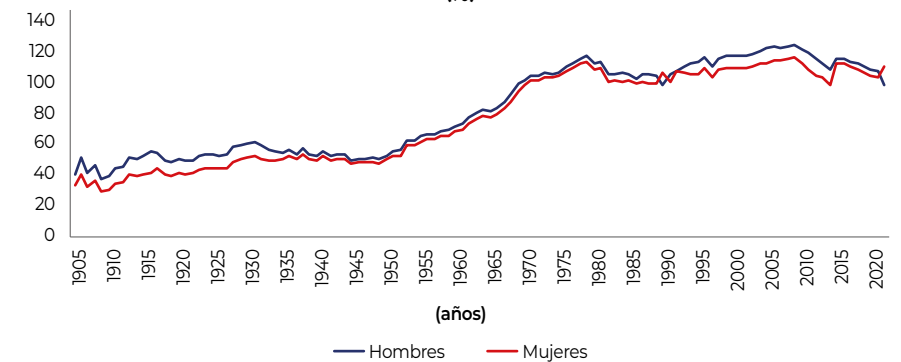
Fuente: Barro and Lee (2015).

Gráfico 2. Composición de la población entre 25 y 64 años por el mayor nivel educativo alcanzado (%)



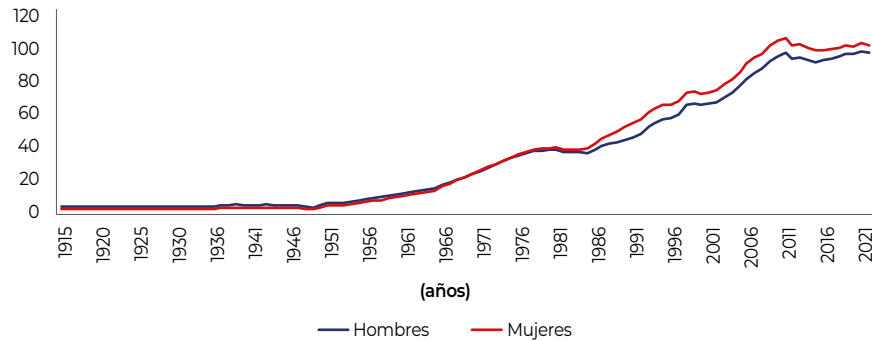
Fuente: Barro and Lee (2015).

Gráfico 3. Tasa bruta de matrícula en educación primaria por sexo en Colombia (%)



Fuente: 1905-2015: Jaramillo-Echeverri, Meisel-Roca y Ramirez-Giraldo (2019); 2015-2022: Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media (SINEB) y DANE (Proyecciones poblacionales) (consultado en agosto 2024). Nota: TBMP = MEP/POP7-11(estimado); TBMP: tasa bruta de matrícula en educación primaria; MEP: matrícula en educación primaria; POP7-11: población estimada de 7 a 11 años de edad.

Gráfico 4. Tasa bruta de matrícula en educación secundaria por sexo en Colombia (%)



Fuente: 1905-2015: Jaramillo-Echeverri, Meisel-Roca y Ramírez-Giraldo (2019); 2015-2022: Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media (SINEB) y DANE (Proyecciones poblacionales) (Consultado en agosto 2024). Nota: TBMS = MES/POP12-17(estimado); TBMS: tasa bruta de matrícula en educación secundaria y media; MES: matrícula en educación secundaria; POP12-17: población estimada de 12 a 17 años de edad. A partir del 2015 se toma en cuenta la educación secundaria y educación media.

ciclos económicos probablemente está relacionada con mayores restricciones presupuestarias durante estos periodos, así como con una mayor deserción escolar entre los jóvenes, quienes optan por participar en el mercado laboral para mitigar la pérdida de ingresos en sus hogares.

De la década dorada de aumento en la cobertura de educación superior, al reciente estancamiento

La educación superior no ha sido ajena a los progresos en térmi-

nos de cobertura. Con mayor reza- go que los otros niveles educativos, la educación superior experimentó un notable aumento en cobertura durante el presente siglo. Como se observa en el gráfico 5, la tasa de cobertura bruta en educación terciaria pasó del 26,6% en 2004 al 54,7% en 2015. En otras palabras, entre 2004 y 2015 Colombia vivió una década dorada de crecimiento en la educación superior. Las puertas de la universidad se abrieron por primera vez para un amplio grupo de la población.

Dentro de las razones de esta fuerte expansión influyeron tanto factores de oferta como de demanda. Por un lado, la década dorada del crecimiento en la cobertura de educación superior coincide con un periodo de fuerte crecimiento económico, impulsado por el superciclo de los *commodities*. El aumento en la renta per cápita incrementó naturalmente los recursos disponibles de las familias para invertir en educación superior. Sin embargo, el aumento de la cobertura observado en educación ocurrió en un periodo de tiempo tan reducido que indica que hay elementos más allá del crecimiento económico que influyeron en dicha expansión.

El gráfico 6 presenta la evolución del PIB per cápita en términos constantes y la tasa de cobertura bruta de la educación superior para varios países de la región, durante el periodo de acelerado crecimiento de su cobertura en dicha materia. Al observar este gráfico, se puede ver que Colombia experimentó una aceleración en su cobertura educativa muy por encima de lo que podría asociarse con el crecimiento económico, considerando las experiencias regionales. Por ejemplo, Colombia tiene una cobertura en educación superior más alta que la de México, a pesar de que este último tiene una mayor renta per cápita.

En la expansión de la cobertura en educación terciaria experimentada en Colombia, la política pública también tuvo un impacto decisivo. La expansión de los programas de créditos educativos a través del ICETEX tuvo un impacto significativo en los aumentos de cobertura. De acuerdo con datos de esta institución, en el año 2003 se otorgaron 23.261 nuevos créditos educativos. Para el 2015, el número de nuevos créditos había aumentado a 89.996, casi cuadruplicando el número de principios de siglo.

A pesar de la significativa expansión de la educación superior hasta el 2015, a partir de ese año comenzó una nueva década que puede describirse como un relativo estancamiento en torno a un

poco más del 50% en términos de cobertura bruta. Las razones detrás del estancamiento son múltiples, pero es importante destacar la mayor dificultad en incluir a los segmentos de la población que aún están por cubrir.

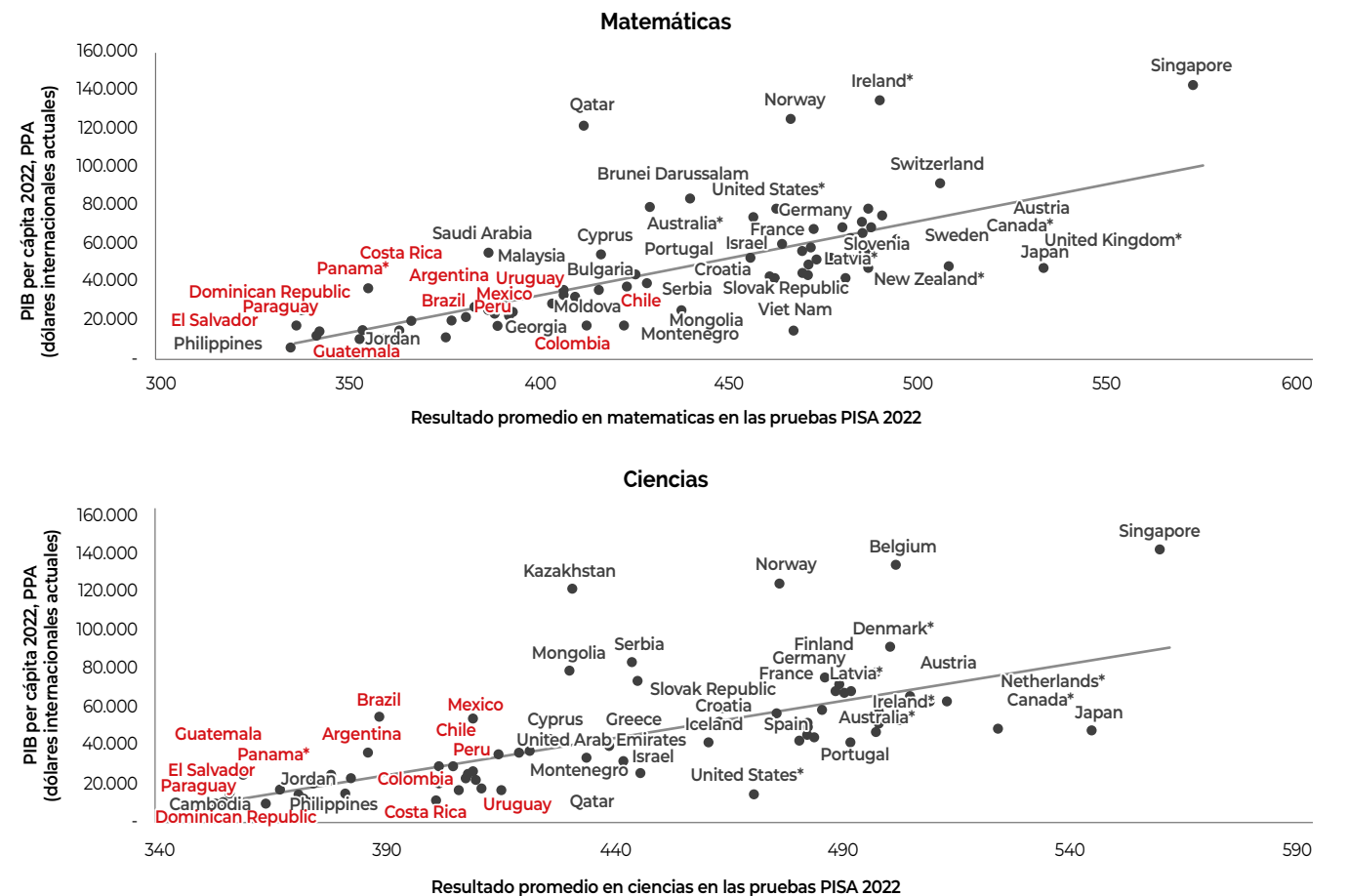
La educación superior no solo tiene un costo financiero directo, sino también un costo de oportunidad en términos de los años que se dejan de trabajar. En la medida en que la cobertura se va acercando a los grupos de menores ingresos, es plausible asumir que el costo de oportunidad tiende a aumentar para esta población. Lo anterior indica que las políticas públicas orientadas a aumentar aún más la cobertura en educación superior deberán considerar no solo los costos directos

de los programas de pregrado, sino también los gastos indirectos, como los costos de manutención o movilidad de los estudiantes.

El reto en la calidad y las desigualdades regionales

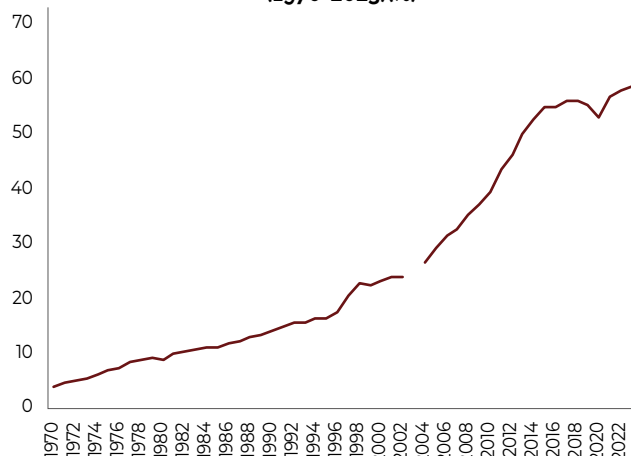
Además del estancamiento en la cobertura de la educación superior, el otro gran reto del sistema educativo colombiano es la mejora de su calidad. Al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, Colombia alcanza un desempeño relativamente bajo en las pruebas PISA. Sin embargo, una vez que se tiene en cuenta el nivel de ingreso per cápita, los resultados de Colombia son, en términos generales, los esperados dado su nivel de desarrollo (ver gráfico 7). Esto

Gráfico 7. Correlación entre el PIB per cápita y el desempeño en matemáticas y ciencias en las pruebas PISA 2022



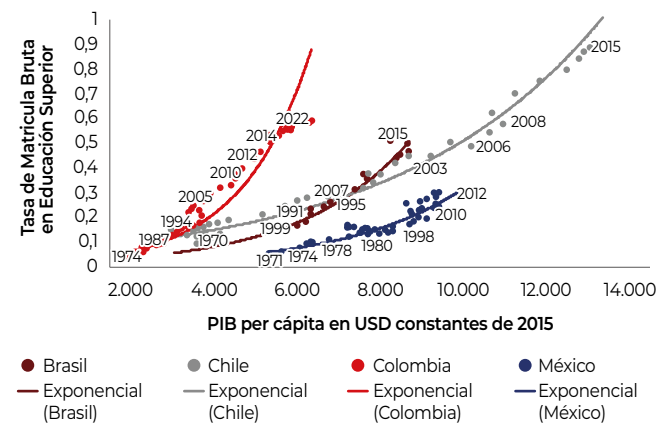
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OECD (2024) y el Banco Mundial (2024).

Gráfico 5. Tasa de cobertura bruta en educación terciaria de Colombia (1970-2023)(%)



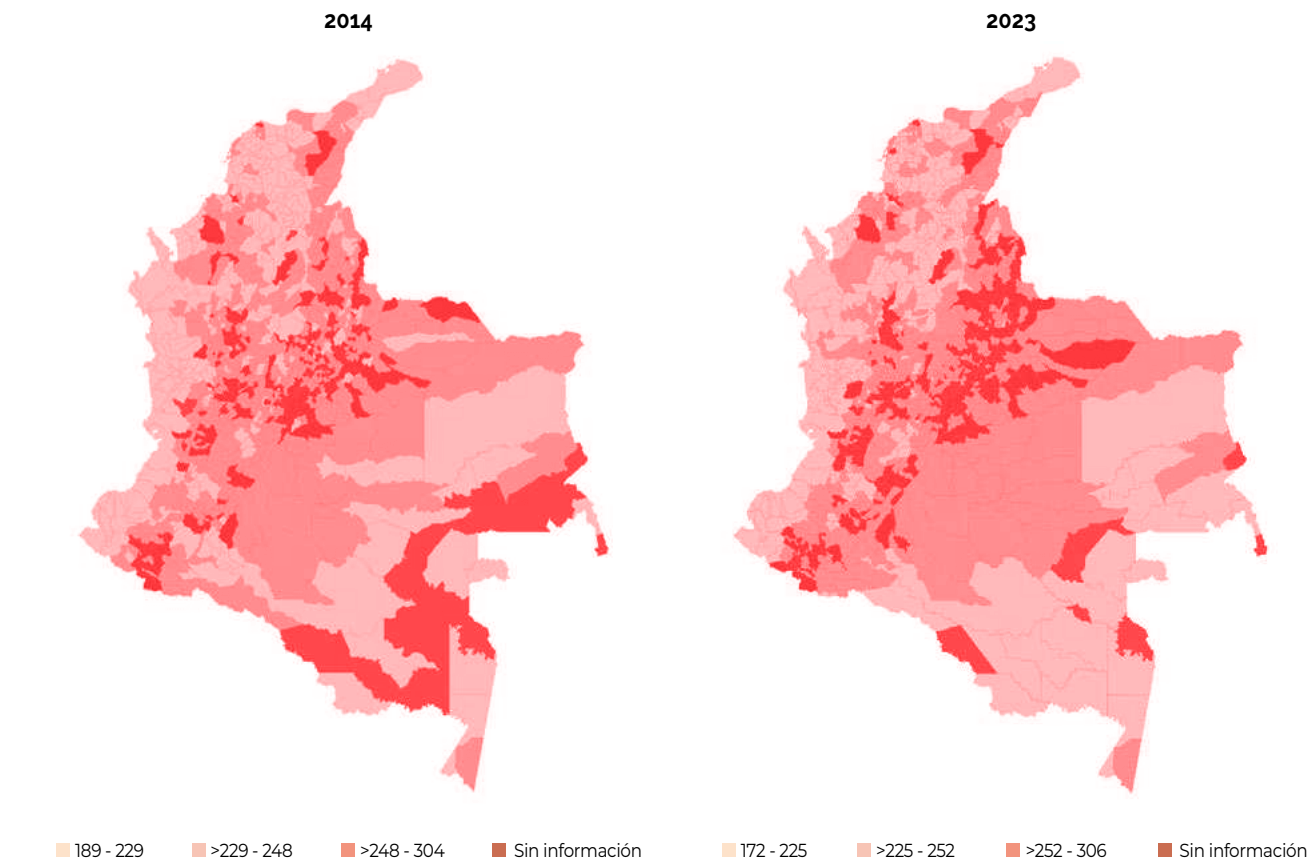
Fuente: elaboración propia a partir del SNIES del MEN (2024).

Gráfico 6. Expansión de la tasa de cobertura en educación superior y crecimiento del PIB per cápita entre 1970 y 2023



Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial (2024) y el SNIES del MEN (2024). Nota: Para Colombia la serie abarca el periodo 1970-2023. Para Brasil, 1999-2015. Para el resto de los países, 1970-2015.

Gráfico 8. Puntaje promedio de los municipios de Colombia en las pruebas Saber 11, 2014 vs 2023



Fuente: elaboración propia a partir de datos del Icfes (2024).

nos lleva a concluir que el país ha superado lo esperado en términos de cobertura, pero se ha mantenido dentro de lo esperado en términos de calidad. En ese sentido, una pregunta que gana relevancia es: ¿qué puede hacer Colombia para alcanzar en términos de calidad el mismo éxito observado en cobertura?

Al explorar el comportamiento de la calidad educativa del país, un elemento fundamental son las grandes desigualdades regionales. El gráfico 8 presenta los resultados de las pruebas Saber 11 a nivel municipal. Mientras que los altos puntajes promedio se concentran en el centro del país, los departamentos periféricos en las costas Atlántica y Pacífica, así como en el suroriente del país, se caracterizan por bajos puntajes promedio.

Este resultado, que ha sido persistente desde que tenemos

registros de las pruebas Saber 11, permite identificar una estrecha conexión entre calidad y desigualdad regional. El camino hacia la calidad pasa necesariamente por cerrar las brechas regionales. Detrás de las desigualdades regionales subyace una profunda desigualdad de ingresos, de modo que la política pública debe orientar sus esfuerzos e inversiones para que la población tenga acceso a una educación de calidad, independientemente de su nivel de ingreso.

La educación como estrategia de crecimiento

Sin duda, Colombia ha tenido avances en su sector educativo, alcanzando una cobertura difícil de imaginar hace medio siglo. Después de varias décadas de progreso, el país cuenta con un capital humano que es fundamental en el contexto

de la economía del presente siglo, donde los servicios de alto valor agregado se han convertido en el motor del crecimiento económico. Por ese motivo, las inversiones en educación deben verse no solo desde el impacto redistributivo que tienen, sino como un elemento esencial para impulsar el crecimiento y desarrollo económico del país de las próximas décadas.

Para cumplir ese propósito, es indispensable una serie de políticas orientadas a mejorar la calidad del sistema en general y a continuar aumentando la cobertura de la educación terciaria en particular. Esto último implicaría un aumento en la productividad laboral y, en consecuencia, de la participación del sector formal de la economía, generando así un círculo virtuoso de educación, acumulación de capital humano y prosperidad.

REFLEXIONES SOBRE CONVERGENCIA

El economista Robert Lucas dijo: "Una vez que empiezas a pensar en el crecimiento económico, es difícil pensar en otra cosa." Esta columna la dedico a aspectos que trascienden al ciclo económico, en lo que me focalizo rutinariamente, para darle paso a una mirada de largo plazo a la economía colombiana.

Para ello, analizaré la evolución del PBI per cápita, proxy del poder de compra o adquisitivo del ciudadano promedio de un país. A tal fin, compararé la evolución del PBI per cápita en Colombia con el de Estados Unidos (EE. UU.). Ergo, el foco del análisis radica en la evolución del poder adquisitivo relativo, lo cual se relaciona con la discusión de convergencia económica.

En dólares corrientes, el PBI per cápita de Colombia en 1975 equivalía al 8.4% del de EE.UU. En 2022, casi 50 años después, el PBI per cápita relativo fue del 8.7%. Esto implica que en casi 50 años Colombia no ha podido incrementar el poder de compra relativo de sus ciudadanos en más de 3.6% (lo que equivale a un misero promedio de 0.07% al año). Ciertamente, podríamos aducir que hacia 2014 el PBI per cápita llegó a representar el 14% del de EE.UU. Pero aún ese nivel no debería dejaría insatisfechos, y pondría seriamente en duda la teoría de convergencia económica, tanto en su variante absoluta como relativa.

Sin embargo, si lo que intentamos comparar es el poder de compra relativo en una economía y otra, medir el PBI en términos de dólares corrientes no es la manera más apropiada. Ello deriva del precio relativo de los bienes no transables, principalmente los servicios, que tienden a ser más "baratos" en economías menos ricas. Con el fin de corregir esta distorsión, el PBI en dólares se ajusta por "paridad de poder de compra" (PPC). El ajuste por PPC es entonces clave al momento de realizar comparaciones internacionales de niveles de vida, al



Diego Pereira

DIRECTOR EJECUTIVO Y ECONOMISTA
JEFE DEL CONO SUR Y LOS ANDES
DE JP MORGAN

ajustar precios nominales para reflejar mejor las diferencias en el costo de vida entre países. Las series ajustadas del WEO (FMI) comienzan en 1990, por lo cual la historia queda reducida en algunos años con respecto al periodo de tiempo analizado anteriormente.

Una vez corregido el PBI por PPC, el PBI per cápita de Colombia sube a 22.7% del de EE. UU. en 1990, llegando al 26.3% en 2022. Es decir, los niveles relativos de poder de compra se elevan, pero la evolución punta a punta sigue mostrándose escasa.

Más allá de la comparación entre el año inicial y final de la serie, es también de relevancia analizar su evolución. En relación con EE. UU., el PBI per cápita creció fuertemente en el periodo 2003-2014, estancándose desde entonces. No son ajenas las dificultades que ha atravesado la economía colombiana desde entonces, entre otras cosas perdiendo el estatus "investment grade".

La apertura comercial y el desarrollo del mercado financiero son factores que aparecen como condiciones necesarias para un proceso de convergencia sostenible.

Pero las dificultad en acelerar el proceso de convergencia no es particular a Colombia. De hecho, la mayoría de las economías emergentes ha mostrado una fuerte desaceleración en la tasa de convergencia (medida en este caso como PBI per cápita relativo a EE.UU.) en la última década, en comparación a la anterior. En crio-llo, el aumento del PBI per cápita en la década 2012-2022 desaceleró en forma marcada con respecto a lo visto en 2003-2011. En este sentido, Colombia aparece en medio del pelotón de las economías emergentes que forman parte de Índice de inversión en deuda de mercados locales GBI-EM de J.P. Morgan, a pesar de que presenta uno de los niveles más bajos de PBI per cápita en relación con EE.UU. Solo República Dominicana ha mostrado un paso de convergencia más rápido en la década reciente.

Conformarse con tasas de convergencia cada vez más bajas sería simplemente una condena a las generaciones futuras. Por el contrario, entender los pilares que llevaron a República Dominicana a acelerar su tasa de convergencia parece oportuno. Esta economía se ha orientado hacia la manufactura, apoyada por el crecimiento de las zonas francas, volcándose posteriormente a una economía impulsada por los servicios, fortalecida por la explotación del potencial turístico del país y la expansión del sistema financiero. Los datos continúan mostrando que la apertura comercial y el desarrollo del mercado financiero son factores que, aunque recurrentemente discutidos, aparecen como condiciones necesarias para un proceso de convergencia sostenible.

MOTOR DE EQUIDAD

El sistema de salud ha sido un motor de equidad en Colombia en las últimas décadas. Cobertura, calidad y bajo gasto de los hogares son logros indiscutibles que no se deben poner en riesgo.



Anwar Rodríguez Chehade
Vicepresidente de Salud
ANDI



Camila Ciurlo Aragón
Asesora Vicepresidencia de Salud
ANDI



Paul Díaz Trillos
Asesor Vicepresidencia de Salud
ANDI

A tender las necesidades de salud es uno de los principales retos de las sociedades modernas. La salud es multifactorial y compleja, por eso, para mejorar el estado de salud de la población, se requiere de la acción coordinada de un conjunto de individuos, instituciones y recursos, todos estos organizados a través de un sistema de salud (OECD, 2017). Además, es un reto que cada vez toma mayor relevancia debido a las presiones por el envejecimiento de la población, el incremento en la esperanza de vida, la demanda por más y mejores servicios de salud y el costo de la innovación.

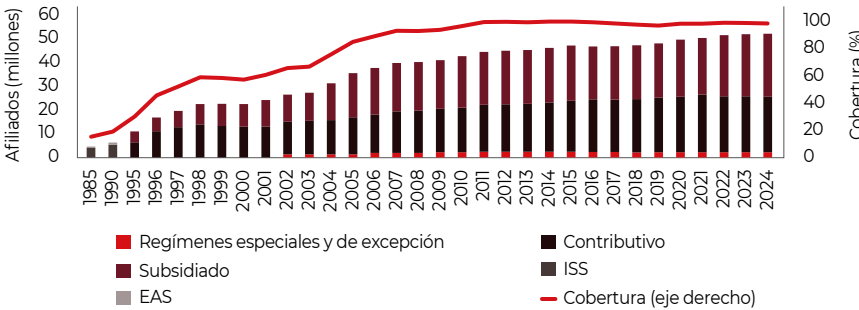
Para alcanzar el fin último de promover, mejorar y mantener la salud de los individuos, los sistemas de salud deben contar, como mínimo, con un diseño institucional y de gobernanza, un proceso de financiación y un esquema de provisión de servicios (WHO, 2000). No hay una única alternativa ni una receta universal para el diseño de un buen sistema de salud, pero la forma en que se organiza, funciona y financia es fundamental para medir su desempeño.

Los atributos de un buen sistema de salud están relacionados con: i) cobertura y acceso a la población, independientemente de su capacidad de pago, ii) calidad y satisfacción en la atención a pacientes y usuarios, iii) protección financiera a los hogares, y iv) sostenibilidad financiera. En resumen, un buen sistema de salud debe cubrir a toda la población, brindar servicios de calidad y proteger su bolsillo.

Los logros del sistema de salud colombiano en las últimas décadas pueden analizarse a la luz de

estas dimensiones. En 1985, hace casi cuarenta años, la cobertura era de apenas el 15,2%. La creación del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), a través de la Ley 100 de 1993, significó un crecimiento exponencial en la población cubierta. En la actualidad, sumando los afiliados de los regímenes contributivo y subsidiado, así como los regímenes especiales, la cobertura es cercana al 99% (gráfico1). Desde la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015), Colombia cuenta con un sistema implícito donde están cubiertas

Gráfico 1. Cobertura en Salud (1985 – 2024)



Fuente: elaboración propia con base en ISS, Minsalud (2024).

la gran mayoría de tecnologías sanitarias disponibles en el país. El Plan de Beneficios es idéntico entre los regímenes contributivo y subsidiado e independiente de la capacidad de pago de los hogares.

Para medir la satisfacción que tienen los usuarios, el ministerio de Salud realiza anualmente encuestas de percepción de los servicios prestados por las aseguradoras. En ninguna vigencia el porcentaje de personas insatisfechas ha superado el 8%. Durante la pandemia, el nivel de satisfacción de los colombianos alcanzó máximos históricos. En la actualidad, más del 79% de los colombianos recomendaría su aseguradora, muestra de la valoración social del sistema de salud.

Por su parte, la protección financiera es uno de los principales indicadores del progreso del sistema en términos de equidad. El gasto de bolsillo, entendido como *“la cantidad de dinero que los miembros de un hogar gastan cuando utilizan servicios de salud, y el dinero para hacer esos pagos sale de su bolsillo debido a que no está cubierto por un seguro o por un tercer pagador”* (Maldonado et.al, 2022) permite medir no solo la protección financiera que brinda el sistema de salud, sino también es un indicador de acceso a los servicios. Un gasto de bolsillo alto es reflejo de un sistema que no atiende.

Existe cierta controversia acerca de los elementos que integran el gasto de bolsillo. Aquí uti-

lizamos la definición de gasto de bolsillo ampliado propuesto por Maldonado et. al. (2022) y calculado con base en la Encuesta de Calidad de Vida (ECV). Bajo esta definición, el gasto de bolsillo incluye consultas médicas u odontológicas particulares¹, medicamentos, exámenes diagnósticos, terapias médicas y alternativas, vacunas, dispositivos médicos (p. ej. lentes), cirugías y hospitalizaciones particulares y el transporte para la atención médica.

Los cálculos se hicieron con el fin de entender qué tanto ha avanzado el país en este indicador en los últimos 30 años. La metodología de cálculo parte de desagregar cada uno de los gastos en los que puede incurrir una persona para acceder a servicios de salud, se realizan a nivel de individuo y se expanden con el factor poblacional.

Los resultados (tabla 1) muestran estimaciones del gasto de bolsillo entre 1997 y 2023. A pesar del incremento poblacional, se destaca la caída del gasto de bolsillo en términos reales entre 1997 y 2021, de más del 50%. Esta disminución es mucho más sorprendente si se considera el envejecimiento de la población y la innovación tecnológica. Mientras que en 1997 el gasto de bolsillo representaba casi 4 puntos del PIB, ahora no llega ni siquiera a un punto.

Este logro no es menor, y el esfuerzo para lograrlo no ha sido gratuito ni sencillo. El gasto en salud ha aumentado casi tres puntos del PIB en

los últimos 30 años. La búsqueda de la equidad en el sistema fue una de las motivaciones para la reforma al Sistema Nacional de Salud en el año 1993 y hoy, en medio de unas acaloradas discusiones sobre el futuro del SGSSS, es uno de los factores que se encuentra más amenazado.

Si nos remontamos a la exposición de motivos de la reforma del 93 los datos son claros: *“... en materia de salud encontramos cómo la insolidaridad se ha expresado en el alto gasto que en esta materia deben hacer los hogares de menores ingresos (...), aunque casi el 60% de las personas financian sus consultas utilizando sus propios recursos, son los hogares pobres los que gastan en salud proporcionalmente más que los no pobres...”* (Gaceta 130/93). En la actualidad, solo el 7% de la población financia sus consultas utilizando recursos propios.

Colombia debate en este momento una reforma que podría cambiar el destino del sistema de salud para siempre. Más allá de las posiciones y de quienes digan estar a favor o en contra, no menospreciamos ni tiremos por la borda los avances que ha tenido el sistema en materia de equidad. Las señales son claras, el gasto de bolsillo entre el 2022 y el 2023 aumentó un 7% en términos reales, después de una senda de decrecimiento sostenida ¿No es eso acaso consecuencia del desfinanciamiento estructural y los problemas de flujo de recursos que hoy aqueja el sistema?

Tabla 1. Gasto de bolsillo en salud (1997, 2021-2023)

Año	Gasto de bolsillo	Gasto de bolsillo (billones constantes de 2023)	Crecimiento nominal	Crecimiento real	Gasto de bolsillo como % del PIB
1997	5,6	24,8			3,9%
2021	9,4	11,6	68,7%	-53%	0,8%
2022	10,0	10,9	6,5%	-6%	0,7%
2023	11,7	11,7	17,2%	7%	0,7%

Fuente: cálculos propios con base en ECV (1997, 2021, 2022, 2023) y DANE.

¹ En caso de ser a través de la EPS o seguro voluntario se suman los copagos y cuotas moderadoras. Esto también aplica para cirugías y hospitalizaciones.
• Congreso de la República (1993). Gaceta No. 130
• Maldonado, N. Soto, V. Guerrero, R (2022). “Mesa. gasto de bolsillo en salud”. Proesa.
• OECD (2017). A System of Health Accounts 2011: Revised Edition.
• Soto, V. (2024). “Cuánto ha Avanzado el Sistema de salud colombiano en protección financiera”. Proesa.
• WHO (2000). The World Health Report 2000. Health Systems: Improving Performance.

LA SEGURIDAD PERDIDA

Así han sido 50 años de transformación de la violencia y reorganización del narcotráfico en Colombia.



Jorge Restrepo

Profesor de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana y director del CERAC.

En 1974 inició en Colombia un deterioro sostenido de la seguridad, que alcanzó su peor nivel en 1991. Tras un breve período de mejora después del dismantelamiento de los cárteles del narcotráfico, en 1998 se inició la reorganización de los grupos criminales y se intensificó el conflicto armado interno. La carencia de una política criminal después del Acuerdo de Paz llevó a otra reorganización del crimen, a que su violencia se trans-

formara y a potenciar la producción de narcóticos, lo que ha impedido recuperar la seguridad perdida.

La organización de grupos criminales en Colombia estuvo ligada al contrabando desde comienzos de los años setenta, con el tráfico de marihuana como su principal actividad. La marihuana era entonces un *commodity* de consumo directo sin mayor transformación, lo que permitía acumular en Colombia buena parte de las rentas derivadas de su tráfico. También aquí se quedó la violencia de las disputas por las rentas acumuladas.

La pérdida de la seguridad estuvo marcada así por la conformación de formidables organizaciones para el tráfico de droga, que buscaban acumular poder de mercado mediante el uso instrumental de la violencia homicida. También comenzaron a usar la violencia y la corrupción para disuadir bajo amenaza al débil aparato policial y judicial de lucha contra el crimen, y para resolver, con violencia, los "incumplimientos y asuntos internos" de cada organización.

El crecimiento de las organizaciones criminales, que correctamente fueron llamadas en los años ochenta "cárteles del narcotráfico", fue posible por el uso concentrado de las capacidades del aparato de seguridad en la lucha contra los grupos insurgentes comunistas fundados a mediados de los años sesenta: las FARC, el ELN. Todas estas organizaciones libraron hasta entonces una guerra de guerrillas de baja intensidad, comparada con conflictos armados de otros países, aunque contribuían de manera importante al deterioro de la seguridad rural.

La emergencia de entables de producción de cocaína desde me-

diados de los ochenta en el sur del país, le entregó recursos frescos a las hasta entonces militarmente débiles guerrillas. El fortalecimiento del M-19 en los años ochenta, de las FARC en los noventa, y del ELN en el siglo actual estuvo signada por la financiación del cultivo de coca, el procesamiento de la cocaína y el contacto con el tráfico transnacional. Con esa plata no sólo se financió el conflicto, sino que se abrió un frente violento de disputa con las organizaciones del narcotráfico, organizadas en grupos paramilitares desde los ochenta.

La respuesta institucional al crimen organizado fue lenta, episódica, poco planeada e inicialmente represiva: durante 1974-1978, las fuerzas militares, ocupadas en el énfasis contrainsurgente, recibieron la tarea de administrar justicia, lo que derivó en un autoritarismo represor que, además de imprimir una mácula en la legitimidad del Estado colombiano, llevó a innumerables casos de irrespeto a los derechos humanos. Para entonces, la justicia criminal ya estaba severamente congestionada, era un círculo vicioso en el que el uso creciente de la violencia homicida encontraba su principal incentivo en la garantía de impunidad, llevando la justicia a su colapso.

Ante la falla estatal en materia de seguridad, quienes podían pagar su protección aumentaron el gasto en vigilancia armada, dando lugar a un descomunal e ineficiente sector de servicios privados de seguridad, incrementando los costos para el aparato productivo con un efecto negativo persistente sobre la productividad y la competitividad.

El primer esfuerzo coordinado de mejora institucional en seguridad lo hizo el Gobierno de Barco. A las primeras negociaciones exitosas de paz que desmontaron ejércitos guerrilleros y redujeron su violencia, se añadieron programas de reducción de la violencia por desarrollo económico y un fortalecimiento del aparato de seguridad y justicia. Así, se concretó una política de "mano tendida y pulso firme", con la depuración y el inicio de la profesionalización de la Policía Nacional y las fuerzas militares como una primera reforma del sector de seguridad -de arriba a abajo- que ini-

ció la larga lucha contra los cárteles del narcotráfico.

La reforma a la justicia en la Constitución Política de 1991 no resolvió los problemas de inseguridad, tampoco mejoró la lucha judicial contra la insurgencia, no redujo la congestión o la impunidad, ni condujo al dismantelamiento judicial de organizaciones criminales. El recurso de la extradición a los Estados Unidos como auxilio ante la incapacidad del sistema de justicia terminó exponiendo a los propios jueces e investigadores judiciales: el aparato de justicia aún no se ha recuperado de los efectos de la violencia de los cárteles del narcotráfico y el M-19 en su contra.


La prohibición de la extradición y la exitosa política de concentrar las acciones de la policía y las fuerzas militares en contra de los carteles condujo a su ruptura y dismantelamiento, con una importante reducción de la violencia durante la primera parte de los años noventa. Sin embargo, al tiempo abrió un nuevo ciclo de reorganización y modernización del crimen, ahora ligado al paramilitarismo y con especialización transnacional. Se expandieron geográficamente y hacia el comienzo de la cadena de los narcóticos: del Caribe y desde el tráfico de frontera hasta el cultivo, escalando la confrontación con las guerrillas por esas rentas, lo que llevaría la violencia homicida a su máximo en 2002.

Aunque durante el Gobierno Pastrana se redobló el aumento de capacidades militares y se recibió por primera vez cooperación internacional en materia antinarcóticos, los frutos de tal aumento de capacidades solamente llegarían como resultado de la política de Seguridad Democrática, que desplegó un esfuerzo de Estado recurriendo al esfuerzo tributario para financiar un significativo aumento de capacidades en seguridad. Hubo por primera vez dos objetivos estratégicos complementarios: la derrota de las organizaciones contrainsurgentes y el dismantelamiento de organizaciones narcotraficantes, usando múltiples instrumentos. El resultado fue significativo en términos de reducción de la violencia y mejora de la seguridad.

La carencia de una política criminal después del Acuerdo de Paz llevó a otra reorganización del crimen, a que su violencia se transformara y a potenciar la producción de narcóticos.

En una segunda fase, la política de Seguridad Democrática se concentró en lograr la derrota estratégica de la entonces formidable FARC, lo que permitió el Acuerdo Final de Paz. Tras una breve reducción de la violencia, los residuos armados y desertores del Acuerdo se reorganizaron en grupos criminales, esta vez sin restricción alguna en el uso de la violencia, y extendieron la búsqueda de rentas criminales de la producción y tráfico de narcóticos a un gran portafolio de actividades criminales, con la extorsión y la minería ilegal de oro generando buena parte de la riqueza que obtienen.

La contribución a la seguridad en el Acuerdo de Paz se esperaba que viniera de la reincorporación de los firmantes con garantías de seguridad, del dismantelamiento de organizaciones criminales responsables de la violencia política por parte de la Fiscalía y de alternativas de desarrollo basadas en la reforma rural integral con sustitución de cultivos ilícitos. La lenta implementación de esos programas y severos errores de política, junto con los escasísimos resultados de la Fiscalía en dismantelamiento, crearon un contexto de inseguridad que ha hecho imposible construir "paz territorial" con base en el Acuerdo.

Después de 50 años, recuperar la seguridad perdida requiere fortalecer las capacidades -normativas, institucionales y materiales- para dismantelar grupos involucrados en múltiples actividades criminales, evitar un nuevo ciclo de reorganización criminal con políticas públicas que ofrezcan alternativas productivas y prevenir la violencia con base en evidencia. 





INFRAESTRUCTURA EN COLOMBIA

Los avances en infraestructura en el país en los últimos 50 años, especialmente gracias a las Asociaciones Público-Privadas, han mejorado la calidad de vida de muchos colombianos. Las próximas cinco décadas deben ser una oportunidad para cerrar las brechas.



Milena López Rocha

Presidente de Corficolombiana

La infraestructura es uno de los cimientos sobre los que se construye el desarrollo y el progreso de un país. En Colombia, su evolución en las últimas cinco décadas ha estado marcada por hitos trascendentales que han transformado la vida de millones de personas, llevando progreso y mejorando su calidad de vida. Uno de los más relevantes ha sido el desarrollo de la red vial.

Durante los años setenta y ochenta, la construcción de vías fue un factor clave para la conexión de regiones aisladas, facilitando el transporte de bienes y personas en un país con una geografía compleja. En 1993, el Gobierno creó el sistema de concesiones viales, permitiendo la participación del sector privado en la construcción, el mantenimiento y operación de carreteras. Esta prime-

ra generación de concesiones (1G) fue esencial para mejorar las principales vías del país y sentó las bases para el desarrollo de la infraestructura moderna que hoy disfrutamos.

En 2015, se lanzó el programa de concesiones de cuarta generación (4G) con el objetivo de construir 8.000 kilómetros de carreteras en 30 proyectos, de los cuales más de 4.500 kilómetros ya están operativos¹. Este programa ha tenido un impacto significativo en la competitividad del país, mejorando los tiempos de transporte, reduciendo costos logísticos y fortaleciendo el comercio interno y externo. Por ejemplo, la región del Eje Cafetero ha visto una mejora considerable en la movilidad de mercancías gracias a la construcción de la vía Pacífico 3, que conecta los departamentos de Caldas, Risaralda y Antioquia, impulsando la economía local y facilitando el acceso a mercados nacionales e internacionales.

En Corficolombiana nos enorgullece ser parte de este esfuerzo que ha contribuido a la generación de cerca de 200.000² empleos

y ha representado entre el 1,5% y el 2%³ del PIB durante los años de mayor ejecución. Estos proyectos no solo conectan regiones, también conectan personas. Acercan oportunidades y mejoran la calidad de vida de los colombianos, brindando esperanza y desarrollo en muchas comunidades.

En el sector aeroportuario, la evolución ha sido igualmente notable. En los últimos 20 años, se han invertido más de 5 billones de pesos para asegurar la conectividad aérea del país. Entre 1971 y 1972 se inauguraron terminales como el José María Córdova en Rionegro y el Alfonso Bonilla Aragón en Cali. En los años noventa, se comenzó a implementar un modelo de concesiones privadas para modernizar la infraestructura aeroportuaria. Entre 2016 y 2019, se modernizaron y ampliaron aeropuertos como el Matecaña de Pereira, el Alfonso Bonilla Aragón de Cali y El Dorado de Bogotá.

Estas mejoras han incrementado significativamente la conectividad de estas ciudades, impulsando el turismo y facilitando el movimiento de pasajeros y carga. El tráfico aéreo ha mostrado un crecimiento sostenido, fortaleciendo las economías locales y mejorando la competitividad de las regiones involucradas. El Dorado se ha consolidado como un "hub" internacional y el principal aeropuerto de carga de América Latina, con una capacidad superior a las 700.000 toneladas anuales⁴. Estos esfuerzos permiten a los colombianos estar más conectados con el mundo, fomentando el intercambio cultural y económico. El turismo ha aumentado significativamente, con un crecimiento del 12% anual en el número de visitantes internacionales, lo cual ha generado oportunidades económicas en sectores como la hotelería y la gastronomía.

Además, el comercio exterior se ha visto fortalecido, incrementando la exportación de productos colombianos a nuevos mercados.

El modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP) ha permitido la concesión de 56 proyectos viales durante los últimos 25 años, facilitando la construcción de más de 10.000 kilómetros de carreteras, 1.100 puentes, 50 túneles, 16 aeropuertos, 61 concesiones portuarias y 2 férreas⁵. Estos avances han contribuido a superar el rezago histórico en infraestructura, gracias a la participación del sector privado. De acuerdo con la CEPAL, la inversión en infraestructura en Colombia ha promediado un 3% del PIB en las últimas décadas, por encima del promedio regional del 2,5%. Esto demuestra el compromiso firme, tanto del Gobierno como del sector privado, con construir un país más competitivo y equitativo.

En el sector energético, Colombia ha avanzado hacia una matriz más diversificada, con inversiones en energías renovables y la incursión en nuevas tecnologías. Entre los grandes proyectos hidroeléctricos se destacan la represa de El Quimbo y las ampliaciones en Hidrosogamoso, que han permitido aumentar la capacidad de generación de energía. En energías renovables, fue fundamental la primera subasta de energías renovables no convencionales en 2019, donde se asignaron proyectos que añadirán más de 2.500 MW⁶ de energía limpia, alineándose con los compromisos de carbono neutralidad en 2030. Además, en 2016 entró en operación la única terminal de regasificación, con una capacidad de 400 MPCD, garantizando la seguridad energética en épocas de baja hidrología. Estos avances no solo contribuyen a la sostenibilidad ambiental, sino que

¹ Tomado de: <https://www.ani.gov.co/articulo/colombia-prospera-con-nuevos-desarrollos-carreteros-8062>

² Tomado de: <https://www.ani.gov.co/con-la-generacion-de-167-mil-empleos-e-inversiones-por-4081-billones-de-pesos-avanzan-las-obras-4g-1>

³ Tomado de: https://investigaciones.corfi.com/analisis-sectorial-y-sostenibilidad/perspectiva-sectorial-infraestructura/sector-infraestructura/bitacora-sectorial_1310998

⁴ Tomado de: <https://www.ani.gov.co/en-colombia-operan-cuatro-de-las-terminales-de-carga-aerea-mas-modernas-de-suramerica>

⁵ Tomado de: <https://www.larepublica.co/economia/con-alianzas-publico-privadas-ya-hemos-supera-do-un-gran-rezago-de-casi-un-siglo-3753184>

⁶ Tomado de: https://www.minenergia.gov.co/documents/5744/Memorias_al_Congreso_2019-2020.pdf

también representan un legado para las generaciones futuras, un país más limpio y resiliente.

Retos y áreas donde estamos rezagados

A pesar de estos avances, estamos lejos de terminar la tarea. Todavía existen áreas rezagadas que requieren un esfuerzo conjunto del sector público y privado. La inversión en infraestructura debe ser una política de Estado para garantizar la continuidad y brindar confianza a los inversionistas. Es fundamental continuar con el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI), que implica desarrollar el transporte fluvial, férreo, marítimo, aéreo y vial, además de intervenir en la red secundaria y terciaria y los accesos a las grandes ciudades.

Esta estrategia, con una inversión de 240 billones de pesos en 30 años⁷, no solo cubrirá las necesidades de infraestructura, sino que también ofrecerá opciones más eficientes y conectará al país en su totalidad. Un estudio de la ANDI revela que mejorar la infraestructura logística podría reducir los costos de transporte en un 20%, no solo generando un impacto significativo en la competitividad empresarial, sino también en la vida diaria de los ciudadanos.

En el campo de la infraestructura energética persisten oportunidades y desafíos importantes, particularmente en las redes de transmisión. La falta de infraestructura adecuada para la transmisión y distribución de energía sigue sien-

La inversión en infraestructura en Colombia ha promediado un 3% del PIB en las últimas décadas, por encima del promedio regional del 2,5%.



do un obstáculo crucial, limitando las oportunidades de crecimiento y restringiendo la conexión de nuevos proyectos de energía solar y eólica. Según la UPME, el déficit en la infraestructura de transmisión ha retrasado la entrada en operación de más de 1.000 MW de capacidad de energía renovable. Esto se vuelve más relevante en un contexto de cambio climático, con exposición a sequías prolongadas y bajos niveles de embalses, como las registradas en 2015 y en 2024, que afectaron significativamente la capacidad de generación hidroeléctrica del país, lo que nos hace propensos a racionamientos o apagones. Superar estos retos permitirá asegurar el acceso a la energía en todo el territorio, generando así igualdad de oportunidades y un desarrollo inclusivo.

Para que estos desafíos y necesidades se conviertan en oportunidades, la obtención de licencias ambientales y sociales para la ejecución rápida y eficiente de los proyectos es crítica. Si bien las consultas previas se diseñaron para proteger los derechos de las comunidades, su implementación ha enfrentado desafíos y abusos que han afectado el desarrollo de la infraestructura que requiere el país.

Es necesario establecer mecanismos de trabajo conjunto entre el sector privado, el sector público y las comunidades para garantizar la ejecución de proyectos. Fortalecer las relaciones con las comunidades, asegurando su participación en los beneficios de los proyectos al igual que mejorar los procedimientos de las consultas previas, es clave para el avance de iniciativas esenciales para el desarrollo del país.

La infraestructura es una herramienta de transformación social y económica. En Corficolombiana, hemos sido testigos del impacto positivo que una infraestructura moderna y eficiente puede generar en la productividad, la competitividad y el bienestar de los colombianos. Desde Corficolombiana, seguiremos trabajando por una infraestructura que no solo impulse el crecimiento económico, sino que también mejore la calidad de vida de todos los colombianos, permitiéndonos avanzar hacia un futuro más próspero y sostenible. Los próximos 50 años deben ser una oportunidad para cerrar las brechas y consolidar una infraestructura que esté al servicio del país en su totalidad. Este es nuestro desafío y nuestro compromiso para construir el país que todos nos soñamos. ANIF

EL MERCADO DE CRÉDITO EN COLOMBIA

En los últimos 50 años, Colombia ha avanzado significativamente en inclusión financiera ¿Cuál debería ser la agenda para las próximas décadas y así lograr asumir los retos que aún quedan por delante?



Luz Magdalena Salas

Vicepresidente del centro de estudios económicos ANIF

Hace 50 años, el mercado de crédito en Colombia era muy limitado y su acceso se restringía principalmente a sectores formales en zonas urbanas. La infraestructura financiera era muy incipiente, con baja penetración de productos de crédito y ahorro formal, y eran prestados principalmente por instituciones financieras tradicionales, como las llamadas Corporaciones de Ahorro y Vivienda, las cuales dominaban el mercado.

El acceso al crédito para las pequeñas empresas, los hogares de bajos ingresos y para personas o negocios en zonas rurales, era prácticamente nulo. Según cálculos de ANIF, a finales de 1973, el número de créditos otorgados en las principales ciudades del país ascendía a 6.822 (Ver Tabla 1), y se concentra-

ban en créditos a la construcción e individuales (de consumo), como se observa en la tabla 1. Definitivamente, el microcrédito aún no era una herramienta de financiación consolidada en el país.

A mediados de los años 70, el Banco de la República y la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera) implementaron una serie de reformas regulatorias para fortalecer el sistema bancario, logrando avances muy importantes. Pero fue en la década de los 90 cuando se ampliaron las oportunidades y se dieron las condiciones para que más actores participaran en el mercado financiero del país.

Se consolidaron las microfinancieras, que han sido una fuente importante para financiar actividades productivas en las últimas décadas, y se inició una época de modernización de los bancos. Estos avances permitieron que el país diera un salto hacia una verdadera inclusión financiera. En las últimas dos décadas, los avances en esta materia han sido aún más importantes, gracias también al desarrollo tecnológico. La digitalización ha revolucionado el sector y ha permitido que el sistema financiero formal entre en zonas rurales, atendiendo a millones de colombianos que antes estaban excluidos del sistema financiero formal.

Esto se ve reflejado en el número de créditos desembolsados en el 2024, en comparación con lo que sucedía hace 50 años. En 2024 se han desembolsado 6.472 créditos constructor (de todos los tipos de proyectos de vivienda) y 154.466 créditos hipotecarios, como se observa en la tabla 2. Asimismo, se han desembolsado 5.452.263¹ créditos de consumo y 1.173.205 microcréditos. Esto muestra que, además del incremento de más de 2.671 veces en el número de desembolsos de créditos de vivienda, la variedad del tipo de créditos que se ofrecen en el mercado financiero formal es muy significativa. Y esto es solo el crédito.

Según el Reporte de Inclusión Financiera², el 94,6% de los adultos en Colombia en 2023 tenía acceso a productos financieros, con una fuerte presencia de cuentas de ahorro. No obstante, persisten desafíos, particularmente en la población que accede al crédito. Solo el 35,3% de los adultos tiene acceso a crédito, y esta cifra es aún más baja en áreas rurales, donde solo el 49,4% de la población tiene acceso a productos financieros. A pesar de la expansión del microcrédito y las Fintech, el mercado de servicios financieros, en especial el de seguros, aún es subdesarrollado, dejando a muchos hogares sin protección adecuada frente a los riesgos.

⁷ Tomado de: <https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Plan-Maestro-de-Transporte-Intermodal-invertira-240-billones-para-infraestr-231122.aspx>

¹ Este valor no incluye sobregiros en cuenta corriente ni tarjetas de crédito.

² Banca de las Oportunidades y Super Financiera de Colombia.

Tabla 1.

UTILIZACION DEL CREDITO OTORGADO POR LAS CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PAIS – DATOS ACUMULADOS A DICIEMBRE DE 1973														
Ciudades	CONSTRUCTORES					INDIVIDUALES					TOTAL			
	No.	%	Valor (Millones)	%	Valor Promedio	No.	%	Valor (Millones)	%	Valor Promedio	No.	%	Valor (Millones)	%
Bogotá	902	72.28	1.735.3	76.86	1.923.836	3.126	56.08	688.7	60.47	220.314	4.028	59.04	2.424.0	71.37
Cali	79	6.33	250.3	11.09	3.168.364	562	10.08	128.8	11.31	229.743	641	9.40	379.1	11.16
Medellín	38	3.04	140.0	6.20	3.684.211	794	14.24	136.3	11.97	171.662	8.32	12.20	276.3	8.13
Barranquilla	38	3.04	19.5	0.86	513.196	214	3.84	20.6	1.81	96.262	252	3.69	40.1	1.18
Bucaramanga	64	5.13	68.2	3.02	1.065.625	215	3.86	42.4	3.72	197.209	279	4.09	110.6	3.26
Cartagena	15	1.20	19.1	0.85	1.273.333	32	0.57	2.2	0.19	68.750	47	0.69	21.3	0.63
Manizales	7	0.56	3.5	0.16	500.000	26	0.47	4.4	0.39	169.257	33	0.48	7.9	0.23
Pereira	8	0.64	6.9	0.31	862.500	51	0.91	9.1	0.80	178.431	59	0.86	16.0	0.47
Armenia	6	0.48	3.2	0.14	533.339	59	1.06	6.5	0.57	110.169	65	0.95	9.7	0.29
Santa Marta	1	0.08	0.4	0.01	400.000	18	0.32	1.9	0.17	105.556	19	0.28	2.3	0.07
Otras 1/	90	7.22	11.2	0.50	124.444	477	8.57	98.1	8.60	205.660	567	8.32	109.3	3.21
	1.248	100.00	2.257.6	100.00	1.808.974	5.574	100.00	1.139.0	100.00	204.332	6.822	100.00	3.396.6	100.00

1/ Incluye las siguientes ciudades: Cúcuta, Ibagué, Montería, Neiva, Pasto, Popayán, Quibdó, San Andrés, Sincelejo, Tunja, Valledupar, Cartago, Girardot, Ipiales, Ocaña, Palmira, Pamplona, San Gil, Sogamoso, Villavicencio, Ciénaga, entre otras.

FUENTE: Junta de Ahorro y Vivienda y Cálculos ANIF.

Esta tendencia se repite en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), que representan más del 99% del tejido empresarial del país, y que experimentan un acceso limitado al financiamiento formal. Según cifras de la más reciente Encuesta MiPyme ANIF, menos del 25% de las micro y pequeñas empresas accedió a crédito formal en 2023, mientras que las empresas medianas disfrutaron de un acceso de un poco más del 30%. Estas cifras son muy bajas, sobre todo si se comparan con empresas grandes que acceden a crédito en el 82% de los casos. Las empresas ahorran, y en el caso de las MiPymes, el 47% de ellas lo hace, pero el acceso a seguros es casi nulo.

A pesar de los avances, aún persisten importantes disparidades entre hombres y mujeres porque, aunque las mujeres tienen mejores hábitos de pago, enfrentan mayores dificultades para obtener crédito y los montos aprobados tienden a ser más bajos. Los jóvenes y las personas en áreas rurales también están rezagados en términos de acceso a financiamiento. Los jóvenes muestran una mayor adopción de productos de bajo monto, posiblemente debido a su preferencia por soluciones digitales.

Hacia futuro

Para lograr que la inclusión financiera sea un motor de desarrollo económico en Colombia en los próximos 50 años, es esencial enfocarse en varios aspectos clave.

En primer lugar, el acceso al crédito, particularmente al microcrédito, porque tiene el potencial de transformar el panorama económico de las MiPymes y los hogares de bajos ingresos, fomentando el emprendimiento y la productividad. Pero para que eso se logre, los productos financieros deben adaptarse a las características y necesidades de los prestatarios. El crédito tiene un efecto multiplicador en el desarrollo económico,

Hace 50 años, el acceso al crédito para las pequeñas empresas, los hogares de bajos ingresos y para personas o negocios en zonas rurales, era prácticamente nulo.

porque permite que las empresas inviertan en tecnología y mejoren su productividad, lo que genera empleo y crecimiento económico.

En segundo lugar, el ahorro de largo plazo para enfrentar choques y mejorar la salud financiera. El ahorro es esencial para que los hogares y empresas puedan responder de una mejor manera a choques económicos. Sin embargo, el uso de productos de ahorro formales sigue siendo bajo, particularmente en áreas rurales y entre las microempresas.

El tercer aspecto clave es el acceso a herramientas de inversión y aseguramiento para mejorar el manejo de riesgos y fomentar la seguridad financiera. Es importante desarrollar productos que sean asequibles y relevantes, como microseguros, que cubran riesgos específicos para los sectores más vulnerables, como agricultores y pequeños comerciantes. Pero también se debe fomentar la educación financiera, orientada al manejo de riesgos, para aumentar la salud financiera y la demanda de este tipo de productos.

En cuarto lugar, la inclusión para grupos desprotegidos como, mujeres, jóvenes y áreas rurales. Pero, además, con los cambios en la dinámica poblacional, la economía pla-

teada se convierte en un componente más relevante por la mayor participación de personas mayores de 50 años, a nivel de hogares como de MiPymes. Esta requerirá productos financieros específicos y oportunidades de emprendimiento y generación de ingresos más significativas. El desarrollo regional desigual también implica que se deben redoblar los esfuerzos para llevar servicios financieros a las áreas rurales, donde la penetración sigue siendo baja. Cerrar estas brechas de acceso se convierte en una prioridad, porque para que la inclusión financiera sea realmente transformadora, debe ser equitativa.

Adicionalmente, un aspecto fundamental es el papel de la tecnología, pues es un catalizador para la inclusión financiera. El desarrollo de las Fintech y la expansión de servicios financieros digitales han ayudado a reducir las barreras de acceso y los costos en la prestación de estos servicios en áreas remotas y poblaciones vulnerables. Las soluciones digitales permiten escalar productos a una mayor velocidad y ofrecer servicios personalizados.

Como sexto punto, se necesita una regulación que responda a la realidad del mercado financiero actual, en el que hay más competidores y más productos innovadores. Esta debe garantizar la protección del consumidor, pero al mismo tiempo debe promover la innovación y facilitar el acceso a productos financieros. En este aspecto, toman relevancia el "open data" y los pagos inmediatos, que permiten un intercambio de datos más eficiente entre instituciones para mejorar los productos financieros existentes.

Por último, la educación financiera debe ocupar un lugar prioritario en la agenda de inclusión, fomentando la responsabilidad en el uso de productos financieros y orientada al manejo de riesgos. De esta manera, la inclusión financiera puede consolidarse como un pilar clave para el desarrollo económico sostenible en los próximos 50 años. Pero esto requiere esfuerzos concertados entre distintos actores: Gobierno,

Tabla 2. Comparación con créditos de entidades financieras*

Crédito constructor - todos los tipos de proyectos de vivienda **					
	No. Créditos	%	Valor total (millones de pesos)	%	Valor promedio
Bogotá	2.503	39	\$ 4.116.200	25	\$ 1.645
Cali	506	8	\$ 834.529	5	\$ 1.649
Medellín	753	12	\$ 1.055.399	6	\$ 1.402
Barranquilla	271	4	\$ 427.126	3	\$ 1.576
Bucaramanga	139	2	\$ 225.532	1	\$ 1.623
Cartagena	181	3	\$ 240.948	1	\$ 1.331
Manizales	63	1	\$ 74.508	0	\$ 1.183
Pereira	105	2	\$ 130.166	1	\$ 1.240
Armenia	68	1	\$ 63.171	0	\$ 929
Santa Marta	64	1	\$ 77.734	0	\$ 1.215
Otros (resto del país)	1.819	28	\$ 9.455.065	57	\$ 845
Total	6.472	100	16.700.376	100	14.636

Individual - Crédito vivienda de todo tipo ***					
	No. Créditos	%	Valor total (millones de pesos)	%	Valor promedio
Bogotá	41.238	27	\$ 5.938.987	20	\$ 144
Cali	8.185	5	\$ 1.079.511	4	\$ 132
Medellín	7.460	5	\$ 1.294.312	4	\$ 174
Barranquilla	7.203	5	\$ 841.514	3	\$ 117
Bucaramanga	2.263	1	\$ 262.700	1	\$ 116
Cartagena	3.824	2	\$ 444.673	2	\$ 116
Manizales	1.315	1	\$ 165.564	1	\$ 126
Pereira	2.077	1	\$ 294.548	1	\$ 142
Armenia	1.575	1	\$ 177.319	1	\$ 113
Santa Marta	1.417	1	\$ 170.252	1	\$ 120
Otros (resto del país)	77.909	50	\$ 18.414.374	63	\$ 236
Total	154.466	100	29.083.753	100	1.535

Total				
	No. Créditos	%	Valor total (millones de pesos)	%
Bogotá	43.741	19	\$ 10.055.187	22
Cali	8.691	4	\$ 1.914.039	4
Medellín	8.213	4	\$ 2.349.711	5
Barranquilla	7.474	3	\$ 1.268.640	3
Bucaramanga	2.402	1	\$ 488.232	1
Cartagena	4.005	2	\$ 685.620	1
Manizales	1.378	1	\$ 240.071	1
Pereira	2.182	1	\$ 424.713	1
Armenia	1.643	1	\$ 240.490	1
Santa Marta	1.481	1	\$ 247.986	1
Otros (resto del país)	79.728	35	\$ 27.869.439	61
Total	229.029	100	45.784.129	100

* La información disponible cubre todas las entidades financieras que otorgan este tipo de créditos.

** Incluye toda la combinación posible entre adquisición de vivienda VIS, no VIS, en UVR, en pesos. De la misma forma, se incluye la combinación para el leasing habitacional. Además, incluye libranza.

*** Para construcción de vivienda, se incluye construcción de proyectos de vivienda VIS y no VIS en pesos y UVR. Datos acumulados a septiembre de 2024.

Otros son: Cúcuta, Ibagué, montería neiva, pasto, popayán, quibdó, san andrés, sincelejo, tunja, valledupar, cartago, girardot, ipiales, ocaña, palmira, pamplona, san gil, villavicencio, ciénaga (dice entre otras ni idea cuáles serán)

instituciones financieras y el sector privado, para diseñar productos financieros más flexibles que respondan a las necesidades de las personas y las empresas, con un marco regulatorio que promueva

la innovación y la protección a los consumidores. Solo así podremos construir un sistema financiero más inclusivo, capaz de impulsar la salud financiera y el bienestar económico y social del país.

"ESTAS FUERON DÉCADAS DE PROGRESO Y DESARROLLO, CON RETOS AÚN POR DELANTE"

Fabio Villegas, presidente de ANIF entre 2002 y 2005, habla de los avances del país en los últimos cincuenta años, de los retos para el desarrollo a mediano plazo del país y de su paso por esta entidad.



¿En qué aspectos el país ha avanzado de manera más clara en los últimos 50 años?

Fabio Villegas: Cincuenta años es un periodo largo y el país ha tenido altos y bajos, asociados tanto a temas internos como externos, pero las últimas cinco décadas fueron muy positivas en general para Colombia. Económicamente, fueron años de crecimiento en los que se dio una gran disminución de la pobreza. Hoy, en general, podemos decir que tenemos una muchísimo mejor calidad de vida de la que teníamos al inicio de ese periodo.

Quisiera resaltar algunos elementos determinantes de esta tendencia. En primer lugar, se dio una mayor apertura a la inversión y a la participación del sector privado en

diferentes áreas de la economía y de la sociedad. Me refiero fundamentalmente a la inversión en infraestructura y servicios, que, entre otros, llevó a una mejora sustancial en la cobertura y la calidad de servicios de salud y educación.

No pretendo decir que todo era perfecto, o que no había posibilidades de mejora, pero el avance en esos temas es una realidad indiscutible. Parte de la receta tuvo que ver con el inicio de una apertura económica, que mejoró la competitividad y benefició fundamentalmente a los consumidores y al desarrollo de la actividad y competitividad en la industria y en las empresas.

Tuvimos un apoyo a la economía de mercado, obviamente con una intervención importante del Estado en la parte regulatoria y en la

inversión social. Vale la pena señalar que hubo una estabilidad macroeconómica, en la cual la independencia del Banco Central jugó un papel fundamental.

Definitivamente hubo tareas que no se lograron. En ese periodo, por ejemplo, no se logró hacer el ajuste fiscal que el país y la economía han reclamado. Estuvimos enfrentando una inestabilidad tributaria con reformas cada dos años.

Pero resalto algunos elementos adicionales a la dimensión económica. El país le dio relevancia a los derechos humanos a partir de la Constitución del 91 y el ejercicio de la tutela. En ese mismo sentido, se empezó a trabajar en la integración y reconocimiento de los derechos de las negritudes y las minorías indígenas. Por otro lado, hubo

procesos de paz exitosos e importantes, como el del M-19 y posteriormente el de las FARC.

En conclusión, fueron décadas de progreso y desarrollo, señalando por supuesto que hay grandes retos hacia adelante.

En ese sentido ¿cuál es el mayor reto en que deberíamos avanzar como país de manera urgente pensando en el desarrollo a mediano plazo?

FV: Hay varios elementos que se deben mencionar. Primero, el crecimiento es una condición necesaria, pero no es suficiente para resolver los problemas y las demandas de la sociedad. Siempre, de alguna manera, le dimos importancia al crecimiento económico y creo que debe seguir manteniéndose. Sin crecimiento no hay solución, ni hay bienestar. Pero es claro que los beneficios del crecimiento de estas décadas tuvieron un impacto diferente en los distintos sectores de la sociedad. Los pobres son menos pobres que antes, pero los ricos son mucho más ricos.

Además, los indicadores de pobreza no muestran la complejidad de este tipo de circunstancia, porque en la medida en que la gente salió de la pobreza y las clases medias crecieron, en que hubo procesos de educación y de bienestar, las demandas y las expectativas de las personas también aumentaron. Esos requerimientos y aspiraciones aún están por resolver, y eso es parte del problema que estamos enfrentando en este momento.

La "distribución del ingreso", que antes era un tema cuestionado dentro de nuestra perspectiva de análisis económico, hoy debe tener un espacio en esas discusiones.

¿Así como vio avances en lo político, cuáles son los retos en ese aspecto?

FV: Claro. En lo político está cómo enfrentar el populismo en sus diferentes orígenes, tanto de derecha como de izquierda, y cómo evitar la polarización creciente entre la sociedad en donde la discusión hoy es casi que amenazante.

Para ponerlo en términos que se han venido utilizando recientemente, la contraparte política no se ve como un hecho natural de la democracia, sino prácticamente como una situación de enemigos. Eso nos dicta dos grandes objetivos que son vitales de toda sociedad: fortalecer las instituciones políticas, la separación de poderes, y defender la democracia.

Existen otras prioridades que antes aparecían de alguna manera en la agenda, pero que no tenían la importancia de hoy: el respeto por la diversidad, los temas derivados de la migración y la sostenibilidad, que es un punto fundamental y estratégico de los Estados y del Gobierno, pero también del sector privado y las empresas. Desconocer la crisis ambiental hoy en día es realmente irresponsable.


Y termino con algo que es fundamental en Colombia, y es el

narcotráfico y la seguridad en todos sus aspectos, en la justicia, en la presencia del Estado en los territorios, en la amenaza que tenemos por parte de diferentes grupos armados. Eso debe ser una prioridad y es, tal vez, uno de los retos más importantes que tenemos en este momento para los años futuros.

Por último ¿cuál fue su mayor satisfacción durante su paso por la presidencia en ANIF?

FV: He tenido la oportunidad y la suerte de ocupar diferentes posiciones en el sector público y en el sector privado, y debo decir que todas ellas me las he gozado. Pero, en el fondo, yo soy economista, me gusta la economía, estudiarla, analizarla, entenderla y opinar del tema, y mi paso por ANIF me permitió desarrollar ese papel.

Finalmente, eso es lo que hace ANIF, analizar y entender las políticas formuladas, ayudar a divulgarlas, ser crítico o defenderlas en muchos de los casos. Y esa fue la oportunidad que yo encontré y la recuerdo con una gran satisfacción. A eso le sumo la posibilidad de trabajar con un equipo de economistas y profesionales de los cuales aprendí muchísimo, dentro de los cuales está José Ignacio López, el actual presidente de la entidad.

El país le debe mucho a los centros de pensamiento económico, en particular a ANIF y a Fedesarrollo. Necesitamos ese tipo de entidades independientes de cualquier objetivo político, e inclusive sin compromisos empresariales de ninguna naturaleza. Esa libertad de pensamiento estuvo siempre presente durante mi tiempo en la entidad. Ojalá que por muchos años más, otros 50 por lo menos, ANIF continúe participando en el debate político del país. 

El crecimiento es una condición necesaria, pero no es suficiente para resolver los problemas y las demandas de la sociedad.



RETOS DE UN PAÍS QUE AVANZA, PERO SIGUE EN CONSTRUCCIÓN

¿Cómo se verá Colombia en 2074? Los retos que afronta para las próximas décadas no son pocos. Estos son algunos puntos en los que el país debe poner esfuerzos importantes.

A raíz de la celebración de los 50 años de ANIF, resulta inevitable preguntarse qué retos enfrentará el país en las próximas décadas. ¿Cómo se verá Colombia en 2074? Ni los más arriesgados futurólogos se atreven a hacer predicciones para un horizonte de tiempo tan largo. En los últimos 50 años, Colombia ha cambiado

tanto que en muchas dimensiones parece otro país. Los avances son indudables. Colombia ha casi triplicado su nivel de ingreso, universalizado la cobertura en salud, prácticamente erradicado el analfabetismo y ampliando de manera significativa su cobertura educativa. A pesar de todos estos avances, hay temas que el país no ha podido superar en es-

tas cinco décadas. Colombia sigue siendo un país desigual, con amplias brechas regionales y un nivel relativamente bajo de integración a la economía global.

Hablar de los retos de los próximos 50 años bien podría servir para que los lectores de esta publicación en 2074, si los hay, se burlen de nuestras desatinadas proyecciones. Por

RETOS DE UN PAÍS QUE AVANZA, PERO SIGUE EN CONSTRUCCIÓN

eso, y con la humildad que enseña la historia, este artículo se concentra en los principales retos de la economía colombiana para los próximos años. Muchos de ellos ya son previsible porque están presentes; sin embargo, habrá otros inesperados.

Cambio demográfico

El primero de ellos tiene que ver con el cambio demográfico. Colombia, como casi todos los países del mundo, está experimentando una lenta, pero dramática transformación de su población derivada de un aumento en la expectativa de vida de las personas y una vertiginosa caída en la tasa de natalidad. Después de la pandemia, ha sido más evidente la caída en los nacimientos en el país, sorprendiendo incluso a las proyecciones más pesimistas. Entre enero y julio de 2024 nacieron 255 mil niños en Colombia, una cifra 15,2% menor que la del año anterior, la cual había sido a su vez 9,6% inferior a la de 2022.

De acuerdo con el más reciente informe sobre tendencias demográficas de la OCDE, la tasa de fertilidad en dichos países se redujo a menos de la mitad entre 1960 y 2022, pasando de 3,3 niños por mujer, a solo 1,5. Estos cambios demográficos cambiarán el rostro de las sociedades, comunidades y familias, y podrían tener un gran impacto en el crecimiento económico y la prosperidad.

Los datos de las Cuentas Nacionales de Transferencia para 2021 del DANE muestran que los colombianos alcanzan su mayor nivel de ingreso a lo largo de su vida laboral, y de ahorro, entre los 35 y 40 años. El momento de mayores ingresos y ahorro se alcanza a los 37 años, cuando los ingresos laborales alcanzan en promedio 24,8 millones de pesos al año, mientras el ahorro se ubica en 5,1 millones (gráfico 1). Actualmente la fracción de colombianos que se encuentra en esta franja de edad, frente al total de la población del país, es de 8,7%. La buena noticia es que esta proporción seguirá creciendo durante la próxima década, hasta el año 2034, cuando alcanzará el 9,5%. La mala, es que después de ahí empezará a descender en la medida que la población colombiana

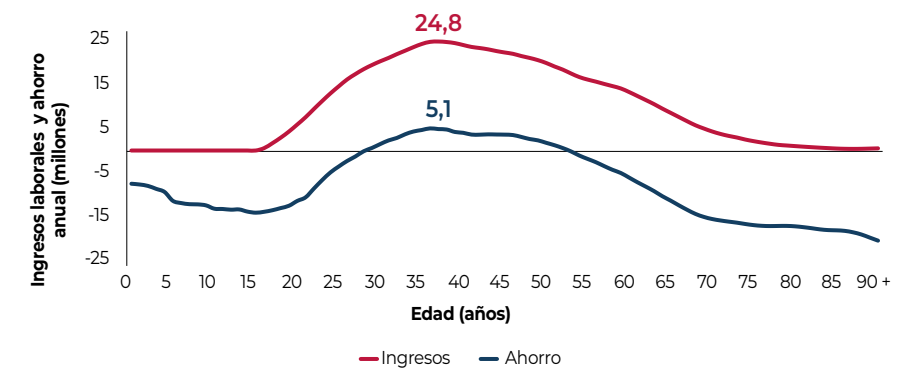
se envejezca. De hecho, el 14% de la población del país corresponde actualmente a personas de más de 60 años. Esta fracción continuará en aumento durante los próximos años, sino décadas, y en 2034 bordeará el 18% (gráfico 2).

La caída en la natalidad y el envejecimiento de la población no serán un reto menor. Uno de los puntos más críticos será la sostenibilidad del sistema pensional. ANIF advirtió, en la última reforma sobre dicho tema, que, más allá de los avances en varios frentes, ampliar el sistema público de reparto, mediante el pilar contributivo de prima media, era una mala idea. Según nuestros cálculos, el pasivo pensional del país aumentó en cerca de 60 puntos del PIB como resultado de la reforma. Dado el acelerado cambio

demográfico, Colombia tendrá que enmendar, ojalá más temprano que tarde, el sistema pensional.

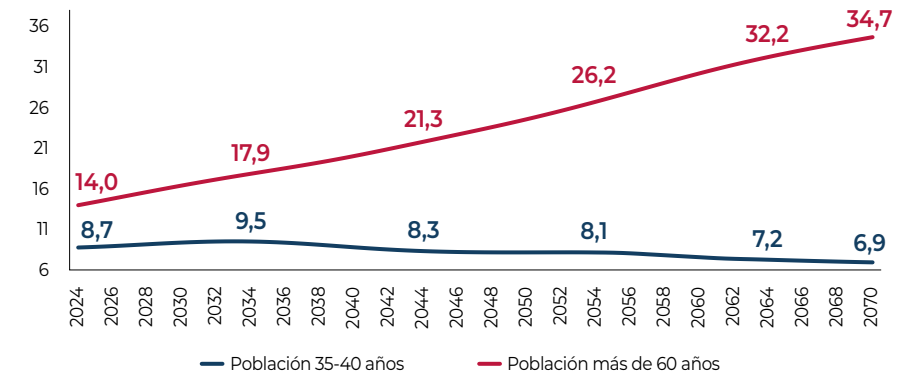
Pero este no será el único aspecto relevante. Es fundamental pensar en el diseño del sistema de salud y del mercado laboral para que puedan acomodar las crecientes demandas asistenciales de una población cada vez más longeva. Asimismo, es crucial crear estructuras flexibles en las que las personas mayores puedan participar de tareas o responsabilidades, en la medida que vivan más años y disfruten de mejor calidad de vida. La economía plateada, la innovación en productos financieros, la automatización de servicios, el ordenamiento urbano, son temas que el país tendrá que repensar como consecuencia del cambio demográfico.

Gráfico 1. Ingresos laborales y ahorro durante el ciclo de vida (millones de pesos, 2021)



Fuente: elaboración ANIF con base en las Cuentas Nacionales de Transferencia (CNTR) del DANE.

Gráfico 2. Población entre 35 - 40 años y mayores de 60 en Colombia (% del total)



Fuente: cálculos ANIF con base en DANE.

Transición energética

Simultáneamente, el país tendrá que enfrentar el desafío de la transición energética y el cambio climático. Dada la abundancia de recursos naturales en Colombia, la transición energética puede entenderse más como una oportunidad que como un desafío. Sin embargo, esta transición debe realizarse correctamente, pues de lo contrario podría convertirse en una oportunidad desaprovechada.

El Foro Económico Mundial viene publicando un índice de preparación a la transición energética, que busca evaluar la tecnología y las políticas de diferentes países para adaptar economías limpias.

Este índice muestra una alta correlación entre la preparación para la transición energética y el nivel de ingresos promedio de los países (gráfico 3). Los países más ricos están mejor preparados para avanzar en la transición energética. Esto no sorprende, dado que el salto hacia tecnologías más limpias necesita de recursos importantes. Está claro que decrecer no es una opción. Si Colombia quiere acelerar el proceso de transición energética debe apalancarse incluso en los recursos del sector de hidrocarburos, tal como lo han hecho países como Noruega. Este país no solo lidera la carrera en electrificación, sino que también está en la vanguardia de tecnolo-

gías de captura de carbón, gracias, en parte, a los recursos derivados de su producción de petróleo y gas.

Sorprende que mientras Noruega siga explorando hidrocarburos para apalancar inversiones en tecnologías limpias, en Colombia pensemos que podemos avanzar en la transición energética apagando uno de los sectores que más ingresos fiscales y divisas genera.

También resulta llamativo que los países más preparados para avanzar en la transición energética tengan precios de combustibles más caros en sus economías domésticas. El gráfico 4 muestra el precio del diésel en dólares para una muestra grande de países con rela-

ción al índice de preparación para la transición energética del Foro Económico Mundial. Como se observa en la gráfica, existe una relación positiva entre las dos variables.

Dado que los combustibles son bienes transables, la teoría económica sugiere que el precio en cualquier país debería ser igual, en línea con la ley de un solo precio. Es bien sabido que muchos bienes no cumplen con esa condición y que impuestos, subsidios, costos de transporte y logísticos, así como decisiones estratégicas, como el *pricing-to-market*, explican muchas de las violaciones a la ley de un solo precio.

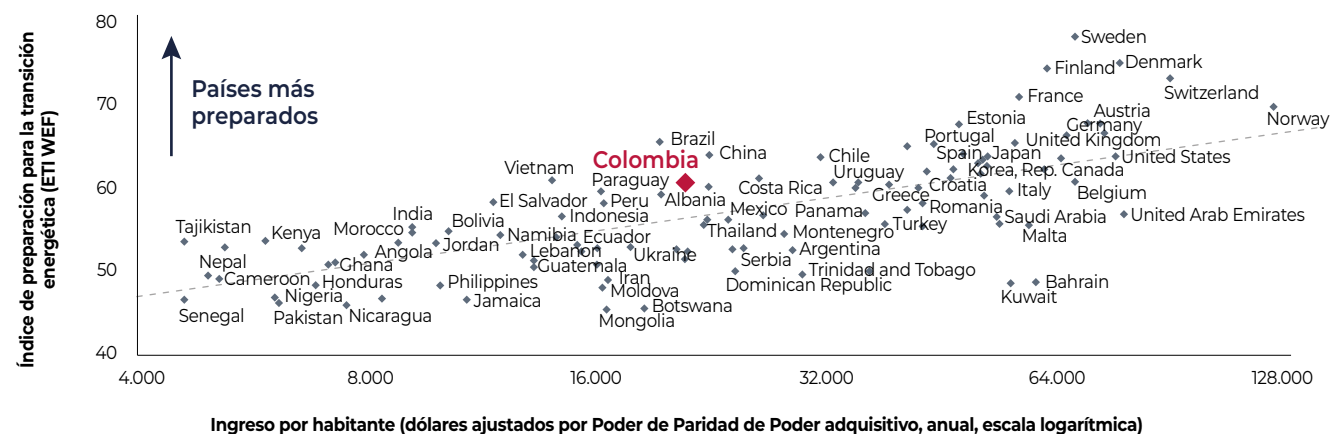
En el caso del diésel, la correlación positiva con el índice de preparación para la transición energética sugiere que los países más listos para la transición usan instrumentos como impuestos para afectar los precios relativos e inducir a los consumidores en sus economías a privilegiar tecnologías más limpias.

Colombia en esta materia se encuentra rezagada. Sorprenden las posiciones de algunos analistas económicos locales que sugieren que el precio de diésel en nuestro país debería ser inferior al del mercado internacional porque tenemos autosuficiencia en esta materia. Esta postura no solo va en contravía de una buena política de fijación de precios, sino que desconoce la importancia que tiene para la transición energética inducir al cambio tecnológico a través de precios relativos.

Desde ANIF hemos celebrado la decisión impopular, pero acertada, del Gobierno de aumentar los precios tanto de la gasolina como el diésel. Criticamos ciertamente la postura ideológica de la actual administración que ha cerrado la puerta a nuevas rondas de exploración de hidrocarburos. De hecho, nos preocupa que, al perder los ingresos de esta industria de forma más acelerada de lo necesario, no solo estemos imposibilitando apalancar las inversiones de la transición, sino que el efecto ingreso adverso termine neutralizando el impacto de mayores precios relativos, los cuales son esenciales para incentivar adopción de nuevas tecnologías.

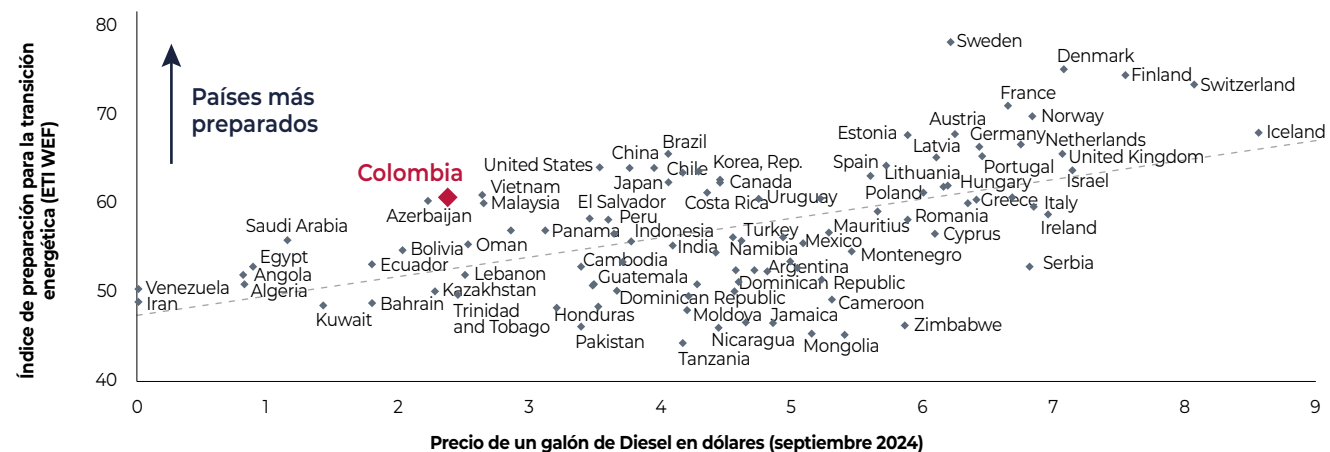


Gráfico 3. Ingreso por habitante e índice de preparación para la transición energética



Fuente: cálculos ANIF con base en Banco Mundial y World Economic Forum (WEF). ETI= Energy Transition Index.

Gráfico 4. Precio del Diesel e índice de preparación para la transición energética



Fuente: cálculos ANIF con base en Banco Mundial, Global Petrol Prices y World Economic Forum.

Si bien estamos de acuerdo con aumentar los precios de los combustibles, para reducir y eliminar el abultado déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), consideramos que el país debe enfocarse en este momento en una política de reactivación económica, además de reabrir las puertas a la exploración petrolera. El Gobierno ha propuesto en la Ley de Financiamiento un impuesto al carbono, que aumentaría los precios de la gasolina y el ACPM. Dicho impuesto será una herramienta útil en el mediano plazo para avanzar en la transición energética mediante cambios en precios relativos. Sin embargo, nos preocupa que, en el actual contexto de bajo crecimiento e inversión, este impuesto pueda tener el efecto contrario, generando, por ejemplo, un impacto negativo en el sector de transporte, ralentizando la adopción de tecnologías limpias.

El reto de la transición energética requiere una política pública que considere varios elementos dinámicos que pueden incentivar o retrasar las inversiones en proyectos verdes. Además, el país debe reflexionar sobre aspectos críticos, como las licencias ambientales y la relación con las comunidades, que actualmente están retrasando o incluso frustrando varios proyectos de transmisión eléctrica y energía renovable.

El país necesita con urgencia un marco más ágil que le permita avanzar de manera más decidida en las inversiones requeridas para la transición energética. Finalmente, también es muy importante que el país tome conciencia de la importancia de tener una política de mitigación más robusta frente al cambio climático.

Con un marco adecuado, Colombia podría avanzar a toda velocidad en materia de transición y hacer de su matriz de consumo y producción una ventaja comparativa frente al resto de economías. No obstante, si el mundo en su conjunto se mueve más lentamente -y todo apunta a este escenario-, los estragos del cambio climático serán cada vez más palpables.

Estos dos retos que hemos mencionado, demografía y cambio climático, solo son ejemplos de los muchos que el país tendrá que enfrentar en los próximos años. ANIF continuará en su tarea propositiva y constructiva, buscando acompañar a los hacedores de política, el sector privado y los ciudadanos de a pie, en sus decisiones, con diagnósticos y soluciones basados en evidencia. Esperamos que el debate de políticas públicas en el país siempre se mantenga en el terreno técnico. El país necesitará buen juicio y tino para enfrentar no solo estos dos retos, sino muchos otros que aparecerán en el camino. ANIF

"ATTENTION IS ALL YOU NEED"

A Colombia la dejó la revolución industrial hace mucho más de 50 años, cuando bajo la influencia de las ideas del liberalismo radical le apostamos a convertirnos en una potencia agraria en vez de fomentar la incipiente industria manufacturera. Hoy estamos frente a otra revolución.

Al escribir esta columna, "Attention is all you need" alcanza 136.799 citaciones y va camino a convertirse en uno de los artículos con más citaciones y que más rápidamente las ha acumulado en la historia de la ciencia. En este artículo, Ashish Vaswani y siete coautores, casi todos asociados a Google Brain en el momento de publicarlo en 2017, introdujeron la arquitectura de los *transformers*, el modelo de aprendizaje de máquinas especializado en procesamiento natural del lenguaje que subyace a ChatGPT, a Claude, a Llama, a BloombergGPT y a las muchas otras inteligencias artificiales generativas que están causando furor en todo el mundo.

Como los modelos de redes neuronales que los anteceden, los *transformers* predicen las secuencias de palabras que pueden suceder a un texto dado, y este principio forma el corazón de su éxito en tareas de síntesis, de traducción y de escritura de textos de diversos tipos. La magia de los *transformers* es la "capa de atención": una capa de neuronas que le da más o menos peso a diferentes partes del texto que está procesando y que los hace radicalmente mejores que sus ancestros en las tareas de predecir textos subsiguientes. Muchos a duras penas iniciados observamos a Claude o a Copilot sacudir nuestras rutinas de trabajo mes a mes. Como ante un *show* de variedades del siglo XIX, recibimos noticias entre incrédulos y medio hastiados por la intensidad, sobre las mucho más grandes proezas de estos bichos con nombres raros en lugares lejanos.

Andy Jazzy, un desarrollador senior de Amazon, dijo en Twitter que Amazon Q, la IA generativa que los apoya en labores de desarrollo de software, ya les ahorró el equivalente a 4.500 años de tiempo de trabajo de un programador. A principios de octu-



Tomás Rodríguez

**PROFESOR ASOCIADO
DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES**

bre, Nicola Jones describió en un artículo en el blog de noticias de la revista Nature, como o1, el nuevo modelo de OpenAI, superó a académicos con PhD en pruebas estandarizadas en sus áreas de experticia en ciencias naturales y tuvo un buen desempeño en la prueba clasificatoria a las olimpiadas internacionales de matemáticas.

Intuyo que estamos pasando por un momento inmenso, tal vez comparable con el punto de quiebre que supuso el descubrimiento del alfabeto por parte de los Fenicios. También hay escépticos para quienes todo esto terminará siendo no mucho más que un nuevo "pregúntele a Google" -como si eso fuera poco-, y optimistas moderados que, como Daron Acemoglu, consideran que las expectativas que se han creado son tan exuberantes que es imposible que la realidad las satisfaga. Aún en el inmenso espacio que hay entre todas estas versiones, lo que estamos viviendo es como mínimo revolucionario. Tal vez lo único que está en discusión es el alcance de esa revolución.

Estas tecnologías pueden ayudarnos a cerrar radicalmente las brechas en educación, a transformar la comunicación entre las múltiples dependencias del Estado y los ciudadanos y a dar un salto en la administración de justicia. Por ejemplo, usar la IA para hacer mucho más expeditos procedimientos judiciales civiles po-

dría descongestionar los juzgados y permitir a los jueces concentrarse en los casos difíciles. Las aplicaciones de la IA a áreas de la formación básica y superior con elementos de lenguaje estructurado, como las lenguas y las matemáticas, también son deslumbrantes. Podremos contar con tutores artificiales que identifiquen los nudos mentales de los estudiantes y les ayuden a deshacerlos con ángulos explicativos y secuencias de ejemplos y problemas personalizados, de maneras en que los docentes humanos simplemente no podemos.

Y lo más importante es tal vez que podremos llegar con estas herramientas a todas las escuelas, colegios y universidades del país, en todas las ciudades, pueblos y en las zonas rurales más apartadas. Así mismo, las interacciones difíciles que hoy en día tenemos con diferentes agencias del Estado a través de formularios rígidos y de *call-centers*, para poner una denuncia, solicitar un pasaporte, pagar impuestos o solicitar una inscripción en un programa gubernamental, podrían volverse fluidas.

El Estado colombiano debería financiar una agencia que desarrolle nuestras propias versiones de IA. Como lo señala Juan David Gutiérrez de la Universidad de los Andes, los requerimientos técnicos y los dilemas éticos asociados a algunas de las aplicaciones más interesantes de estas tecnologías exigen reglas y desarrollos muy específicos. Este hecho debilita los argumentos de eficiencia detrás de simplemente comprarlas a terceros. No se trata de una quimera porque tenemos el capital humano de sobra para poder hacer bien la tarea.

Para terminar, el proceso legislativo y jurídico necesario para lograr usar estas tecnologías de manera estructural en el sistema judicial o en el sistema de educación puede tomar mucho más tiempo si debemos contratarlo con empresas privadas en el exterior. Ojalá el Gobierno entienda el momento en que estamos y enfoque su capacidad en esta meta. Sería un gran legado y para hacerlo, podría usar parte de los recursos de los hidrocarburos (no necesita desfigurar Ecopetrol para lograrlo). *ANIF*

SEMINARIOS ANIF 2025

6
DE FEBRERO

Seminario ANIF - Fedesarrollo
Bogotá

1

6
DE MARZO

Seminario ANIF Macroeconómico
Medellín

2

27
DE MARZO

Seminario Inteligencia Artificial
Bogotá

3

8
DE MAYO

Seminario Inclusión Financiera
Bogotá

4

29
DE MAYO

Seminario ANIF Macroeconómico
Cali

5

19
DE JUNIO

Seminario de Mercado de Capitales
Bogotá

6

14
DE AGOSTO

Seminario ANIF - CREE Seguridad energética
Bogotá

7

18
DE SEPTIEMBRE

Seminario de Infraestructura y Vivienda
Bogotá

8

16
DE OCTUBRE

Seminario de Sostenibilidad
Bogotá

9

6
DE NOVIEMBRE

Asamblea General de ANIF
Bogotá

10

Algunas fechas/lugares pueden estar sujetos a cambios.

Para patrocinios y alianzas en nuestros eventos, contacte a:

Maria Ines Vanegas – Gerente General
Email: mivanegas@publimarch.com
Cel: 310 561 7197

Ximena Fidalgo – Directora Comercial
Email: xfidalgo@publimarch.com
Cel: 312 457 5712

Ingrid Saponar – Directora de Cuentas
Email: isaponar@publimarch.com
Cel: 315 798 8270

Deisy Díaz – Ejecutiva de Cuentas
Email: ddiaz@publimarch.com
Cel: 322 723 4769

-Durante cinco décadas -

ANIF ha contribuido al debate de forma técnica y propositiva, ofreciendo claridad en momentos de incertidumbre y visión en momentos de oportunidad.



Hoy, **ANIF es un referente** para hacedores de políticas públicas, líderes empresariales y colombianos de a pie. Y continúa contribuyendo a la vibrante y retadora escena económica del país, con un propósito claro: **evidenciar que el progreso** depende de la capacidad de fomentar una **economía de libre empresa** que genere **riqueza y bienestar compartido**.